

Crisis y revolución en Europa

PEOPLE OF EUROPE RISE UP!

traficantes de sueños

Crisis y revolución en Europa

People of Europe, rise up!

Observatorio Metropolitano

traficantes de sueños

Traficantes de Sueños no es una casa editorial, ni siquiera una editorial independiente que contempla la publicación de una colección variable de textos críticos. Es, por el contrario, un proyecto, en el sentido estricto de «apuesta», que se dirige a cartografiar las líneas constituyentes de otras formas de vida. La construcción teórica y práctica de la caja de herramientas que, con palabras propias, puede componer el ciclo de luchas de las próximas décadas.

Sin complacencias con la arcaica sacralidad del libro, sin concesiones con el narcisismo literario, sin lealtad alguna a los usurpadores del saber, TdS adopta sin ambages la libertad de acceso al conocimiento. Queda, por tanto, permitida y abierta la reproducción total o parcial de los textos publicados, en cualquier formato imaginable, salvo por explícita voluntad del autor o de la autora y sólo en el caso de las ediciones con ánimo de lucro.

Omnia sunt communia!

El Observatorio Metropolitano de Madrid (www.observatoriometropolitano.org) es un colectivo híbrido de investigación e intervención política formado por activistas y profesionales de distintos ámbitos. Su principal propósito es ofrecer síntesis críticas sobre las principales líneas de transformación de las metrópolis contemporáneas. Se trata de una labor desgraciadamente abandonada por la mayor parte del trabajo académico e institucional pero que resulta extremadamente urgente para emprender cualquier acción política democrática digna de tal nombre. Entre sus principales publicaciones se deben mencionar: *Madrid ¿la suma de todos? Globalización, territorio, desigualdad* (Traficantes de Sueños, 2007) y *Fin de ciclo. Financiarización, territorio y sociedad de propietarios en la onda larga del capitalismo hispano* (Traficantes de Sueños, 2010).

Primera edición: 2000 ejemplares.
Octubre de 2011
Título:
Crisis y revolución en Europa
Autor:
Observatorio Metropolitano
Maquetación y diseño de cubierta:
Traficantes de Sueños.
taller@traficantes.net
Edición:
Traficantes de Sueños
C/ Embajadores 35, local 6
28012 Madrid
Tlf: 915320928
e-mail: editorial@traficantes.net
Producción gráfica:
Gráficas Lizarra
Tlf: 948 556410
ISBN: 978-84-96453-63-0
Depósito legal: NA-3148-2011

Crisis y revolución en Europa

People of Europe, rise up!

Observatorio Metropolitano



Indice

Prefacio

Ningún grito se escucha hoy con más fuerza en las plazas europeas: «La crisis es una estafa», o también «No pagaremos la crisis». Así lo expresan los indignados griegos, el 15M de las plazas españolas, los huelguistas de Francia en 2010 y con otras resonancias, las revoluciones de los países del otro lado del Mediterráneo.

Desde que comenzara oficialmente la crisis, la avalancha de reformas y recortes sociales no parece haber conducido a la esperada curva de recuperación. Antes al contrario, la obcecación en las políticas de austeridad, los privilegios de las élites financieras y, sobre todo, el ataque a la deuda soberana de un número cada vez mayor de estados han llevado a la Unión Europea al anuncio de una nueva recesión. Y con ribetes aún más sombríos, a una pendiente de involución y degeneración política que amenaza con llevarse por delante el proyecto europeo, moneda única incluida.

Lo que parece en juego es pues el futuro del continente. A un lado, la insistencia en lo mismo; políticas en beneficio de unos acreedores —los grandes agentes financieros del continente— que apostaron todas sus energías al beneficio basado en el crédito barato y la especulación financiera. Se trata de los mismos agentes, que hoy ven amenazadas sus posiciones por una crisis que ellos mismos provocaron y de la que sólo saldrán de pié a costa de imponer un largo periodo de galeras y de esclavitud por deudas a las poblaciones

europeas. Al otro, el emergente movimiento europeo, la posibilidad de reinventar la democracia y de invertir la involución política y social en un proyecto de otro tipo.

Como se puede adivinar, lo que sirve a la polémica en este conflicto es la propia definición del concepto de riqueza. De una parte, de nuevo, aquéllos que sólo ven la riqueza en los términos de su expresión formal —moneda, propiedad o título financiero— cuyos propietarios pueden y deben intercambiar con seguridad y garantías, sin mayores trabas que el legítimo derecho a hacer lo que les venga en gana. De la otra parte, los que en esa enorme riqueza financiera sólo pueden reconocer el producto social largamente expoliado en forma de hipotecas, créditos al consumo, ataques a la deuda pública, mercantilización y privatización de las pensiones, la educación, la sanidad, etc.

¿Qué hacer, por lo tanto, en una coyuntura que se mide en una escala tan gigantesca, e inaprensible, como Europa? Sin duda seguir al movimiento, tratar de armarlo de razones, apoyar sus apuestas estratégicas, ayudar a proyectar su dimensión europea. En esta dirección, este libro quiere ser un manifiesto, una proclama, una herramienta no sólo de análisis, sino también de agitación, revuelta, revolución.

Pero hablar de «revolución» en referencia a lo que hoy sucede en Europa ¿no deja de sonar algo anacrónico y extemporáneo? ¿En qué se parece lo que hoy ocurre en Europa con la Francia de 1789 o la Rusia de 1917? Seguramente en poco o nada. Y sin embargo, hay algo que comparten: el profundo divorcio entre las mayorías sociales y sus gobernantes, entre la vida corriente y las instituciones representativas, entre el cuerpo social y los grandes ordenamientos económicos que invariablemente prescriben el privilegio financiero. Sólo por esta razón, la palabra revolución se vuelve legítima y recupera sus viejas resonancias, hasta el punto de convertirse en la voz de quienes forman ya el movimiento europeo. De este modo, si en la Puerta del Sol o en la Plaza Syntagma se dice «somos

una revolución», es en primera instancia, porque ésta viene «obligada» por las circunstancias; porque se sabe que no hay ningún lugar, ningún punto, ninguna palanca en las instituciones públicas, que hoy sirva a la reforma. La misma reforma que debiera poner coto a la predación financiera, que debiera promover la racionalización ordenada del reparto de la riqueza y rearticularse en la institucionalización de una democracia más creíble y legítima, aunque sólo fuera para apuntalar, sin el actual espíritu suicida, los mismos ordenamientos sociales y económicos que hoy constituyen Europa.

En otras palabras, el movimiento habla de revolución, y se declara como una «revolución democrática», en la medida en que no hay una democracia en la que mirarse y reconocerse, y en que ésta sólo se puede ejercer al margen del sistema de partidos, de las elecciones representativas y de las instituciones europeas. Su primera enseñanza se desprende así de su propia constitución, esto es, de la renuncia a toda posición de espera, esperanza y responsabilidad con respecto de la clase política y las élites económicas. Lo que estos años nos debieran dejar meridianamente claro es que si no ha habido otra «solución» a la crisis, más allá del continuo hundimiento en la misma que prescribe el capital en dinero, es porque las élites políticas son presas de la misma ideología y de los mismos intereses que nos llevaron a la crisis. Cuando hoy en Europa, se ordena «salvar a los bancos contra y por encima de las poblaciones», se prescribe también que la única salida posible pasa por la privatización de los servicios públicos, mayor precariedad laboral, la permanente condena al desempleo para las poblaciones «superfluas» —siempre las más frágiles y de menores recursos— y una pauperización de masas que el continente no ha conocido desde los tiempos de la gran postguerra de 1945.

La paradoja de esta situación es que si se admite que no hay espacio para la responsabilidad y la confianza en las élites europeas, que éstas carecen de autonomía respecto del capital financiero, tampoco cabe lugar para el miedo. En

efecto, si admitimos que la crisis está dirigida políticamente, y que la gestión de la misma está únicamente preocupada por preservar los privilegios de unos pocos, sólo la indignación se muestra como un afecto útil y sólo la política, recuperada por todos, aparece como una práctica eficaz. Es esto mismo lo que parece haber descubierto el movimiento europeo y a lo que este texto pretende aportar.

* * *

Este manifiesto ha sido elaborado por el colectivo de investigación y militancia, Observatorio Metropolitano, en el marco del desarrollo del movimiento 15M. Su contexto obligadamente «español», y en concreto madrileño, no impide que la vocación del texto sea europea y que su perspectiva y propósito se midan, en todo momento, más allá de los siempre estrechos marcos estatales o «nacionales». En este sentido, deseamos y esperamos, que este material (u otros parecidos) sea traducido y publicado en otras lenguas europeas.

En el texto se han prescindido de las notas y fuentes de las que provienen la mayor parte de sus afirmaciones y que ampliaban innecesariamente el número de páginas. Para un desarrollo más exhaustivo de los argumentos aquí contenidos se pueden consultar los trabajos del Observatorio Metropolitano en: www.observatoriometropolitano.org

I. No es una crisis, es una estafa

¿Por qué la crisis debería ser un problema? ¿Por qué en sociedades que son dos veces más ricas que hace 30 años, se nos dice que no «hay» dinero para mantener los derechos sociales, y al tiempo se nos presenta como una reivindicación imposible el acceso a una renta digna para todos? Se trata de preguntas de Perogrullo, que sin embargo han sido purgadas y expulsadas del discurso corriente en los medios de comunicación.

La crisis ha sido desde el principio una gigantesca estafa. Ninguno de los llamados programas de ajuste que se han impuesto en los últimos cuatro años tiene justificación en la presunta naturaleza de los asuntos económicos. Todas y cada una de las medidas que se vienen aplicando, y que se querrán aplicar en los próximos años —flexibilización y precarización de los mercados de trabajo, estrechamiento del derecho a una pensión digna, privatizaciones—, no están dirigidas tanto a salvar una situación económica que ha dejado ya a más de 30 millones de europeos sin acceso a una renta regular, como a reforzar los intereses de las élites financieras del continente. En este sentido, la intuición de los movimientos europeos es del todo certera, «Nos están robando», al igual que su voluntad de no ceder al chantaje, «No pagaremos la crisis». A la hora, no obstante, de entender con algo más de profundidad de qué modo y por qué las élites económicas y la clase política europea están gestionando de

esta forma la crisis, y sobre todo, a la hora de reconocer algunas preguntas que esta situación lanza a los movimientos europeos —y que seguramente ya no pasen por ninguna de las soluciones convencionales de la izquierda: empleo, cambio de modelo productivo, racionalización financiera, etc.—, es preciso analizar, al menos, tres grandes problemas. 1) La actual forma del capitalismo tiene poco o nada que ver con los viejos modelos basados en la producción —de bienes y servicios— que todavía manejan la mayor parte de los economistas: nuestro tiempo es el de la financiarización y el gobierno del beneficio financiero. 2) La actual fase de la crisis, la de la deuda soberana, que encamina a algunos países europeos a la bancarrota, es un resultado por completo arbitrario, derivado de unas políticas monetarias y una arquitectura institucional que funciona sólo en provecho de los grandes agentes financieros del continente. 3) En esta crisis están en juego todos los equilibrios sociales, políticos y económicos de la Unión Europea. Estamos asistiendo, en efecto, al más poderoso ataque que hayamos conocido al Estado «social»; y lo que es aún más intrigante, a la amenaza, cada vez más real, de una posible involución suicida del proyecto europeo.

El gobierno de las finanzas

Nuestro tiempo viene marcado por un gigantesco desequilibrio. Éste está trabado en la contradicción que se produce entre la enorme riqueza acumulada, nominada en títulos financieros, y el gobierno y la administración de la misma contra y frente la posibilidad de una distribución social más equitativa y sostenible.[1] Si por un lado se calcula que el valor

1 Se trata del problema central de nuestro tiempo. En la medida en que la riqueza financiera se ha convertido progresivamente en la medida absoluta de la riqueza *tout court*, se pierde el rastro de lo que en última instancia nomina y representa el dinero, o por defecto los títulos financieros. Esto es: los activos naturales privatizados, el expolio natural del planeta que nunca se incluye en los precios, la extracción de rentas sobre el trabajo vivo y la cooperación social por medio de la proliferación

de los bienes y servicios que se producen en el planeta (el llamado Producto Interior Bruto Mundial) es de 60 billones de dólares, por otro, se estima que en los mercados financieros hay una cantidad entre 4 y 7 veces mayor, entre 240 y 400 billones de dólares. Esto quiere decir que por cada dólar de un bien o servicio que se produce en un año existen al menos otros 4 con capacidad de comprarlo.

En principio esto no tendría por qué ser un problema, no al menos si una parte significativa de este dinero se dedicase a inversiones en equipamientos sociales, económicos o ambientales. Obviamente, tales volúmenes de riqueza financiera podrían tener una infinidad de aplicaciones útiles en caso de estar sometidos a unos mínimos controles democráticos. El acceso a la educación y a la salud para todos los habitantes del planeta, la erradicación del hambre en los países más pobres o la puesta en marcha de las medidas de reconversión energética necesarias para detener la sigilosa y criminal marcha del calentamiento global, sólo supondrían una proporción increíblemente pequeña de la riqueza financiera mundial. Se calcula que todos estos programas juntos no consumirían más allá del dos o el tres por ciento de la riqueza financiera mundial.

Lejos, sin embargo, de cualquier escenario que apunte en este sentido, la riqueza financiera se ha convertido en una suerte de fin en sí mismo. A efectos del capital financiero, y sobre todo de sus propietarios y gestores, lo único que importa es la búsqueda del rendimiento más alto en el plazo de tiempo más corto posible. Por decirlo de forma muy sintética, el capitalismo actual, nuestro capitalismo, no se basa ya en modos de obtención del beneficio que pasen, necesaria y obligatoriamente, por la producción de bienes y servicios, sino, antes bien, por la compra y venta de activos financieros —como

---

del préstamo y las provisiones financiarizadas (como hipotecas, fondos de pensiones privados), etc. En este sentido, la riqueza financiera, y en general lo que más abajo se llama financiarización, es tanto una forma de «expresión» contable de la riqueza social general, como un modo de gobierno y expolio de la misma.

acciones, bonos de deuda, títulos de propiedad, opciones de futuro, etc.— que se pueden intercambiar para obtener una rentabilidad a corto, o incluso muy corto plazo, sin la mediación de producción alguna.

Esta transformación económica es tan gigantesca que desde hace casi dos décadas los beneficios financieros son ya, en las principales economías occidentales, mayores que todas las otras formas de beneficio juntas —esto es, aquéllas que comprenden la producción e intercambio de bienes y servicios o la extracción de recursos naturales. Las consecuencias son increíbles y de hecho todavía no somos capaces de calibrarlas del todo. Hay al menos tres cambios significativos que merece la pena discutir.

En primer lugar, cuando la mayor parte del beneficio tiende a coincidir con alguna forma de renta financiera (o inmobiliaria), el beneficio del capitalista pierde toda esa vieja justificación que se hallaba en la respetuosa veneración de su trabajo: la coordinación y la organización de la producción. En consecuencia, y en segundo lugar, en el nuevo marco dirigido por las finanzas, la figura del capitalista tiende a confundirse antes con la imagen del rentista que con la del empresario. Nada de esto viene ocultado. En la jerga financiera y en los medios de comunicación, el capitalista prototipo se conoce con el nombre de «inversor». Quizás la única diferencia sustancial respecto al rentista clásico, que gestionaba de forma pasiva el alquiler o la cesión de una propiedad (normalmente inmobiliaria), es que el inversor lo hace de una forma activa, a través de la búsqueda de las colocaciones más rentables para «su» capital, lo que consigue por medio de una rápida y flexible adaptación a las oportunidades de revalorización. En tercer lugar, el capitalismo financiero, en la medida en que se independiza cada vez más de la producción real de riqueza, se vuelve parasitario de las formas reales de producción. Esto mismo se ejemplifica en muchos de los conflictos económicos actuales, por ejemplo, entre el capital financiero y las pequeñas y medianas empresas. Como se sabe, estas últimas generan la

mayor parte de los bienes y servicios (además del empleo) de nuestras economías, y sin embargo son obligadas a plegarse a una posición de perfecta subordinación a los propietarios del capital —bancos, entidades financieras y grandes corporaciones, así como rentistas y propietarios inmobiliarios.

Para que se entienda bien, incluso las grandes corporaciones industriales (como las del automóvil) obtienen hoy más beneficios por vías financieras —a través por ejemplo de la emisión de acciones o la compra-venta de activos financieros— que de su propia producción real. La principal conclusión de este conjunto de transformaciones es que la promesa capitalista de producir mercancías cada vez más baratas y asequibles se vuelve, punto por punto, una promesa obsoleta y vacía, más propia de otros tiempos o de una lejana utopía liberal definitivamente desplazada a golpe de burbuja especulativa y voracidad financiera.

Estos desplazamientos, del capitalismo productivo al capitalismo financiero, del beneficio a la renta, del empresario al rentista inversor, pueden ser condensados en un único concepto: *financiarización*. Con este término se viene a señalar que la riqueza es ante todo riqueza financiera, o mejor dicho, que toda forma de riqueza está tendencialmente relacionada y sometida a algún tipo de instrumento o útil financiero. En buena medida, esto es posible porque la ingeniería de las finanzas permite jugar con los tiempos económicos, trayendo al presente beneficios futuros o desplazando al futuro riesgos que en principio podrían ser inasumibles a día de hoy.

Así, por ejemplo, si alguien quiere comprar una vivienda puede hacerlo a través de comprometer los rendimientos que obtendrá de su trabajo al pago de un préstamo hipotecario. Ese mismo banco puede obtener el dinero que le presta al trabajador vendiendo la deuda hipotecaria a terceros —esto es lo que se llama titulización—, lo que hace por medio de la creación de un título financiero que soporta esta deuda y que se empaqueta y vende como un bono con una rentabilidad

financiera a largo plazo. Por su parte, el comprador de esa deuda puede asegurar esa rentabilidad a través de la compra de otro activo financiero que a modo de seguro garantiza al menos una parte de su valor —son los llamados mercados de derivados. A su vez, la empresa que emite o garantiza el valor de esas opciones de futuro podría también revender esos útiles financieros especiales a terceros. Y así sucesivamente. Y así también en multitud de aspectos que tienen que ver con grandes agregados monetarios, como las cuentas del Estado que emite bonos de deuda para poder hacer frente a sus gastos corrientes; las cuentas de las economías domésticas, que recurren a los mercados para garantizarse unas buenas pensiones o el acceso de sus hijos a la Universidad; o las empresas que emiten acciones y aseguran buena parte de sus beneficios en los mercados financieros.

Las ventajas de la ingeniería financiera a la hora de facilitar una multitud de interacciones económicas son indudables. Sin embargo, sus presuntas bondades, y sobre todo su compleja y artificiosa matemática, no deberían impedirnos ver la enorme debilidad de sus cimientos, además de los poderosos efectos de dominio y sometimiento que implican. Por decirlo de una forma muy resumida, para comprender la financiarización es preciso reconocer estos tres factores que parecen determinar toda su maquinaria: 1) la financiarización sólo puede operar en un contexto de permanente expansión financiera; 2) ésta se produce por medio de una multiplicación de las deudas y obligaciones a futuro; y 3) la financiarización supone una fuerte concentracion del mando económico.

La financiarización es siempre expansión financiera

La financiarización requiere de una permanente inyección monetaria. La principal exigencia para su correcto funcionamiento es una continua y sostenida entrada de dinero líquido. Por decirlo con un ejemplo concreto, la escalada de precios

del valor de las acciones de una empresa requiere que nuevos inversores pujen al alza sobre el valor de esas acciones. Y lo mismo sucede en una burbuja inmobiliaria. En el caso del ciclo inmobiliario español de 1997-2007, la subida continua de los precios de la vivienda se mantuvo gracias a la ininterrumpida entrada de nuevos compradores que venían o bien del extranjero o bien del mercado doméstico, y que en su mayoría obtuvieron el dinero que permitió la expansión del mercado a través del recurso al crédito hipotecario.

En esta misma línea, la financiarización exige una permanente expansión horizontal de los ámbitos posibles de inversión financiera, así como una creciente expansión vertical (y temporal) de las oportunidades de negocio. El método de progresión de la expansión financiera contiene *in nuce* la creciente complejidad y capilaridad social de los útiles financieros. Tres décadas de desregulación financiera han hecho, en esta dirección, un trabajo extraordinario. Por un lado, las finanzas se han extendido, o han profundizado su dominio, sobre ámbitos tan dispares como la negociación de los valores futuros de las empresas, los precios de las cosechas y la financiación de los Estados. Además los mercados financieros se han convertido en un pieza determinante en el acceso a la vivienda mediante el crédito hipotecario, en el acceso a las pensiones a través de los fondos de pensiones, a la salud por medio de los seguros médicos privados y a la Universidad por intermediación de los préstamos al estudio. Por otra parte, y como veíamos antes, en muchos casos, el mismo «activo» u «obligación» —por ejemplo, el préstamo hipotecario que se concede a una familia— está sometido a una larga cadena de títulos y obligaciones financieras que permiten la compra y venta de esa misma deuda varias veces pero bajo útiles financieros diferentes. El hecho más importante aquí es, que por larga que sea esta cadena, la rentabilidad de todos los útiles financieros comprendidos en la misma depende en última instancia de que el primer prestatario cumpla con sus obligaciones. De este modo, la sofisticación de la ingeniería financiera se convierte tanto

en un método de disipación de riesgos —de dudoso éxito a la vista del *crash* financiero de las *subprime*— como de contagio de los mismos.

Como se ve, una de las consecuencias más notables de la expansión financiera es que para que todo este juego de obtención de beneficios sea posible, ha sido preciso que esferas económicas y sociales que antes estaban fuera del ámbito financiero —como las pensiones, la vivienda, la sanidad, la educación— sean efectivamente *financiarizadas*. Normalmente esto implica la retirada del Estado o de cualquier otra forma de provisión colectiva de algunos servicios que podríamos considerar cruciales para la reproducción social, y por ende la vida. No es nada casual que el Estado de bienestar sea un obstáculo para el avance de la financiarización, y que su liquidación permita la entrada de una gran cantidad de masa monetaria que proviene de unas familias al mismo tiempo «liberadas» de la tutela estatal sobre las garantías colectivas que «obligadas» a convertirse en minicentrales de inversión y gasto para obtener esos mismos recursos que antes se obtenían de forma colectiva.

Requisito imprescindible y último de la expansión financiera es la supresión de todas las barreras a la movilidad del capital, empezando por los controles que hasta hace 25 o 30 años imponían severos límites a los inversores extranjeros, para seguir con todas las regulaciones y gravámenes fiscales a la circulación y el beneficio financiero que puedan mermar la rentabilidad del capital. Considérese por ejemplo el hecho, siempre irritante, de que en la mayor parte de los países europeos, las rentas de capital tributen, de media, menos que las rentas del trabajo y menos también que los beneficios de las empresas productivas. ¿No es esto un premio a la especulación, o peor aún, una forma de institucionalización de la especulación?

La expansión financiera produce una multiplicación de las obligaciones

De un modo más directo deberíamos decir que la expansión financiera se produce por medio de una multiplicación continua de las deudas a futuro. Toda expansión financiera acaba, en efecto, generando una masa creciente de obligaciones que se encabalgan unas encima de otras. En las economías productivas convencionales, la concesión de créditos suele estar soportada por activos y capital presente o futuro. En cambio, en una economía basada en la expansión financiera, la creación de deuda a través de la concesión de crédito o la emisión de bonos y obligaciones puede que esté cada vez menos soportada por el capital disponible. Puede que éste sólo garantice el pago de los intereses de la deuda. O puede incluso, como ocurre en las fases terminales de una burbuja financiera, que la expansión financiera adopte una estructura piramidal, en la que no haya capital suficiente para pagar los intereses y se confíe, única y exclusivamente, en la revalorización de los activos que sirven de principal para esas deudas y en la entrada de capital externo al propio ciclo de inversión.

Dicho de otro modo, la expansión financiera, y la «forma burbuja» que parece acompañarla, tiende a multiplicar el volumen de deudas y obligaciones, lo que a la larga genera un desajuste en términos del capital disponible para soportar el pago de las mismas. La paradoja de este proceso, lo que los economistas llaman la «irracionalidad» de la economía de burbuja, es que la expansión financiera no se detiene justo antes del momento en el que muchas de estas obligaciones podrían resultar impagadas. Antes bien, con una expectativa de beneficio creciente, en las burbujas financieras se tiende a generar una increíble masa de títulos de deuda que durante un tiempo funcionan como dinero, aunque el capital disponible, que en principio debería garantizar el valor de estos títulos, hace ya tiempo que dejó de estar disponible en

cantidad suficiente. Por eso la expansión financiera desplaza sus propias crisis justo hasta el punto, siempre demasiado tarde, en el que ya no es posible aplazarlas por más tiempo.

No hace falta ir muy lejos para encontrar ejemplos de cómo operan estas contradicciones. La reciente crisis, desatada por el *crash* bursátil e inmobiliario de 2007, es un caso paradigmático de la inviabilidad a medio plazo de las dinámicas de expansión financiera. Buena parte de la burbuja financiera de los años dosmil, tanto en EEUU como en la mayoría de los países occidentales, estuvo basada en el extraordinario dinamismo de sus mercados inmobiliarios y en el espectacular incremento del precio de la vivienda. Se conjugaban aquí todos los factores mencionados. Por un lado, la burbuja inmobiliaria sólo alcanzó la intensidad conocida por la incorporación al mercado de los sectores sociales más frágiles. Pobres, jóvenes sin recursos, minorías, madres solteras, hacía largo tiempo abandonados por el Estado, fueron arrojados a los «mercados» para la provisión de todos y cada uno de los bienes y servicios básicos, incluida la vivienda. Las hipotecas concedidas a estos sectores en EEUU eran las conocidas hipotecas *subprime*.

El mercado inmobiliario estadounidense es, de hecho, un ejemplo de manual de cómo funciona una provisión social financiarizada. Y esto no sólo porque el acceso a la vivienda dependa del crédito hipotecario, sino también porque la deuda hipotecaria se ha convertido en un título financiero negociable. Como se ha mencionado, la operación que permite esta conversión se llama titulización. La titulización consiste básicamente en convertir activos no líquidos en liquidez inmediata por medio de la emisión de títulos financieros negociables en mercados organizados. En el caso que nos ocupa, la titulización de la deuda hipotecaria se realizó por medio de la creación de unos vehículos financieros especiales con garantía hipotecaria.[2] Cada uno de estos títulos reunía en un

2 Se trata de los *mortage-backed securities* (MBS). La particular pirámide financiera de estos años consistió en la emisión masiva de estos títulos

mismo paquete docenas o centenares de tramos de deuda de distintos préstamos hipotecarias —además de otros activos y obligaciones financieras de distinta índole— que luego eran vendidos a grandes bancos y fondos de inversión de todo el planeta.

Desde una perspectiva algo ingenua, y desde luego del todo alejada de la lógica financiera, prestar dinero para la compra de vivienda a sectores de población casi siempre al filo de la bancarrota podría parecer un negocio tan rentable como el de comprar papeletas de lotería. No obstante, la solución de los expertos financieros parecía, al menos sobre el papel, del todo cabal: además de establecer un complejo sistema de seguros, estos vehículos financieros estaban diseñados para dispersar el riesgo. Los instrumentos para conjurar la temible crisis financiera eran fundamentalmente dos: 1) un complejo sistema de «empaquetado» que metía en un mismo título tramos de deuda solvente, por ejemplo, de hipotecas a familias de clase media, pero también tramos de deuda de alto riesgo, por ejemplo hipotecas *subprime;* y 2) la distribución y venta de estos títulos a una gran cantidad de agentes financieros, lo que se suponía diluía la concentración de los riesgos. No hace falta insistir en que fue precisamente este sistema de control y distribución de riesgos lo que provocó el rápido contagio de la crisis por todo el sistema financiero internacional.

La contradicción de la expansión financiera se muestra aquí también en toda su radical arbitrariedad. Buena parte del negocio inmobiliario de esos años, estaba basado menos en la capacidad de pago de las familias que en la concesión de crédito. Los agentes inmobiliarios tenían todos los incentivos para conceder los créditos hipotecarios más improbables a las familias más desprotegidas, porque los bancos de

sintéticos, principalmente los llamados *collateralized debt obligations* (CDO), que se construían a partir de segmentos de hipotecas de distinto riesgo. A fin de controlar mejor los riesgos se establecieron también una suerte de seguros de impago, llamados *credit default swaps*.

inversión, que se encargaban de empaquetar las hipotecas y crear estos vehículos financieros, obtenían una altísima rentabilidad en las operaciones de titulización y venta de esos mismos activos en los mercados financieros.

Todo pareció funcionar mientras el precio de la vivienda continuó su rápida escalada. En el momento, sin embargo, en el que una parte significativa de las familias estadounidenses dejaron de poder pagar sus hipotecas, el castillo financiero se vino abajo. Los vehículos financieros, diseñados por unos «ingenieros» que nunca contemplaron tal posibilidad, perdieron todo valor de mercado. Los «inversores» entraron en pánico, y los gigantescos bancos de inversión estadounidenses se vieron incapaces de responder a las obligaciones que habían creado con sus propios productos financieros. Lehmans Brothers, Morgan Stanley y la principal aseguradora de estos vehículos especiales (AIG) entraron en situación de quiebra. El problema residía también en que los compradores de los llamados activos tóxicos[3] eran también los grandes bancos de medio planeta. Y esto es lo que nos lleva al último elemento sustantivo de la financiarización.

La financiarización imprime una fuerte concentración del mando económico

El neoliberalismo triunfante, en tanto excrecencia ideológica de la financiarización, no sólo legitima la figura del inversor privado, que tiene todo el derecho a colocar sus ahorros y su dinero donde mejor le parezca a fin de obtener la máxima

3 A principios de 2007 el valor de mercado de estos títulos con garantía hipotecaria era de varios billones de dólares. Poco después, a mediados de 2008, el valor de los títulos era prácticamente imposible de determinar. Sencillamente los modelos matemáticos que habían servido para poner precio a estos activos no habían previsto la posibilidad de una caída generalizada de los precios inmobiliarios. Los bancos, sabedores de que todos sus competidores tenían en sus carteras gran cantidad de estos títulos, dejaron de prestarse dinero unos a otros. El pánico era total.

rentabilidad; lo que según dicen redunda en una mejor asignación económica de las inversiones. Con la figura del inversor rey se presenta una imagen por completo distorsionada de lo que son los mercados financieros. Los apologetas de la financiarización presentan los mercados financieros como una plaza pública en la que se encuentran multitud de pequeños inversores —las familias occidentales de clase media— que invierten aquí o allá según la información de que dispongan. Lo cierto, sin embargo, es que el funcionamiento de los mercados es por completo distinto.

Las plazas financieras son cualquier cosa menos ágoras democráticas donde reinan las decisiones individuales. A fin de mostrarlo de una manera gráfica: sólo una veintena de grupos financieros —entre los que se encuentran nombres tan conocidos como Black Rock, J. P. Morgan, Allianz, HSBC, Citigroup, ING, BNP Paribas, Banco Santander, etc. — gestionan una masa monetaria que es superior al PIB de EEUU. La mayor gestora financiera del mundo, Black Rock, maneja activos por un valor similar a todo lo que se produce en Alemania en un año. Y Allianz, la segunda, maneja una cartera de inversiones por un valor mayor que el PIB de la India. ¿Se puede seguir hablando de mercados financieros, al menos en el sentido en el que habla la teoría económica cuando asimila la palabra mercado con unas condiciones de competencia perfecta?

Indudablemente, el movimiento de unos pocos de estos gigantes puede arruinar economías enteras, ya sea apostando contra la moneda de un país, ya contra la deuda de su sector público, tal y como ocurre hoy en Europa. Y sin embargo, es cierto que la mayor parte del dinero que gestionan estos gigantes proviene en última instancia de los depósitos y de las inversiones de la clase media de los países desarrollados. Eso sí, su participación en la euforia financiera es muy distinta a lo que nos ofrecen los repertorios ideológicos de los propagandistas del neoliberalismo. En la realidad financiera, los pequeños inversores, ejemplificados en las familias occidentales, delegan la mayor parte de las decisiones acerca de su dinero

en los gestores de los fondos de pensiones y de inversión, que: 1) captan estos ahorros gracias a las ventajosas condiciones fiscales arrancadas a los Estados; 2) integran en su cuenta de resultados la mayor parte de los beneficios financieros a través de abultadas comisiones de gestión y de participación; y 3) delegan en las mismas familias todos los riesgos de inversión relativos a la devaluación de sus propios activos. ¡Extraña forma de capitalismo popular, dirigido, gobernado y aprovechado por un puñado de grandes bancos y gestores!

Si esta posición de oligopolio financiero se coloca en el marco de la crisis que se inicia en 2007 se puede llegar a entender todo el desarrollo posterior de los acontecimientos. Las grandes entidades de crédito fueron las principales beneficiarias del ciclo financiero-inmobiliario de los dos mil. El esfuerzo hipotecario de millones de familias estadounidenses y europeas fue provechosamente convertido en los amplios márgenes de beneficio financiero de aquellos años. Pero cuando este esfuerzo empezó a verse imposibilitado por unos precios de la vivienda imposibles y unas condiciones hipotecarias completamente abusivas, los mencionados mecanismos de contagio extendieron primero, la amenaza de una falta de liquidez, y luego, la sombra de la insolvencia sobre el conjunto del sistema financiero.

La reacción, quizás todavía confusa e incongruente para los principales amantes y defensores de la economía más ortodoxa, fue el recurso al Estado. El TARP estadounidense y los fondos de rescate europeos, dirigidos a inyectar liquidez en los bancos, emplearon cifras extraordinarias que sumaron varios billones de dólares de dinero público.[4] Desde entonces, y pasados los

4 Entre principios de 2008 y finales de 2009 los distintos países de la Unión Europea comprometieron 3,7 billones de euros en rescates bancarios, con Reino Unido (con 781.000 millones de euros) y Alemania (con 555.000 millones) a la cabeza. Al otro lado del Atlántico, EEUU se empeñó en programas aun más ambiciosos, que empezaron a adquirir «escala» con los 180.000 millones de dólares que costó la refinanciación de AIG, para seguir con los 700.000 millones de dólares del programa *Troubled Asset Relief Program* (TARP) o Programa de Alivio de Activos

primeros momentos de pánico, los grandes agentes financieros se han lanzado a la ofensiva. En 2008, y luego en 2011, encontraron oportunidades de rentabilidad muy alta y a corto plazo en los mercados de futuros de las materias primas y del petróleo.[5] Provocaron así subidas espectaculares de los precios, con graves efectos económicos y sociales en muchos países, entre los que debemos mencionar —junto a otras causas— la primera gran hambruna del siglo XXI en el Cuerno de África. En cualquier caso, y especialmente para los grandes gigantes financieros del continente europeo, el principal mecanismo de recomposición de sus beneficios se ha fundado en el chantaje sobre los mismos Estados que antes habían garantizado su rescate.

Dicho de forma sencilla, la consecuencia más importante de la financiarización es que ha generado un grado de concentración del mando económico, y por ende del control político, quizás nunca antes visto en la historia.

La crisis de la deuda soberana europea

Rebobinemos. Como se ha visto la crisis económica tuvo su origen en las débiles bases de la expansión financiera de los años dosmil y en la gigantesca creación y posterior titulización del

---

Depreciados. Como se sabe el TARP sirvió para inyectar miles de millones a los bancos de inversión, que en una parte no pequeña acabaron convertidos en bonus extraordinarios para los mismos ejecutivos que habían obtenido unas «pérdidas extraordinarias». Se calcula que, en este país, se han comprometido cerca de 12 billones de dólares en avales, ayudas e inyecciones financieras a las grandes corporaciones, una cantidad similar al 80 % del PIB de la todavía primera economía mundial.

5 Los mercados de futuros de materias primas, llamados *commodities*, nacieron a fin de asegurar el precio futuro (y por lo tanto la ganancia) de las materias primas frente a fluctuaciones imprevistas de sus precios. Actualmente, y gracias al enorme desarrollo y la fuerte opacidad de los productos derivados, los mercados de futuros de materias primas son un importante sector refugio de los grandes inversores cuando no hay posibilidades de colocación rentable en otros mercados. Esto les convierte en presa fácil de fuertes movimientos especulativos.

crédito hipotecario. En esta expansión jugaron un papel importante la mayor parte de las grandes entidades financieras comprometidas tanto en el ciclo inmobiliario estadounidense, como en el de sus respectivos países (España, Reino Unido, Irlanda, los países del Este). Frente al contagio de la crisis financiera y su desastroso impacto en la economía real, debido a la huelga de crédito de las principales entidades bancarias, los Estados europeos reaccionaron en una triple dirección. 1) Aprobaron programas de expansión del gasto público y de subvención del consumo privado con el objeto de mantener la actividad económica. 2) Inyectaron una enorme cantidad de liquidez a sus propios sistemas bancarios —y también a los principales agentes corporativos comprometidos en los respectivos negocios inmobiliarios— con el fin de restablecer el crédito. Éste no se reactivó, pero el dinero público sirvió para «rescatar» a bancos y empresas, en lo que propiamente se debería considerar un vasto programa de socialización de pérdidas. Y (3) comprometieron una parte de sus gastos en paliar los efectos sociales más inmediatos de la crisis, principalmente a través de los subsidios de desempleo. Sólo gracias a este tipo de intervenciones públicas, se logró impedir la pendiente catastrófica que parecía seguir al *crash* financiero. Obviamente, la fuerte expansión del gasto público, en un momento de contracción de los ingresos implicaba el recurso al endeudamiento y por consiguiente un rápido crecimiento del déficit.

Sea como fuere, a finales de 2009, y sobre todo de 2010, cuando lo peor del golpe financiero parecía haber sido absorbido tanto por los Estados europeos como por sus poblaciones, cuando la inmediata quiebra de los principales bancos europeos parecía expurgada del escenario inmediato, se produjo un giro radical de las estrategias económicas. De la necesidad de una «moratoria al capitalismo» que pronunciara Sarkozy en los primeros meses de la crisis, la selva europea volvió a estar dominada por el creciente estruendo de los predadores financieros. En los informes expertos, en el debate político y en los medios de comunicación, el déficit estatal y la deuda pública fueron señalados como los principales responsables de la ralentización europea en su salida «natural» a la crisis.

La maquinaria ideológica de la economía ortodoxa y de sus propagandistas neoliberales estaba de nuevo a pleno rendimiento. Su argumento principal se enredaba, y se enreda, en la presunción de que la creciente deuda pública expulsa, por un lado, a la deuda privada —y por lo tanto reduce la concesión de créditos para generar inversión y empleo— y, por otro, y éste es el elemento más importante, condena el crecimiento económico de los países más endeudados. El pago de los intereses de la deuda hipoteca, ciertamente, su crecimiento futuro. Pero, en ningún caso se dijo que la misma condena a pagar unos intereses crecientes estaba siendo en realidad azuzada por los mismos médicos que aplicaban los tratamientos de austeridad. Y por supuesto, tampoco se quiso recordar que sin la fuerte expansión del gasto público, la depresión económica hubiera sido, sin lugar a ninguna duda, mucho más aguda y prolongada.

Este giro del discurso, y los primeros ataques financieros sobre la deuda pública de Grecia y de los países del Este, sirvieron de obertura de la mayor crisis de la deuda soberana de la historia europea, y también de la mayor ofensiva contra el bienestar social del continente. Ningún otro episodio económico demuestra de una forma tan clara la fragilidad del proyecto europeo y su estrecha vinculación con los intereses de las élites económicas y financieras regionales.

El desarrollo de los acontecimientos es relativamente conocido. A principios de 2010 salta a la prensa que el déficit griego era mucho mayor del que habían presentado a los reguladores europeos. Verdaderamente, Grecia había maquillado sus cuentas. Gracias a la ayuda del gigante financiero Goldman Sachs, había sacado algunos préstamos fuera de balance, al tiempo que dejaba convenientemente de lado importantes partidas de gasto público. La noticia fue inmediatamente aprovechada por los «mercados».[6]

6 La crisis de la deuda soberana de los llamados países periféricos ha sido desde el principio una operación política, que no se deja explicar bien detrás de un enunciado tan vago como la «presión de los mercados».

Durante 2009, Europa había sido objeto de un fuerte ataque financiero basado en juegos bajistas a corto sobre el valor euro, lo que había reducido su cotización respecto al dólar a niveles casi históricos. Bastó, en este contexto, la noticia de los maquillajes griegos para que la prima de riesgo de los bonos de deuda del país heleno se disparara rápidamente respecto al bono que sirve de referencia en Europa: el bono alemán. En pocos meses el diferencial de la prima de riesgo del bono griego a diez años se proyectó a 500, 600 e incluso 1.000 puntos básicos (un 10 % más en términos convencionales).[7] Por primera vez, en la historia de la Unión, un Estado europeo corría el serio riesgo de verse incapaz de hacer frente tanto a sus gastos corrientes como al pago de los vencimientos de la deuda. En ausencia de una intervención rápida del Banco Central Europeo (BCE) o de la UE, el único recurso, el último, parecía un peculiar rescate *á la européen* de la mano de un brutal plan de ajuste.

Desde 2010, los ataques a la deuda griega fueron el resultado de los acuerdos secretos de varios fondos de inversión estadounidenses y europeos que organizaron ventas masivas de bonos. Éstas hundían los precios de los mismos y permitían de nuevo compras masivas con tipos de interés más altos. Por otro lado, la crisis debe ser leída también en términos políticos en el sentido de que es el fuerte déficit democrático de la Unión Europea y la servil pleitesía de su clase política a las élites europeas lo que ha permitido, y a la postre agravado, el mecanismo de extorsión financiera sobre la deuda pública.

7 La prima de riesgo marca el sobreprecio en el tipo de interés que se supone se deriva de un mayor riesgo de impago. La prima de riesgo se define en la negociación de los intereses de los *credit default swaps* (CDS) de los bonos de un determinado país a un determinado número de años sobre el bono alemán. Los CDS, son derivados financieros, que funcionan como contratos privados de seguros sobre el valor y el riesgo de impago de los bonos reales. Una subida de la prima de riesgo, pongamos por caso de los bonos griegos, significa que este país tendrá más dificultades para subastar su deuda a un interés bajo. Por supuesto, la mayor parte del mercado de derivados sobre la deuda soberana no está bajo control de ninguna institución pública y las fuertes oscilaciones de la prima de riesgo de los bonos de algunos países, durante este último año y medio, no obedecen a los riegos reales de impago de esos Estados sino a movimientos especulativos contra el valor de su deuda.

Tras varios titubeos, y en consorcio con el FMI, los países centrales de la Unión acordaron prestar a Grecia 110.000 millones de euros (el 40 % de su PIB) en varios plazos con el fin de evitar lo que podía convertirse en una bancarrota del país. A cambio impusieron un riguroso plan de austeridad consistente en una drástica reducción del sector público, disminución de los sueldos de los funcionarios, aumento de la edad de jubilación, recorte de las prestaciones públicas y privatizaciones masivas. Dicho de otro modo, la devolución de los intereses de una deuda artificialmente inflada fueron puestos por delante de cualquier otro criterio de carácter político o social, pero también económico. La propia Unión Europea reconoció que el plan de austeridad supondría una contracción del PIB griego de un 4 % en 2010 y de un 3 % en 2011. Se trataba de la misma medicina que durante los años ochenta y noventa, el FMI se encargó de administrar a un buen número de países de América Latina, África y Asia. Para éstos, la crisis de la deuda externa, promovida por los bajos tipos de interés de la década de 1970 y por su rápido encarecimiento en la década siguiente, sirvió para reforzar la hegemonía financiera de Wall Street a costa del mayor retroceso social que algunos de estos países sufrieran desde su independencia. La diferencia es que ahora se trataba de un país europeo, integrado en el euro y miembro, por modesto que fuera, del club de los países ricos.

A fin de entender lo que realmente estaba sucediendo, y lo que todavía sucede, es preciso analizar, aunque sea brevemente, cómo funcionan los llamados mercados de deuda soberana. La deuda pública es por lo general un activo muy seguro pero muy poco rentable, esto es, parece muy improbable que un Estado deje de pagar sus deudas debido a su poder recaudatorio sobre una población que en su mayor parte no tiene más opción que permanecer en el país. A cambio, sin embargo, los intereses de la deuda pública son por lo general muy poco rentables. Durante 2007, 2008 y 2009, los principales agentes financieros dirigieron buena parte de sus inversiones hacia los mercados de deuda pública, asustados,

expulsados y en grave riesgo de quiebra por la enorme destrucción de liquidez que estaba produciendo la combinación de caídas bursátiles y colapsos inmobiliarios. De hecho, los grandes bancos europeos orientaron una parte significativa de las ayudas públicas que habían recibido —formalmente para animar un crédito completamente deprimido— hacia la compra de deuda pública. Al fin y al cabo, ésta era uno de los pocos valores seguros en un periodo de enorme incertidumbre.

Desde finales, no obstante, de 2009 y a caballo de las noticias griegas, se produce un interesante cambio de perspectiva. La presión sobre la deuda pública de los países más frágiles de la Unión Europea se estaba convirtiendo en un negocio tan rentable como sofisticado. La propia arquitectura financiera de la Unión permite, e incluso facilita, este tipo de movimientos especulativos contra la posición de algunos países concretos. Casi se podría decir que las instituciones económicas de la Unión, y especialmente el Banco Central, están diseñadas según los intereses específicos de sus élites financieras. A diferencia, en efecto, de sus más cercanos homólogos como la Reserva Federal estadounidense (FED), el Royal Bank of England o el Banco de Japón, el Banco Central Europeo no puede emitir bonos de deuda pública, y tampoco comprar los de los países miembros, salvo en condiciones muy excepcionales. Esto es de crucial importancia, pues cualquiera de estas dos líneas de intervención, aplicadas con cierta energía, hubieran evitado de raíz la crisis de la deuda soberana europea. Por otra parte, el BCE está diseñado como una institución independiente de cualquier control político, y por lo tanto alejada de cualquier prurito democrático. Su único mandato es el ajuste automático de los tipos de interés a la inflación, lo que despoja a los Estados de la zona euro de todas sus competencias en materia de política monetaria.

Dicho de otro modo, el Banco Central Europeo no puede prestar dinero a los Estados, pero sí puede, en cambio, prestar dinero a los bancos. Y esto es lo que ha hecho desde el principio de la crisis. El BCE ha prestado centenares

de miles de millones de euros a las principales instituciones financieras europeas en un voluminoso conjunto de operaciones *repo*. Éstas consisten básicamente en préstamos de euros con entrega de un paquete de valores que sirven como garantía y que el banco se compromete a recomprar. Como no podía ser de otra manera, los valores que los bancos entregaban como garantía no eran otros que los propios bonos de deuda que habían comprado con los euros prestados. Para que se vea claramente, durante estos años los grandes agentes financieros del continente han estado pidiendo préstamos con intereses por valor de un 1 %, con los que compraban deuda de los Estados europeos con tipos de interés que en algunos casos alcanzaban el 8, el, 10 o el 12 %. Nótese bien: ésta no es más que una gigantesca operación de rescate a la banca europea.

La otra pieza clave en el lucrativo negocio de la deuda europea son las llamadas agencias de *rating* o de evaluación de riesgos. Las agencias de *rating* surgieron para ofrecer claridad e información a los inversores acerca de la calidad de los productos financieros que compraban. Se supone que su labor fundamental es la de evaluar los valores financieros, o dicho de otro modo, el previsible riesgo y rentabilidad de los emisores de títulos, sean estos empresas, Estados o gobiernos locales. Su funcionamiento real es, sin embargo, cuando menos oscuro. Por un parte, el hecho de que sean necesarias agencias de evaluación para «informar» a los «inversores» acerca de la calidad de los activos financieros que ellos mismos adquieren en el mercado da prueba de la enorme opacidad del mundo de las finanzas. Pero las sospechas se multiplican todavía más cuando se constata que sólo tres grandes empresas (Standard & Poor's, Moody's, y Fitch) tienen una posición de total oligopolio a la hora de valorar la calidad de los productos financieros, y por lo tanto de orientar los movimientos de los mercados. A fin de juzgar su perspicacia, o mejor dicho su presunta objetividad, es preciso recordar que estas empresas mantuvieron notas de calificación mejor que buenas sobre corporaciones como Enron o Lehman Brothers hasta pocos

días antes de que aparecieran las noticias que anunciaban su debacle. Sea como fuere, han sido estas tres empresas las que han dirigido la operación contra los bonos de deuda griegos. Como se sabe, cada subida de la prima de riesgo sobre el bono alemán vino precedida por rebajas de la nota crediticia, hasta el punto de llegar a calificar la deuda griega como bonos basura, estos es, como una *no-inversión* con altísimo riesgo de impago.

Con este trasfondo, la crisis griega sólo podía ser la antesala de una ofensiva a escala continental. Desde principios de 2010, el ataque sobre la deuda griega se contagió rápidamente por el continente. Todos los países europeos, incluidos los países centrales tomaron buena nota del capítulo griego, adoptando planes de austeridad ante la simple amenaza de presión de los mercados. Valga decir que para algunos esto ha valido de poco. Hasta el otoño de 2011, otros dos países, Irlanda y Portugal, han recibido un tratamiento parecido al griego, y otros tres están en la sala de espera: Italia, España y Bélgica.

El caso irlandés es completamente paradigmático de la casuística de la crisis de la deuda, así como de sus principales consecuencias sociales y económicas. Como la mayor parte de los países europeos, en otoño de 2008, el gobierno de la isla acudió obediente a ayudar a sus principales bancos con un gigantesco fondo de rescate. El propio deterioro de su sistema financiero, llevó a Irlanda a la nacionalización de un importante banco local, el Anglo Irish Bank. El desembolso de una notable cantidad de dinero tenía un único fin: disolver rápidamente la preocupación de los acreedores británicos y continentales. Demostración en acto de que el axioma del «Estado como garante en última instancia», paradójicamente siempre consustancial al *neoliberal style*, sólo se puede traducir como el «Estado como ultimo recurso para la socialización de las pérdidas financieras». Sin sorpresa alguna, el enorme esfuerzo que supusieron los rescates bancarios disparó el déficit público que en el año 2009 alcanzó una cifra similar al 32 % del PIB irlandés. Por su parte, los «mercados»

reaccionaron elevando rápidamente la prima de riesgo, al tiempo que la calificación de las agencias de *rating* se desplomaba a «niveles griegos». En estas condiciones, en otoño de 2010, la UE acompañada por el FMI accedió a conceder un rescate al anémico tigre celta por valor de 85.000 millones de euros. Por supuesto, las presiones, como en el caso griego, no acabaron con el rescate, y en el verano de 2011 un nuevo ataque de las agencias de *rating* disparó el interés de la deuda por encima del 10 %.

En paralelo a la entrada en barrena de Irlanda, la deuda portuguesa avanzaba rápidamente por el mismo camino. El caso portugués es también algo especial, pues el país había participado más bien poco en los fastos financieros de los dosmil. Durante esos años, la expansión del gasto público dirigida a reanimar la deprimida actividad económica del país luso fue castigada por la Unión Europea con la estricta imposición de las prescripciones de Maastricht—unas prescripciones, recuérdese, que en esos mismos años Alemania y Francia habían sorteado con bastante laxitud. Para poner aún peor las cosas, la débil recuperación que se empezó a manifestar hacia 2007 se vio rápidamente truncada por la crisis financiera europea, la restricción del crédito y la necesidad de emitir de nuevo deuda pública, sin faltar tampoco los rescates bancarios.[8] La clásica secuencia de desplomes bursátiles, anuncios de un déficit creciente y aumento de la prima de riesgo de los bonos portugueses llevó al banco central luso a tener que colocar su deuda con intereses en torno al 10 %. En mitad de la primavera de 2010, al borde de una situación insostenible, Portugal aceptó un rescate por valor de 78.000 millones de euros, con el consiguiente paquete de recortes.

8 Si se quiere, el caso más sonado, y también el más demostrativo de lo que en última instancia significa la intervención del Estado, es el del Banco Popular de Negócios de Portugal. Esta entidad fue nacionalizada en 2008 con una inyección financiera por parte del Estado de 2.400 millones de euros. Apenas tres años después, el Banco fue vendido a una entidad angoleña por sólo 40 millones. El dinero público sirvió en este caso para sufragar las pérdidas de los gestores y accionistas del banco, responsables primeros y últimos de su bancarrota.

La caída de Grecia, Portugal e Irlanda puede haber sido sólo el primer precedente de un descalabro a escala continental. Esto es lo que ha estado a punto de suceder a caballo del último capítulo de la crisis griega en el verano de 2011. Poco antes, en el mes de marzo, la agencia de calificación Moody's había rebajado la nota de los bonos griegos a la condición de bonos basura. En respuesta, el Estado heleno, sometido también a una fuerte presión social, se vio obligado a amagar con un impago de la deuda. A resultas de la noticia, el pánico se desató en los mercados, las primas de riesgo de los países periféricos se dispararon por encima de las dos cifras, arrastrando también a los bonos italianos, españoles y belgas. La reacción alcanzó síntomas histéricos. Italia, por ejemplo, que hasta el momento se había visto relativamente al margen de la ola de reformas europeas, dio a conocer uno de los programas de ajuste y austeridad más severos de los países del euro: reforma del sistema público de pensiones, reducción del sueldo de los funcionarios, reorganización de las administraciones públicas, copago sanitario, etc.

Del otro lado, los guardianes financieros de la UE (los gobiernos alemán y francés y el BCE) titubearon hasta el último momento, tratando de determinar los costes y beneficios de una u otra medida. Finalmente aceptaron refinanciar la deuda griega con un nuevo plan de «rescate» por valor de 109.000 millones de euros. Esta cantidad serviría para hacer frente a los pagos de la deuda griega: esto es, estaba destinada en última instancia a acabar en manos de los grandes bancos europeos. Las contrapartidas para Grecia eran terribles, y venían de la mano de un nuevo y abusivo programa de privatizaciones.

Sin embargo, la respuesta de los mercados al plan griego fue cualquier cosa menos complaciente. A principios de agosto la prima de riesgo de la deuda pública española e italiana alcanzó la frontera de los 400 puntos sobre el bono alemán. Ya no se trataba de los pequeños países del euro, sino de la tercera y cuarta economía de la eurozona. En medio de una borrasca que amenazaba con convertirse en tempestad,

los «líderes» europeos aceptaron poner en marcha el último recurso. En los días siguientes, el BCE compró bonos españoles e italianos de forma masiva y la prima de la deuda de estos dos países descendió casi de forma automática.

Pero lejos de dar por terminado este capítulo, en las primeras semanas de septiembre se repitió de nuevo el proceso. Esta vez, el desencadenante fue una combinación de amagos de impago griego y fuertes caídas bursátiles, protagonizadas por los principales bancos europeos. El pequeño *crash* bursátil se desplazó rápidamente en forma de fuertes presiones sobre los bonos de los países europeos y, por primera vez, en una fuerte pérdida de confianza en el euro. El remedio provino del «extranjero» (una fuerte inyección de dólares de los principales bancos centrales del planeta) y de los rumores de ampliación del fondo de rescate europeo.

Durante esta breve pero intensa crisis veraniega, que seguramente es sólo la antesala de lo que puede suceder el próximo curso, las vacilaciones europeas han resultado cruciales. En este sentido, la actuación de Sarkozy y Merkel han sido la mejor demostración de hasta qué punto la clase política está atada de pies y manos a los intereses de los grandes bancos europeos.[9] Desde que empezara la crisis, los llamados líderes europeos han sido completamente incapaces de plantear una alternativa consistente a los ataques especulativos. La aplicación de los eurobonos, que desactivaría de un solo golpe la presión sobre la deuda soberana y que cada vez es

9 Recuérdese que estos son los principales tenedores de la deuda de los Estados, y por lo tanto también los principales interesados en obtener el máximo interés de estas «inversiones». En el rescate griego de 2011, la participación de los bancos fue uno de los grandes impedimentos a su desarrollo. Sólo cuando el impago, exigido a su gobierno por los «indignados» griegos, se convirtió en algo más que una amenaza, la mayor parte de los bancos europeos con «posiciones» en el país aceptaron una leve «quita» en sus beneficios: esto es, la reestructuración de la deuda con la fijación de un interés al 3,5 % (todavía muy superior al que obtienen del BCE) y la prolongación de los plazos de devolución.

más demandada por algunos sectores industriales, ha quedado pospuesta innecesariamente por la oposición alemana. Al mismo tiempo, el déficit público ha continuado siendo el mantra con el que comienzan todas las negociaciones políticas. Valga aquí recoger las dos últimas propuestas hoy en discusión en la UE: la retirada de los Fondos Estructurales Europeos —principal mecanismo de compensación de las desigualdades regionales dentro de la Unión— en caso de incumplimiento de las reducciones del déficit y la pretensión de incluir en los textos constitucionales el principio del ajuste presupuestario según el modelo alemán —lo que recientemente ha aprobado el obediente Parlamento español.

Con estos precedentes, lo que suceda en los próximos meses dependerá mucho de la elasticidad de los Estados para devolver las obligaciones contraídas. Durante 2010, la posibilidad de un impago parecía lejana incluso para el caso de Grecia, con mucho el país más endeudado de la Unión Europea —su deuda alcanzará más del 160 % del PIB a finales de 2011. En cambio, a mediados de 2011, éste era un resultado más que probable. La trampa de la financiarización, sobre la base del principio de la autosuficiencia y autorregulación, sigue en este caso una lógica inexorable. El sistema financiero, y con él la Unión Europea, amenaza con despeñarse en este particular precipicio: los bancos que compran los bonos de deuda soberana exigen mayor rentabilidad sobre los mismos, lo que supone un mayor coste, que a su vez incrementa el déficit público y la necesidad de más préstamos; esto aumenta el déficit redoblando la presión financiera sobre los gobiernos, y vuelta a empezar.

La trampa financiera europea

La burbuja de la deuda soberana europea obedece a una estrategia de beneficio financiero absolutamente cortoplacista. Sus resultados inmediatos son la austeridad y el deterioro

de los sistemas de protección social de todos los países de la Unión, pero especialmente de los más débiles (el Este, el Sur e Irlanda). A medio plazo, sus consecuencias pueden ser catastróficas, tanto para la recuperación económica del continente como para el futuro de la propia Unión. Cuatro son, en este sentido, los aspectos que parece necesario tener en cuenta a la hora de valorar los costes de la pleitesía de las políticas comunitarias a los intereses de sus élites financieras:

1. La estrategia de control del déficit público, y el castigo de la expansión del gasto público, por medio del rápido crecimiento de los intereses de la deuda, conlleva una condena segura al estancamiento económico. La presunción de los planes de austeridad, más allá del manifiesto cinismo que apoya los intereses bancarios por encima cualquier otro agente o criterio, es que el control del gasto público beneficiará a medio plazo la recomposición de los sistemas financieros locales, y por ende la inversión, las exportaciones y el consumo privado. Basta recordar los planes de ajuste del FMI en América Latina y África para aceptar que sólo han conseguido reforzar la posición de los acreedores a costa del futuro económico y social de sus poblaciones. Un análisis de la situación de los países de la UE no parece ofrecer ningún indicio de que la atonía del consumo público vaya a ser suplida por la inversión, el consumo privado o las exportaciones. La crisis financiera se ha trasladado al conjunto de la economía precisamente por medio de una fuerte depresión de la demanda agregada.[10] El único componente de la misma que evitó un desastre mayor fue el gasto público y en ninguno de los países, a excepción de Alemania, se puede decir que el consumo privado, las inversiones o las exportaciones hayan

---

10 La demanda agregada resulta de la suma del consumo de los bienes y servicios producidos en un mismo país. Sus principales componentes son el consumo privado de las economías domésticas, el gasto público en bienes y servicios, las inversiones de las empresas y la demanda externa (las exportaciones).

tomado el relevo en el impulso económico. La prueba de que esta condena está más cerca de lo que parece se encuentra en los últimos datos de crecimiento del eurogrupo: la región se aproxima de nuevo a la zona de recesión.[11]

Estos datos macroeconómicos son más o menos sintomáticos de los problemas estructurales del crecimiento económico, y por ende de la acumulación de capital en la Unión Europea, y en general en todos los países occidentales. Como se sabe, durante la década de los dosmil el crecimiento de EEUU y la Unión fue raquítico en relación, ya no con los bloques emergentes de China e India, sino con el crecimiento de sus propias economías antes de la década de 1980. En algunos casos, como Italia, Japón o la propia Alemania, se puede decir que durante las décadas de 1990 y 2000 sus economías pasaron una fase estacionaria con crecimientos en torno al 1 % o incluso menos. De otra parte, la particular *belle epoque* financiera de esos años y los casos de éxito más destacados entre los países desarrollados (como EEUU, Reino Unido o España) difícilmente se pueden anotar en una nueva revolución productiva como las que se puede reconocer en otras épocas históricas. Antes al contrario, el secreto de su crecimiento no obedece a ninguno de los patrones reconocidos en la economía ortodoxa. Sólo una particular secuencia de burbujas patrimoniales (el ciclo de las punto.com de 1995-2000 y las burbujas inmobiliarias de 2001-2007) ha permitido reconstruir, siempre de forma temporal y precaria, la demanda doméstica. Las revalorizaciones patrimoniales —a partir, por ejemplo, de las viviendas en manos de las familias— o la facilitación del crédito permitieron recomponer, durante un tiempo, una capacidad de consumo muy por encima de lo que permitían unos salarios invariablemente estancados. La contraparte de este crecimiento ha sido un imparable y espectacular

11 Los datos de crecimiento de la eurozona en el segundo trimestre de 2011 fueron de un 0,2 %. Alemania cayo de casi un punto de crecimiento en el primer trimestre, a sólo un 0,1, y Francia sólo consiguió un modesto 0,2.

incremento del endeudamiento de los principales agentes económicos: las familias comprometidas en el crecimiento de su consumo y su patrimonio a través del crédito, las empresas cada vez más endeudadas y dependientes de los mercados financieros, y las propias entidades financieras lanzadas a toda clase de prácticas de titulización y creación de nuevos útiles financieros. En algunos países, donde se ha aplicado una versión particularmente estricta de la ortodoxia neoliberal, el gasto público se ha mantenido en estos años a niveles realmente modestos, pero esto sólo ha sido posible por el dinamismo del consumo interno financiado a través del crédito.

Una vez que las burbujas patrimoniales dejaran al descubierto tanto la fragilidad de los balances de las grandes entidades financieras, como el imposible endeudamiento de las familias, el único componente de recuperación de la demanda parecía pasar de nuevo por el gasto público. El ataque sobre la deuda soberana suprime directamente esta posibilidad, y lo que es más grave, el encarecimiento del endeudamiento de los estados más débiles hipoteca todo su potencial de crecimiento futuro al pago de los intereses de la deuda. Así, se calcula, por ejemplo, que el pago de la deuda externa costará a los griegos el 15 % de su PIB anual en la próxima década. En estas condiciones, la crisis de la deuda soberana europea puede ser sólo la antesala de otra nueva depresión que a la postre afectará a todos los países europeos.

2. No es en absoluto previsible que los programas de austeridad vayan a resolver los problemas estructurales que llevaron a la crisis. Aunque parece del todo claro que las políticas de ajuste han estado determinadas por los intereses de los grupos financieros, el paquete ideológico que las acompañaba contenía algunas otras palabras que funcionan a modo de promesa de futuro, como «reestructuración productiva» y «aumento de la productividad». En última instancia, la disciplina fiscal y presupuestaria, las reformas del mercado de trabajo,

pensiones, etc., deberían animar (se supone) un aumento de la productividad y, por lo tanto, de la capacidad exportadora de los países más afectados.

En este marco ideológico, la explicación de la crisis de la deuda soberana ha señalado como principales responsables a los llamados países periféricos de la zona euro, por resumir: Grecia, Irlanda, Portugal, pero también España, Bélgica e Italia, los llamados PIIGS, según el sugerente acrónimo de las revistas financiaras.[12] A éstos habría que añadir también la larga lista de los países del Este no incorporados al euro. El apoyo a esta argumentación se encuentra en dos condiciones compartidas por todos estos países. La primera es el grave deterioro de su productividad industrial y de su capacidad exportadora durante los años dosmil. La segunda es que durante esta década su crecimiento, cuando se produjo, estuvo basado en el endeudamiento, lo que a su vez permitió financiar el consumo interno y también su creciente déficit externo. Estas dos condiciones, tal y como se puede intuir, no son sólo propias de los países periféricos de la UE. Se trata de un modelo compartido, en líneas generales, por muchos países occidentales como EEUU y Reino Unido.[13] La diferencia sustancial de los PIIGS respecto a los gigantes financieros, como EEUU o Reino Unido, es que éstos forman parte de la zona euro, lo que por un lado, y debido a la fuerte revalorización de esta moneda durante la última década, ha deteriorado aún más su posición exportadora, al tiempo que, por otro, ha permitido recomponer su capacidad de compra gracias al paraguas monetario exterior. Ésta, y no otra, es la condición de posibilidad de la gran «fiesta del sur de Europa», manifiesta en el crecimiento español —el mayor de todos los grandes países europeos.

12 El acrónimo PIIGS, en inglés cerdos (*pigs*), se refiere a Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España (*Spain*).

13 El déficit exterior de España alcanzó en 2007 el 10 % del PIB, el de Portugal se aproximó también a esa cifra y el de Grecia se disparó hasta el 14 %. Los datos de EEUU eran sólo levemente más bajos: el déficit exterior en 2007 fue del 6 % en relación a su gigantesco PIB.

Lejos, pues, de la propaganda que han lanzado las distintas derechas —siempre bien provistas de chovinismo y xenofobia— del norte y el centro de Europa, la capacidad de compra de los países periféricos proporcionada por el euro fue lo que efectivamente permitió recomponer el superávit de los países centrales durante la década de los dosmil, y especialmente de Alemania. Baste decir que este último país pasó de una posición de déficit moderado en la década de los noventa, a acumular un notable superávit en su balanza de pagos (un 7,6 % respecto a su PIB en 2007). En cierto modo, en la Unión Europea se ha reproducido, aunque a una escala más pequeña, el mismo intercambio que se produce a escala global entre EEUU y China. En este caso, el balance comercial favorable de Alemania se ha podido componer a partir de las exportaciones que este mismo país enviaba a sus socios europeos, y que todavía hoy, en plena crisis, comprenden más del 60 % de sus ingresos netos. En no poca medida, estas exportaciones eran correlativas al creciente déficit exterior de los países periféricos, que a su vez se sufragaba con inversiones y compras de activos de los países centrales en los países que experimentaban grandes burbujas inmobiliarias (España, Irlanda) o también por medio del préstamo y el crédito internacional canalizado por las empresas y las entidades financieras privadas.

En definitiva, la pertenencia a un euro que puja siempre al alza no puede facilitar, en ningún caso, una mejora de la productividad de estos países. De hecho, la fórmula de un euro caro, que beneficia a los intereses financieros de los grandes bancos, y una Europa periférica más empobrecida, condena a toda la región a un crecimiento renqueante, en el que las propias exportaciones alemanas (así como las escandinavas y francesas) acabarán dándose de bruces con un mercado interno (europeo) deprimido y una competitividad externa a la baja por un tipo de cambio monetario desfavorable.

Por último, la presunción de que las medidas de austeridad y las reformas estructurales van a aumentar la productividad de estos países a medio plazo choca también con otro

importante escollo. La estructura económica de la Unión Europea ha sido concebida para evitar la competencia industrial interna a través de un particular sistema de especializaciones económicas regionales. Por ejemplo, la incorporación de los países ibéricos en 1986 estuvo condicionada al desmantelamiento parcial —y en algunos sectores, total— de sus aparatos industriales. Las razones no se encontraban únicamente en la falta de competitividad y en la obsolescencia de sus tejidos industriales, sino también en la posición dominante de las corporaciones industriales de los países centrales inmersas también en un intenso proceso de reestructuración.

Desde el momento de su incorporación, la estructura económica de países como España o Grecia reforzó así su especialización en los sectores en los que parecían «más competitivos», a saber, el turismo, el inmobiliario, algunas líneas industriales (por lo general residuales) y los servicios personales. Pero hablar de competitividad en servicios como la hostelería, el comercio, el turismo o el sector inmobiliario, ampliamente mayoritarios en casi toda la costa mediterránea, no deja de ser un contrasentido. Se trata de sectores de bienes no transables, altamente territorializados y en los que las dinámicas de acumulación y obtención de beneficio pasan menos por la innovación tecnológica que por la explotación brutal y feroz de la fuerza de trabajo, así como por la atracción de una masa creciente de turistas e inversores. ¿De qué modo, entonces, podrían apostar estos países por una reconversión productiva que les devolviese a la senda de la competitividad en los duros mercados internacionales de productos industriales? ¿Qué tipo de planes podrían convertir a Grecia en un distrito industrial chino, a Portugal en el nuevo Hong-Kong europeo o España en la Corea del Sur occidental? Nada en este terreno más patético, que la propaganda de la llamada Estrategia de Lisboa, en cuyo texto original de 2000 declaraba su propósito de convertir a la UE en «la economía del conocimiento más competitiva y dinámica del mundo, capaz de un crecimiento económico duradero acompañado por una mejora cuantitativa y cualitativa del empleo y una mayor cohesión social».

3. La crisis financiera está lejos de estar resuelta. La exposición de los bancos europeos a la deuda de los países periféricos se ve sometida a la creciente amenaza de un impago griego que se podría encadenar, según vayan los acontecimientos, con un impago portugués, irlandés y quizás español o italiano. A fuerza de tensar la cuerda de la deuda, la decisión de la UE de rescatar a los bancos, frente y en oposición a las poblaciones europeas, podría volverse en contra de su objetivo inicial. La situación se parece cada vez más a la de 2007-2008 cuando el colapso de los mercados de titulización de la deuda hipotecaria estadounidense produjo el contagio del *crash* financiero por todo el planeta, pero con la particularidad de que ahora los activos tóxicos serían los bonos de deuda de los llamados países periféricos. En caso de no mediar una fuerte intervención europea, el impago seguramente se llevaría consigo a los bancos europeos con posiciones más frágiles. A su vez, la exposición de los bancos estadounidenses a los bancos europeos, transmitiría de nuevo la crisis por los mismos canales, pero esta vez con origen en el otro lado del Atlántico. El resultado sería una nueva fase de depresión provocada por la insistencia en anteponer los intereses del capital en dinero a cualquier otro criterio de sostenibilidad económica y social.

En este contexto, la opción «rescatamos a los bancos frente y contra las poblaciones» podría tener el modelo de movimiento de un *boomerang*. En caso de ser cierta esta hipótesis, estaríamos asistiendo a una mera operación de dilación de la inevitable crisis financiera que acabará por llevarse por delante al siempre inflado sistema financiero europeo. El apalancamiento de los grandes bancos europeos, y también estadounidenses —esto es, la relación entre sus activos monetarios reales y los préstamos que han realizado o los activos que han comprado con ese mismo dinero—, es tan abultado, que una moderada ola de pánico financiero impulsada por el *default* de un puñado de pequeños países como Grecia, Irlanda o Portugal puede terminar en una nueva cadena de bancarrotas y rescates como los de Bear&Stearn, Lehmans

Brothers o AIG, si bien con nombres mucho más conocidos en el continente. De hecho, son estos nombres los que deberíamos reconocer detrás de las banderas de los llamados países periféricos, en lo que es ya la mayor operación de nacionalización de deuda privada de la historia europea. En caso de que este colapso bancario acabe por ocurrir, la constitucionalización de los principios neoliberales en el armazón institucional de la Unión debería incorporarse a la lista de los venenos económicos más potentes jamás producidos.

Dicho de otro modo, los principios de Maastricht, machaconamente repetidos en todos los tratados posteriores —control del déficit público, inflación baja y unos niveles de deuda pública siempre próximos a los países más saneados— no han permitido un crecimiento digno de tal nombre para el eurogrupo. Las únicas excepciones han venido de la mano, precisamente, de las burbujas patrimoniales de algunos países periféricos como España. La actual insistencia en estas políticas, a través del llamado Pacto del Euro,[14] no parecen augurar ninguna salida positiva a la crisis. Antes al contrario, la insistencia en estas medidas favorecerá la posición de los acreedores sin siquiera garantizar la solvencia de los mismos a medio plazo.

El problema es que no hay modelo de recambio al gobierno de los intereses financieros, que no hay alternativa —al menos de parte de las instituciones y de la clase política— a otra ronda de rescates, ataques sociales y empobrecimiento masivo de las poblaciones europeas. En el actual orden financiero, el espejismo exportador alemán no sólo va a resultar breve, sino que no tiene ninguna posibilidad de generalizarse al conjunto de los países de la Unión, al menos sobre la base

14 Se trata del pacto firmado por los jefes de Estado europeos en junio de 2011 a fin de garantizar, supuestamente, la estabilidad económica de la región. Entre otras perlas incluía la indexación de los aumentos salariales al crecimiento de la productividad, nuevos compromisos de ajuste presupuestario y una nueva ronda de flexibilización (precarización) de las condiciones laborales. Su eficacia como mecanismo de «estabilización» parece clara a la luz del nuevo episodio de la crisis de la deuda soberana de julio de ese mismo año.

de un euro fuerte y la férrea vigilancia de los grandes bancos europeos. En definitiva, el impulso institucional a la burbuja de la deuda soberana ha sido la solución más estúpida que la UE podría dar al proyecto europeo.

4. Todavía no sabemos lo que podría suponer un impago por parte de un país o de un grupo de países en Europa, y sus repercusiones sobre la moneda única. Desde la oleada de ataques del verano de 2011, se ha venido desarrollando una versión ampliada de la burbuja de la deuda soberana que está llevando el mecanismo de extracción financiera a una fase profundamente agónica. Sin que hayan desaparecido las bajadas de calificación de la deuda soberana como vía para la apertura de espacios de alto beneficio financiero, las caídas de los valores bursátiles, encabezadas por los bancos europeos más apalancados, se han conectado de manera semiautomática con la salida de fuertes flujos de capital hacia la compra de deuda alemana (nicho de seguridad) y de deuda periférica (nichos de altísimo beneficio). El resultado es una retroalimentación continua de las diferencias entre los costes de la financiación alemana y los de los países de la periferia, punteada por ciclos de dos o tres días en los que se roza la estrangulación de estas economías. Grecia sigue siendo el ejemplo paradigmático. Durante septiembre de 2011 la prima de riesgo sobre la deuda griega llegó a arrojar rentabilidades absolutamente desorbitadas de entre el 50 % y el 110 %. Para hacernos una idea de la escala a la que se produce este proceso de desposesión, hay que recordar que el máximo interés que pagó el Estado griego por sus emisiones de deuda anteriores al verano de 2011 estuvo cercano al 20 % y que esto fue sido suficiente para intervenir su economía.

En estas condiciones, el debate sobre el impago de la deuda se ha convertido en un asunto central para la política europea. En buena medida, se puede considerar que el *default*, al menos en Grecia, ya viene sucediendo desde antes del verano y que simplemente, desde la UE y el gobierno griego se han venido buscando formatos adecuados (refinanciaciones,

reestructuraciones, etc.) para venderlo como operaciones financieras rutinarias. El pago de la deuda siempre es una variable política y los impagos, a su vez, son figuras políticas complejas cuyo significado depende en gran medida de quién y cómo los enuncia. Entre el «no nos pagáis» y el «no os pagamos» media un abismo simbólico y político. Dicho de otra manera, mientras que el impago como iniciativa de la sociedad civil es una declaración de soberanía popular, el impago decretado por los acreedores refuerza el control de las instancias financieras sobre los activos y los flujos futuros de recursos. Y ésta es exactamente la pelea que se está disputando en Grecia, y que podría conformar el horizonte político inmediato de los demás países periféricos. Frente a una ciudadanía que se rebela al pago de la deuda, que afirma que «no pagaremos» y que exige una auditoría democrática de la deuda, las instituciones de la Unión Europea y el FMI amenazan con declarar al país en quiebra si no se profundizan los programas de austeridad y las privatizaciones.

Lo que invariablemente viene asociado al impago de la deuda soberana es la posibilidad de la salida de la moneda común europea. Es un argumento puramente disciplinario, utilizado por las instituciones europeas para amenazar a los países rebeldes con la desconexión pura y simple del «caparazón» europeo y la exposición abierta a un poder financiero despiadado que la propia UE ha venido alimentando. Pero existe otra versión de la salida del euro que desde algunas posiciones «progresistas» insiste en la misma como corolario inevitable del impago y también como medio imprescindible de recuperación de instrumentos monetarios nacionales, especialmente la devaluación de la moneda, que sean capaces de relanzar la competitividad sin necesidad de seguir hundiendo los costes salariales. En lo que se refiere a este último caso, la amenaza de la UE a sus estados miembros periféricos tiene un poso de verdad que la hace extraordinariamente efectiva. Una serie de monedas nacionales más pequeñas serían terreno abonado para ataques especulativos sobre el tipo de cambio con una repercusión

mucho más alta que los ataques sobre el euro, lo que muy posiblemente volvería a redundar en nuevas rondas de austeridad y privatizaciones. Frente a este escenario, será necesario desvincular el derecho al impago de la salida de la moneda única, interpretándolo como una figura de soberanía democrática europea antes que como un retorno a la soberanía nacional, expresada en una moneda propia.

La liquidación del Estado social y la crisis del proyecto europeo

La crisis ha venido acompañada del mayor paquete de recortes sociales y ataques salariales que haya conocido Europa en los últimos 20 años. Las reformas se han dirigido en todas y cada una de las direcciones que desde hacía tiempo estaban en el punto de mira de las élites económicas. En el mercado laboral, las nuevas leyes han precarizado aún más las condiciones de trabajo en una nueva vuelta de tuerca hacia la adaptación automática de la prestación laboral a las necesidades de los empresarios. Las reformas han incluido también arrolladores ataques a los viejos sistemas de negociación colectiva y la imposición de mecanismos todavía más fuertes de disciplina laboral. Quizás aún más importantes, porque todavía no habían experimentado una erosión tan agresiva, son las reformas de los sistemas públicos de pensiones. En un buen número de países (Francia, Alemania, Grecia, Italia, Portugal, España) se ha aumentado la edad de jubilación y los años necesarios para conseguir la cotización máxima, lo que indudablemente acabará por redundar en una disminución de las prestaciones medias, al tiempo que se otorgan nuevas ventajas fiscales a los fondos privados de pensiones, gestionados, como no podía ser de otra manera, por los grandes agentes financieros europeos.

En paralelo, el Estado social ha recuperado la primera posición en el ranking de enemigos de las élites económicas. La respuesta de la clase política, siempre dócil ante los chantajes

de las oligarquías financieras, ha pasado por la aplicación de severos planes de reducción y liquidación de casi todos sus capítulos, muchas veces de la mano de la privatización de hospitales, centros médicos, servicios sociales e incluso centros educativos. En otras palabras, el célebre Estado de bienestar europeo, que durante décadas ha sido bandera de quizás la única singularidad civilizatoria que el viejo continente podía todavía presentar con algo de dignidad e incluso con cierto orgullo al resto del mundo, está en trámites de convertirse en un resto arqueológico.

Ninguna de estas líneas de reforma se puede considerar, desde luego, producto de la urgencia de unos tiempos excepcionales. La «inapelable» necesidad de los paquetes anti-crisis simplemente nos ha devuelto, ampliadas y reforzadas, las mismas directrices que desde hacía años venían redactadas en el programa neoliberal. Para verificar el éxito de este programa, basta revistar los principales hitos de la historia reciente de la UE. La pieza clave, el Tratado de Maastrich, firmado en 1992 y ratificado en sus líneas generales tanto en la fallida Constitución Europea como en el Tratado de Lisboa, otorgaba un carácter prioritario a las principales prescripciones del programa. En el Tratado, no sólo se imponían los controles ya señalados al gasto público y la inflación. También se incluía la liberalización de los mercados de la energía, las telecomunicaciones, el gas natural y los servicios postales. Esto equivalía a promover la privatización de las principales empresas públicas europeas en ámbitos que hasta ese momento se consideraban monopolios naturales y por lo tanto poco aptos para ser gestionados por medio de los mecanismos presuntamente infalibles de la competencia de mercado. Igualmente inspiradas en principios neoliberales, se deberían añadir las políticas de «liberalización» y privatización de los servicios e infraestructuras de transporte como aeropuertos, puertos, autopistas y redes de ferrocarriles, con algunos casos destacados de total transferencia al sector privado, como ocurre en Reino Unido con aeropuertos y servicios ferroviarios.

El Tratado de Lisboa, que desde 2007 reemplaza a la rechazada Constitución Europea, ha avanzado un paso más en estas políticas de liberalización y desregulación. Mención especial merece la reciente Directiva de Servicios de 2006, más conocida como directiva Bolkenstein. Aparte de simplificar los trámites burocráticos de instalación de empresas y filiales dentro de la UE,la directiva iguala a la baja las condiciones laborales de la prestación de servicios por medio del polémico principio del país de origen. Según esta cláusula, las empresas que se instalen en un país distinto al que tienen su sede pueden aplicar la legislación de su país de origen; lo que no deja de resultar un curioso empujón institucional al *dumping* social.[15]

Como ocurre con la mayor parte de este tipo de políticas de raíz neoliberal, el sacrosanto principio de competitividad que les sirve de pretexto, se «logra» exclusivamente a costa de la reducción unilateral de los costes salariales. Un objetivo que se puede considerar cumplido a la luz de los datos que instituciones como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ofrecen para la última década. Durante los años dosmil, los costes salariales de los principales países de la Unión Europea o bien se han mantenido estancados, como es el caso de Alemania, o bien han crecido de una forma moderada y muy por debajo del incremento de los beneficios empresariales, como en Francia o Italia. El control de los salarios, implícito a las políticas de control de la inflación que prescriben tanto el Tratado como el BCE, además de las

15 En tanto ejemplo de las implicaciones de esta directiva, valgan aquí algunas conocidas sentencias del polémico Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE). Así, el 11 de diciembre de 2007 (Sentencia Viking), el TJCE desautorizó la huelga que el Sindicato Finlandés de Transporte realizara en el año 2003 con el propósito de que los trabajadores de Estonia contratados por una naviera finlandesa tuvieran las condiciones laborales de Finlandia. El 18 de diciembre de 2007, el mismo tribunal avaló que una empresa letona subcontratada en Suecia pudiese pagar salarios propios de Letonia. El 3 de abril de 2008, el TJCE volvió a dictar sentencia en el mismo sentido cuando consideró que el convenio de la construcción alemán no era aplicable a los 52 trabajadores que habían sido subcontratados a través de una empresa polaca.

principales líneas de reforma de los mercados laborales, han logrado dar marchamo de política oficial a una precariedad de masas que se extiende por todo el mapa europeo, si bien con mayor intensidad en los países del sur y del este.

La última novedad conceptual de los defensores de los necesarios «ajustes» del mercado de trabajo es la llamada *flexecurity* o flexiguridad. Con tan ingeniosa conjunción de opuestos se quiere apuntar, en realidad, sobre tres objetivos principales: 1) la flexibilización total de la contratación y el despido, 2) una formación laboral más activa y 3) mejoras en las prestaciones a los desempleados. Evidentemente la primera tiene carácter de prescripción, mientras que la segunda confía en la formación como mecanismo de adaptación continua a las necesidades de los empresarios y la tercera es puramente paliativa de un mercado laboral sometido a una alta rotación y a tasas de precariedad crecientes. Se trata pues de una versión, más o menos sofisticada, del *workfare* (por oposición al *welfare)*, esto es, del régimen de trabajo forzado que condiciona toda ayuda o prestación social a la búsqueda activa de trabajo. La idea que subyace a esta nueva norma laboral reconoce el problema del empleo, pero de una forma absolutamente perversa. En un contexto de elevado desempleo estructural, que en la mayor parte de los países europeos se mantiene, incluso en épocas de crecimiento, entre el 7 y el 10 % de la población activa, los reformadores toman como única hipótesis la eliminación de toda fricción «voluntaria» a la empleabilidad. Esto se traduce *de facto* en la supresión de toda alternativa de vida al margen de un trabajo asalariado cada vez más precarizado e infrapagado.

La precarización de las condiciones de vida y trabajo se ve aún más acrecentada en el caso de los migrantes, especialmente de aquellos extracomunitarios que en la Unión Europea rozan la cifra de los 30 millones. Las leyes de extranjería, armonizadas a nivel de la Unión por el Tratado de Schengen de 1995, establecen un sistema de pasos regulados (permisos de residencia) que hasta ahora han garantizado un

sometimiento casi perfecto de los extranjeros a los empleos peor pagados. Sin embargo, la contracción del empleo desde 2008, ha vuelto a plantear un problema de «exceso» de mano de obra, que ha tomado a los migrantes como única variable de ajuste. En junio de 2008, se publicó la directiva europea de retorno. Básicamente, los autores de este documento pretenden expulsar a ocho millones de migrantes sin papeles. La directiva no sólo facilita el retorno voluntario de los extranjeros, sino que también pretende agilizar las expulsiones de sin-papeles, incluidos los menores no acompañados, al tiempo que ampliaba el plazo máximo de internamiento en los CIEs (Centros de Internamiento para Extranjeros) hasta los 18 meses.

En otro orden de cosas, los servicios sociales elementales, como la educación o la sanidad, han sido también objeto de especial atención por parte de los reformadores. Empujados a la picota por su presunto despilfarro, al tiempo que cada vez más presionados por una financiación pública menguante, la solución neoliberal parece pasar por la introducción de mecanismos de mercado. Sin espacio para la sorpresa, este tipo de estrategias comienzan con la privatización de las partes más «rentables» de los servicios y acaban en una imparable degradación de la calidad de los mismos. Es el caso, por ejemplo, de las reformas sanitarias que se llevan desarrollando desde finales de los noventa en algunos países, y que han tenido como objetivo la reestructuración de los sistemas de salud sobre criterios meramente económicos, así como la privatización de su gestión a través de distintas fórmulas, que van desde la concertación hasta los llamados Partenariados Público Privados (PPP). Con este instrumento se pretende instaurar un régimen de prestación de servicios que en su mayoría es concertado al sector privado, al tiempo que se convierte al sector sanitario en un negocio con beneficios garantizados. El proceso de privatización está ya prácticamente completado en Inglaterra, y evoluciona en un intenso *work in progress* en un buen número de países y regiones —casi todas las comunidades autónomas españolas, algunos *länder* alemanes, varios hospitales en Italia.

El impulso reformador ha puesto también en su punto de mira a otra de las principales instituciones europeas: la Universidad. La construcción del Espacio Europeo de Educación Superior, más conocido como Plan Bolonia, —en referencia a la declaración de los ministros de educación que en 1999 firmaran en esa ciudad— viene impulsado tanto por las políticas europeas como por los acuerdos de liberalización de servicios firmados en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC). En este caso, y bajo el pretexto de generar un mercado único de titulaciones homologables, se están aplicando toda clase de estrategias a fin de convertir a las universidades europeas en empresas de prestación de servicios académicos y de investigación. Como suele pasar con tantos y tantos documentos oficiales, el lenguaje aparentemente democrático y bienintencionado debe ser traducido a los efectos y a las prácticas reales de las reformas. Así, la presunta necesidad de «recapitalizar la universidad» significa simplemente aumento de las tasas de matriculación, financiarización del acceso universitario vía préstamos blandos (endeudamiento de los estudiantes) y participación de las grandes empresas en la investigación aplicada y en los órganos de gestión de las instituciones universitarias. La introducción de «la sociedad en la Universidad» implica de nuevo mayor presencia de las grandes corporaciones en sus órganos de gobierno, al tiempo que subordina los programas de formación a cálculos de coste-beneficio, tanto en términos monetarios, como del «valor laboral» que los alumnos adquieren a través de la formación académica. La primacía de las «competencias» sobre los «contenidos» señala la necesidad del desarrollo de capacidades laborales genéricas frente a la función crítica que en principio venía asociada al origen humanista de la universidad europea, etc.

A la vista de estas reformas, lo que parece en crisis es el principio de servicio público de carácter universal, o lo que es lo mismo, el viejo concepto de «derechos sociales», cada vez más condicionado a la prestación laboral y a la «productividad» del trabajador. La alternativa a medio plazo será seguramente

la extensión de formas de provisión privada de las viejas garantías sociales, generalmente por vías financieras (créditos, seguros, fondos de pensiones) y la degradación de los servicios públicos a la condición de sistemas de caridad para los más necesitados. De hecho, las soluciones de mercado, además de ser por lo general más caras —al fin y al cabo tienen que garantizar tasas de beneficio suficientes para el sector privado— y menos equitativas en términos sociales, se han visto acompañadas de una política de ataque sostenido sobre el gasto público social. Según Eurostat, el gasto público en prestaciones sociales de la Unión Europea, que incluye las principales partidas del Estado de bienestar salvo las transferencias monetarias, perdió un punto en relación al PIB europeo entre 2000 y 2007, y sólo entonces se vio impulsado de nuevo por efecto de la reacción automática de los mecanismos de protección frente a la crisis. En un país como Alemania, el gasto social público ha perdido hasta tres puntos en relación al PIB durante ese mismo periodo. Sin duda, los planes de austeridad que se aplican desde 2010 han producido tanto recortes de financiación como nuevos avances en la reestructuración pro-mercado de los servicios públicos.

Como no podía ser de otra manera, la retirada del Estado social y de las medidas de redistribución, impuestas por la ortodoxia neoliberal, han sido un factor crucial en la desposesión de importantes sectores sociales. Una sola cifra puede condensar esta tendencia: Europa cuenta ya con más de 100 millones de pobres, aquellos cuyos ingresos no alcanzan el 60 % de la renta nacional *per cápita* de sus respectivos países. Las cifras de Eurostat muestran crecimientos espectaculares durante la década de los dosmil (1999-2010). En la mayoría de los países europeos el número de pobres ha crecido por encima del 50 %. La población por debajo del umbral de pobreza se ha más que duplicado en los países bálticos, ha crecido en un 80 % en Polonia, la República Checa y Grecia, y en un 60 % en España. Tampoco los cuatro grandes países centrales han escapado a este problema. En Italia el número de pobres ha crecido en un 54 %, en Reino Unido y en Francia en torno al

40 % y en Alemania un 35 %; cada uno de estos Estados presenta cifras absolutas en torno a los diez millones de pobres. Como no podía ser de otra manera, la precariedad laboral, el control salarial y el ataque sobre las transferencias sociales, seguido después de las fracturas sociales que está produciendo la crisis, han hecho aumentar rápidamente las cifras de población de escasos recursos. Muchos de ellos, o de ellas —pues en su mayoría son mujeres—, son además trabajadoras subempleadas en las ocupaciones de menor cualificación y remuneración. Son las *woorking poors* europeas.

Estos datos son correlativos al fuerte aumento de los ingresos de los segmentos mejor posicionados en la escala de renta y patrimonio, esto es, el 10, el 5 y sobre todo el 1 % de los superasalariados y de los grandes patrimonios europeos. Aunque ninguna fuente ofrece datos agregados sobre la enorme concentración de riqueza en los segmentos más ricos de la población, todos los estudios y fuentes nacionales apuntan al mismo resultado. Un pequeño segmento está obteniendo rentas salariales superiores a 5, 10 e incluso 100 veces el salario medio de sus respectivos países. Igualmente se observa un crecimiento rápido y consistente de los patrimonios más acaudalados. No en vano las burbujas financieras han sido una poderosa herramienta para reforzar las posiciones patrimoniales de estos sectores sociales.

Lo que propiamente deberíamos considerar como un vasto programa de empobrecimiento social está lejos, no obstante, de ser una mera consecuencia natural del actual modelo económico. Sin la colaboración activa de las políticas públicas los resultados hubieran sido mucho más modestos. La pieza central aquí son las políticas fiscales. Casi todos los Estados llevan ya más de una década rebajando las tasas impositivas sobre las grandes empresas y las rentas de capital, al tiempo que trasladan sobre el consumo y las rentas del trabajo la mayor parte de la recaudación fiscal. Basta decir que en los últimos 15 años, el tipo máximo del impuesto sobre la renta ha perdido más de 10 puntos de media en los países de

la UE. Se trata, en realidad, de las mismas medidas de subvención fiscal a los ricos que tanto protagonismo han tenido en la política reciente de EEUU y que, de forma cada vez menos disimulada, han encontrado su particular realización al otro lado del Atlántico. Una prueba más de que el llamado neoliberalismo no declara tanto la guerra al Estado como propugna su control por parte de las élites económicas y financieras.

Geografías en crisis

La crisis está gestando también su particular geografía social y política. Ninguna de las tendencias mencionadas se distribuye de forma homogénea en el espacio europeo. La presión financiera sobre los llamados países periféricos es un ejemplo de cómo las facturas de la crisis se pueden desplazar sobre las poblaciones y regiones más frágiles y de cómo el esquema centro-periferia puede retomar toda su fuerza en el viejo continente. Igualmente, las políticas de liquidación del Estado social se acusan principalmente sobre las capas sociales de menores recursos, lo que tiene una especial expresión a nivel urbano en forma de una creciente degradación de las periferias de las ciudades europeas. Es esta doble fractura —la que se produce entre los llamados países centrales y los países periféricos, y la que se produce en el interior de las principales metrópolis europeas— lo que determina la geografía de la crisis y por lo tanto los espacios potencialmente más explosivos.

La legitimidad del proyecto europeo, casi podríamos decir el *european dream*, ha estado sustentada en un particular modelo de inclusión social y económica que ha funcionado como promesa de progreso para todos los miembros «periféricos», ya fueran del Sur o del Este. Los ingredientes de esta receta ideológica eran básicamente dos: *democracia*, frente al pasado dictatorial de todos estos países, y *modernización*, lo que en las distintas lenguas locales se traducía

como homologación a los estándares de los países centrales, tanto en lo que se refiere al acceso al consumo, como también y especialmente en las versiones de izquierdas, a los servicios públicos y las prestaciones sociales. La integración europea ha funcionado pues como una suerte de promesa de abandono de la condición periférica. No en vano, la imagen que la Unión ha proyectado sobre sí misma se ha basado en una oposición simplista: a un lado, la Europa democrática y civilizada de las economías de mercado; al otro, la no-Europa.

En este particular mapa imaginario, la periferia europea estaba más allá de sus fronteras, al menos para el eurogrupo que incluye a todos los países meridionales. Esta periferia podía comprender a los países del Este de reciente incorporación, como Rumanía o Bulgaria, convertidos en provechosa fuente de fuerza de trabajo para las economías más dinámicas; pero también a los países de la ribera sur del Mediterráneo.

Marruecos, Túnez, Argelia, Libia, Egipto, pero sobre todo Turquía, han representado históricamente el papel del gran «Otro» en el drama europeo. Y sin embargo, a la luz de sus funciones económicas y políticas reales en el puzzle de la Unión Europea, estos países están bastante lejos de ser una parte externa a su cuerpo. El núcleo contradictorio de esta proyección geográfica reside en la asimetría entre una Europa política, organizada en torno a las fronteras externas que marca Schengen, y una Europa económica que en realidad sólo se puede medir en una escala que comprende todo el continente y la orilla sur del Mediterráneo. De este modo, si el norte de África y Turquía se nos presentan, en las imágenes corrientes del mapa continental, como el negativo de Europa, con su cultura mayoritariamente musulmana y sus sistemas políticos autoritarios, de acuerdo con su posición material, estos países están tan integradas en la Unión como los países del Este de más reciente incorporación. No se trata sólo de que en la orilla sur del Mediterráneo se haya deslocalizado una parte importante de la industria —especialmente la más contaminante o de menor valor añadido—, o de que estos

mismos países aprovisionen una parte importante del gas natural y del petróleo que se consume en Europa. Estos países son *europeos* porque una parte sustancial de su población ya lo es. Más de diez millones de magrebíes o de descendientes de magrebíes, así como una cifra sólo un poco menor de personas de origen turco, vive en Europa con distintos grados de acceso a la nacionalidad.

Los flujos de inversiones, bienes y personas son constantes, y la frontera europea sólo funciona en este terreno con el fin de garantizar la explotación desigual de los mismos; siempre en provecho, naturalmente, de la orilla norte. Las propias fronteras europeas han sido «deslocalizadas» hacia el Sur, convirtiendo a algunos de estos países en la verdadera esclusa de entrada a Europa por medio de toda una serie de instrumentos específicos, casi siempre financiados por la UE, como policías de fronteras, cárceles para migrantes y el clásico corolario de la intervención paliativa de la mano de un grueso ejército de ONGs. Bajo esta perspectiva, la imagen del Magreb, o de Turquía, o de Oriente Medio, como el «Otro» europeo, inasimilable a las estructuras sociales y políticas del continente, tiene mucho más de refuerzo ideológico de una posición de sometimiento económico que de reflejo de una oposición cultural irreductible. *A contrario*, pues, de la imagen que explotan quienes azuzan el fuego de la islamofobia y el racismo, lo que demuestra la valiente ocupación de la plaza de Tahrir y las protestas en las calles de Túnez es que son pocas las lecciones de democracia que pueden dar las poblaciones europeas a sus homólogos norteafricanos. Y lo que es más importante, la potencia insospechada de una alianza política transmediterránea que tales movimientos parecen mostrarnos.

De todos modos, y ya dentro de la UE tal y como se dibuja en los mapas oficiales, la crisis nos ha devuelto el viejo sueño europeísta en forma de una particular pesadilla que cada país vive con distintos grados de intensidad. Los viejos ecos de una Europa a dos —a tres, o a cuatro—

velocidades, que otrora se oyeran cuando la unificación monetaria, se han convertido en un estruendo geológico provocado por las grandes fracturas continentales que abre la crisis de la deuda soberana. Sin duda, los países del Este, especialmente los países bálticos y todos los Estados de reciente incorporación, han visto cómo el tren europeo se les escapaba, al tiempo que la caída de la economía de sus respectivos países arruinaba el progreso que se había producido en la última década. La división Este-Oeste es ahora igual que hace diez años, y el euro, en caso de sobrevivir, será indudablemente una meta a muy largo plazo para casi todos estos países.

Pero incluso dentro del eurogrupo, la crisis de la deuda soberana tiene una segunda lectura, cuyo código de cifrado se encuentra en la competencia entre Estados. Nada es menos casual que Alemania se haya alineado con los principales bancos europeos en el castigo a los países periféricos. Aparte de tratar de reequilibrar los balances terriblemente frágiles de sus principales instituciones financieras, el ataque sobre los bonos de estos Estados ha tenido un extraordinario efecto positivo para la colocación de los suyos propios. En la medida en que la deuda pública de todos los países europeos se mide en relación al bono alemán, la nueva Gran Alemania ha podido ejercer una suerte de derecho de señoreaje para financiar su propia deuda con la garantía de tipos de interés considerablemente más bajos que el resto. De este modo, el país del ahorro, de la competitividad y del auge exportador ha podido financiar a muy bajo coste una deuda que de hecho era mayor que la media de los países del euro. Las consecuencias son fundamentalmente tres. Primera: los costes de la unificación alemana y de casi dos décadas de estancamiento económico han sido casi olvidados gracias a la libre competencia en los mercados de deuda. Segunda: los principales paganos del diferencial positivo de la financiación de la deuda alemana han sido las poblaciones de los países periféricos. La tercera es la fractura norte-sur de la Unión, antes ocultada por los

fondos regionales y el mayor dinamismo económico de algunos países meridionales, así como la posible expulsión del euro de algunos de estos Estados.

Las fracturas internas de la Unión (Este-Oeste y Norte-Sur) son, sin embargo, menos explosivas, al menos por el momento, que aquellas que atraviesan la deshilachada estructura social de las grandes ciudades europeas. Las desigualdades se vuelven completamente intolerables cuando conviven en el mismo espacio. Y esto lo que ocurre en las principales regiones metropolitanas de la Unión como París, Londres, Madrid, Berlín, Milán, Bruselas, etc. Todas ellas ciudades con una importante proyección global, grandes centros financieros, cuarteles de invierno de las mayores corporaciones europeas, catedrales del consumo global y escaparates del modo de vida de la clase directiva europea; pero también fábricas de servicios que emplean a decenas de millones de trabajadores precarios y mal pagados, muchas veces de origen transnacional y con un acceso a los servicios y a los derechos sociales cada vez más frágil. Dicho de otro modo, en estas grandes ciudades conviven la mayor ostentación con la precariedad más extrema, los grandes centros de poder del continente con un *collage* social y cultural condenado a rendirle trabajo a precios irrisorios. Las fronteras de renta que a veces existen entre un barrio y otro, por ejemplo entre el centro financiero de la City de Londres y el viejo East London convertido en la mayor concentración de población de origen indio de Europa, son mayores que las que hay entre el Primer y el Tercer Mundo. Un único dato: la diferencia entre el patrimonio del 10 % más rico de esta misma ciudad y el 10 % más pobre, se acerca a las 300 veces.

La crisis urbana en ciernes no es, por lo tanto, un resultado que sobreviene con la crisis económica. Ésta se ha labrado a lo largo de las últimas décadas, por medio del desmantelamiento del Estado social que sufren especialmente los más pobres, de la desregulación de los mercados de trabajo que precariza fundamentalmente los nichos de empleo

más descualificado, del abandono de las políticas de vivienda social que expulsa a estas poblaciones a los barrios más degradados, pero también por medio de un tozudo racismo institucional. El rasgo más destacable de este nuevo proletariado urbano es, en efecto, que su composición es mestiza, que está formado en buena proporción por los migrantes de las antiguas colonias europeas y sus descendientes. En pocos casos se puede decir que estos hombres y mujeres sean ciudadanos de pleno derecho de sus respectivos Estados. Muchas veces carecen de la nacionalidad, en otras de los papeles de residencia, pero incluso cuando la tienen, el doble estigma de ser pobres y no blancos hace de ellos ciudadanos de segunda o tercera clase, y por ende objetivo de tratamientos especiales, fundamentalmente penales y policiales.

El revanchismo social de las élites económicas y políticas tiene, de otra parte, un alcance social mucho mayor que el de los sectores sociales más depauperados. Ataca de un modo especialmente destructivo a lo que había sido el eje pivotal de las sociedades europeas: sus clases medias. En este siempre difícil conjunto de posiciones sociales que incluía desde los profesionales liberales hasta los trabajadores cualificados de la industria se podían reconocer, no obstante, ciertos rasgos comunes. Se trataba principalmente de la posibilidad de prever un futuro y de no tener que «vivir al día», tal y como correspondía a la figura del proletario histórico. Esta capacidad de previsión a futuro venía normalmente de la mano de un proyecto familiar, que a su vez estaba bien apuntalado por las pensiones públicas, los servicios sociales elementales (educación y salud sobre todo) y una cierta estabilidad laboral. Como consecuencia, el «ciudadano» reproducía un elemental sentido de pertenencia al «cuerpo nacional», con el que se sellaba el pacto social.

Nada de esto es evidente en las condiciones actuales. La precariedad, la flexibilidad laboral, el deterioro de las garantías sociales que antes aseguraba el Estado y su sustitución por garantías privadas (fondos de pensiones, seguros

médicos) quiere decir sencillamente eso: que el pacto social que daba cuerpo y fantasía a las clases medias se ha roto. Éstas se han ido erosionando por abajo con el descuelgue masivo de unas generaciones de trabajadores sometidos a condiciones de vida cada vez más precarias e inciertas.

De esta nueva composición social de las grandes metrópolis europeas se derivan lecturas políticas todavía poco claras, cuando no contradictorias. Por un lado, ciertamente, se ha producido una creciente tensión social que se desencadena en la competencia por unos recursos cada vez más escasos —como el empleo o las prestaciones sociales. La explotación política de esta competencia deriva en las conocidas líneas de la «guerra entre pobres» y en formas de politización que rayan, o bien se integran directamente, en la ultraderecha europea. Se juega aquí con la nostalgia de un pasado perdido de pertenencia social (o nacional), de respeto al trabajo honrado y a los valores familiares que a su vez se opone tanto al cosmopolitismo urbano, como sobre todo a los «extranjeros», aunque lleven generaciones entre nosotros. La ultraderecha es la más importante patología política de aquellos segmentos sociales que se ven empujados hacia abajo: el nicho, por ejemplo, de la derecha lepeniana francesa, que en muchas de las periferias obreras de las décadas gloriosas ha recogido el voto de las antiguas formaciones de izquierda.

De otro lado, entre el proletariado juvenil condenado al subempleo y a los peores trabajos, sometido al control policial, al racismo institucional y al más estricto vacío de horizontes personales y sociales, ha ido cundiendo un sentimiento de impaciencia potencialmente explosivo. No se trata sólo de la enorme variedad de subculturas juveniles que surgen y se multiplican entre estos sectores sociales, alimentando industrias tan importantes como la musical. Ni tampoco del evidente rechazo institucional, la cultura de bandas o las redes de pequeña criminalidad, que de cuando en cuando explotan los medios de comunicación, en su eficiente trabajo de generación de una atmósfera de emergencia social sin

solución de continuidad. No. Se trata de los episodios cuasi insurreccionales que se han producido en los últimos años, y que aún esperan una interpretación social y política que vaya más allá de la criminalización o de la compasión benevolente hacia los pobres. Así las revueltas de las *banlieues* francesas de 2006, de los jóvenes griegos de 2008 o los *riots* de Londres del verano de 2011.

Pero quizás la reacción política más interesante a la creciente depauperación social haya sido la que expresa el emergente movimiento europeo que se ha puesto en marcha en los dos últimos años.

II. Un fantasma recorre Europa

Un fantasma recorre el sur de Europa, se hace fuerte en la orilla sur del Mediterráneo y amenaza a los países del norte. El movimiento se llama con los nombres de las principales plazas de las grandes ciudades: Tahrir, Syntagma, Puerta del Sol, Plaça Catalunya. Su fuerza radica en el rechazo, en la destitución de formas de gobierno degeneradas, corruptas, incapaces de detener del expolio financiero. «No nos representan», grita el 15M en las plazas españolas. La palabra democracia convertida en reivindicación común anuncia una época para una política que no se deja capturar en las formas instituidas de la representación. Ni sindicatos, ni partidos capitalizan el movimiento. Sólo la fuerza común, la combinación de imaginación, democracia directa y comunicación horizontal construye y amplia la revolución en marcha.

Se ha querido comparar este movimiento con los estallidos revolucionarios de 1848.[16] Y hay algo en ello que va más allá de una simple comparación. Como en 1848, las insurrecciones amenazan con convertirse en revolución. Como en 1848, los estallidos saltan de país a país, se contagian,

16 Las revoluciones de 1848, también conocidas como la Primavera de los Pueblos, pusieron fin a la Europa de la Restauración que salió de las Guerras Napoleónicas. Las revoluciones comenzaron en París y se extendieron posteriormente a los estados alemanes e italianos, Austria y España. Además de ser propiamente la fecha de arranque de lo que podríamos llamar la moderna «cuestión social», de la mano del incipiente movimiento obrero, en ellas jugó un papel crucial el primer instrumento de comunicación a tiempo real: el telégrafo.

aprenden unos de otros, en una espiral de radicalización y de reinvención de la política. Todavía es pronto para saber donde acabarán, pero fue precisamente a caballo de las revoluciones del '48 cuando aparecieron las primeras organizaciones y reivindicaciones de lo que propiamente sería el movimiento obrero y la propuesta de una democracia no limitada al sufragismo y a los derechos políticos, o si se quiere, la noción de derechos sociales universales como pilar de una democracia real.

Lo que sigue en estas páginas es un intento de genealogía de las primeras fases de este movimiento. Éste viene precedido por las protestas juveniles que atraviesan Europa durante la segunda mitad de los años dosmil, se apoya en las luchas sectoriales por los servicios públicos y nace en las movilizaciones contra la crisis de 2010 y 2011. Se podría decir también que tiene un importante precedente en el movimiento global de 1999-2002 y en las grandes manifestaciones contra la participación europea en la Guerra de Irak de 2003. Como en las pasadas olas de protesta, el motor interno del nuevo movimiento europeo ha sido la indignación ante la injusticia de los órdenes políticos y económicos impuestos por el neoliberalismo, la descomposición social que se arrastra desde hace décadas y unos sistemas políticos cada vez más insoportablemente ilegítimos. En este sentido, la crisis ha sido sólo el detonante de cargas de profundidad que hacía años que estaban colocadas en el corazón de unas sociedades sometidas a una creciente tensión.

Resistencias a la descomposición social: jóvenes, desclasados, periferias

La hegemonía neoliberal ha tenido un poderoso efecto imprevisto: ha disminuido drásticamente la capacidad de los aparatos institucionales para integrar a aquellos segmentos generacionales que, expropiados de los derechos que tuvieron

sus padres (los derechos laborales clásicos), viven ya fuera de todo marco institucional de representación que promueva su integración normalizada. Los jóvenes, siempre reclamados por las industrias culturales, son en efecto la principal excrecencia del expolio financiero. La erosión del Estado social ha comenzado expulsando de su paraguas protector a las generaciones más jóvenes, especialmente a aquéllas condenadas a habitar en las periferias del continente (los países más débiles) y de las principales metrópolis europeas (los sectores pobres y las segundas y terceras generaciones migrantes). Poca sorpresa puede haber, por lo tanto, en el hecho de que el movimiento europeo contra la crisis viniera ya anunciado por algunos desplazamientos perturbadores; desplazamientos que se sitúan entre las formas de lucha convencionales (como los movimientos estudiantiles) y las expresiones de rabia y malestar de los más desheredados; formas de protesta que basculan como un péndulo entre las aulas de institutos y universidades y las plazas y descampados de los barrios más depauperados. Aquí se analizan sólo tres de estos fenómenos, quizás los más importantes: el levantamiento de las *banlieues* francesas de 2005 y 2006, los *riots* de Atenas y Tesalónica de 2008 y el movimiento de los estudiantes europeos contra el llamado Proceso Bolonia.

1. El 27 de octubre de 2005 tras una polémica actuación policial, dos menores de origen magrebí mueren electrocutados en un suburbio parisino. Un tercero queda gravemente herido. En los días siguientes los suburbios franceses de París, Toulouse, Lyon..., las *banlieues*, levantadas para la población obrera de origen migrante, estallan en una serie de enfrentamientos violentos, quemas indiscriminadas de automóviles y asaltos a comercios e instituciones. Los acontecimientos se repiten durante días y adquieren nueva intensidad en la primavera de 2006. La violencia juvenil no tiene ninguna expresión política reconocible. Parece el resultado último de la guetización de los barrios periféricos, del aislamiento social y

económico de los jóvenes: los hijos y nietos de los migrantes magrebís y africanos que llegaron a Francia hace décadas, pero que no han sido reconocidos como franceses de pleno derecho. Se trata, por lo tanto, de una revuelta contra el racismo institucional, ejercido con toda ferocidad por la policía francesa y por un sistema de educación que confirma sistemáticamente su posición de exclusión: la condena al subempleo, la precariedad, el paro y la cárcel.

La sociedad francesa asiste atónita a lo que le parece una brutalidad indescifrable; las izquierdas se desmarcan de la violencia de los nuevos «bárbaros»; los medios parlotean sobre el problema de la escuela, la inseguridad en los barrios y el futuro de los jóvenes. Pero la respuesta es fundamentalmente policial. Y viene de la mano del entonces ministro de Interior, Nicolás Sarkozy: toques de queda, toma policial de los barrios; centenares, miles de detenciones.

Poco después, pero casi en paralelo al estallido de las *banlieues*, en el extremo opuesto de la sociedad, estalla la revuelta de las universidades. El motivo: la propuesta de ley del ministro Villepin para instaurar el llamado «Contrato de Primer Empleo» (CPE). Al igual que los ya aprobados en otros países, como España, el CPE supone la total desregulación de las condiciones de contratación y de despido de los jóvenes menores de 26 años. La oleada de movilizaciones que sacude Francia entre febrero y abril, logra sacar a la calle a millones de personas. Se bloquean institutos y universidades, se convocan dos huelgas, se llevan a cabo innumerables acciones en gran cantidad de ciudades. La presión social es tan alta que el gobierno tiene que dar marcha atrás y retira el proyecto de ley.

La coincidencia entre las dos revueltas, la de los jóvenes de periferia y la de los estudiantes franceses, no es casual. Ambas comparten algo más que la edad: un diagnóstico común de que el futuro no es suyo, de que el horizonte laboral y social viene marcado por la precariedad, la frustración y la ausencia de expectativas de una «buena vida».

La respuesta de la sociedad adulta a las demandas de sus jóvenes fue, sin embargo, decepcionante: los franceses eligen al pequeño bonaparte Nicolás Sarkozy, como sustituto del viejo presidente de la República Jacques Chirac. Su victoria electoral se basa en dos únicas promesas: seguridad y regeneración nacional. La primera se aplicará por medio de la fuerza y la autoridad, rivalizando con la derecha lepeniana, que a la postre parecía perder su razón de ser. La segunda, dirigida a salvar la supuesta crisis de identidad de la República (sin que sepamos muy bien qué es tal cosa), vendrá de la mano de un nuevo estilo de gobierno presidencial, el anuncio de un modelo de gobernanza adecuado al siglo XXI. El discurso de la victoria de Sarkozy fue, de hecho, el de la superación de las antiguas ideologías (de izquierda y de derecha) y de los radicalismos en los que se estaba polarizando el arco electoral francés: con los neofascistas de Le Pen, por un lado, y los distintos partidos trostkistas, por otro. Sarkozy mostró aquí sus mejores artes como aprendiz de príncipe maquiaveliano. Al tiempo que jugaba con el lenguaje de la autoridad y la mano dura, incorporó a su gobierno a un buen número de líderes históricos de la izquierda social. Un poderoso aval a su programa de reconciliación nacional y su proyecto económico neoliberal.[17]

El «efecto Sarkozy» permitió casi tres años de paz social, los mismos en los que la izquierda institucional francesa profundizó más y más en su crisis, sin ser efectivamente capaz de sacar lecciones significativas de las revueltas de 2005-2006. Pero es sólo en plena recesión económica, en el momento en el que el programa liberal de la administración Sarkozy se hace carne, cuando se rearticula una nueva respuesta política y social dirigida tanto a frenar la pérdida de

17 Los ejemplos más llamativos de conversión ideológica fueron los del antiguo fundador de Médicos Sin Fronteras, Bernard Kouchner, flamante ministro de Exteriores de Sarkozy; Fadela Amara, una de las militantes fundadoras del movimiento Ni Putas Ni Sumisas, encargada por el gobierno para luchar contra la violencia de género en los barrios; y Hirch, antiguo presidente de la organización de recuperadores EMMAUS Francia; así como otros personajes carismáticos del mayo del '68 francés.

derechos como a derrumbar la imagen mediática del presidente. En 2010, Francia arde de nuevo en huelgas y manifestaciones.

2. En la otra esquina de Europa, el 6 de diciembre de 2008, muere asesinado por la policía el joven Alexandros Grigoropoulos. El homicidio ocurre en Atenas. En las semanas siguientes, el centro y algunos barrios de la capital, pero también de Tesalónica y otras ciudades menores, estallan en una auténtica batalla campal. Miles de jóvenes encapuchados se enfrentan con la policía, toman institutos y universidades; se hacen fuertes en algunos puntos de la ciudad en los que ni siquiera las fuerzas de orden público se atreven a entrar. Más allá del *casus belli*, los *riots* son el síntoma de degradación de la posición social de los estratos medios de la sociedad griega, especialmente bien leída por sus víctimas preferentes: los jóvenes. Fueron ellos quienes lideraron un ataque sin precedentes contra un modelo de gobierno que, incapaz de proveer unas trayectorias sociales mínimamente decentes, recurría (y recurre) a una fuerte respuesta represiva, cada vez más desconectada de los protocolos democráticos más elementales.

Pero las revueltas de 2008 tuvieron un alcance mayor. Empujaron a un estadio de crisis terminal el arreglo institucional del que se habían provisto las élites políticas y económicas tras la liquidación de la dictadura de los Coroneles en 1974. La particular versión griega del compromiso histórico, la llamada *Metapolitefsi*, había puesto de acuerdo a izquierdas y derechas (PASOK y ND) durante más de 30 años acerca de las normas básicas de lo admisible y lo inadmisible en «democracia». Como en el caso español, con el compromiso constitucional y los consensos de la Transición, la *Metapolitefsi* griega creó una atmósfera de consenso y chantaje sobre toda forma de oposición. De hecho, más allá del declinante papel de las organizaciones de la clase obrera, esta oposición sólo llegó a construirse a partir de nuevos colectivos sociales, muchos de ellos de base estudiantil, que a lo largo

de los años ochenta y noventa ocuparon edificios públicos y universidades. En gran medida, estos movimientos «juveniles» fueron los únicos en aprovechar «a tiempo real» la supresión de las diferencias entre la izquierda y la derecha parlamentarias en Grecia.

Con una cultura política libertaria o autónoma, estos colectivos han sido criminalizados siempre y acusados en ocasiones de ser el resultado irresponsable de una generación privilegiada. Y sin embargo, a lo largo de la segunda mitad de los noventa y los primeros dosmil, esta cultura política juvenil no paró de crecer, dando comienzo a nuevas luchas en torno a temas como las relaciones laborales, los problemas urbanos o las condiciones de los migrantes.

En las revueltas de 2008 se condensan, en definitiva, más de 20 años de desafección política de los más jóvenes. Los *riots* fueron el resultado último del grave deterioro de la legitimidad de las instituciones democráticas. Es por eso que las insurrecciones de Atenas y Tesalónica se pueden interpretar como algo más que una algarada de los grupos políticos juveniles, sino también, y sobre todo, como un momento de quiebra radical de los consensos institucionales, un momento de socialización del malestar en el que diferentes colectivos sociales entran en contacto para dar forma a las nuevas comunidades políticas que serán decisivas en la articulación de las luchas contra el brutal ataque financiero que comienza en 2010. La prueba de que el diálogo entre las protestas y los movimientos especulativos vienen de bastante antes de 2010 está en la respuesta de las finanzas a las revueltas de 2008: una serie de bajadas de la calificación de la deuda soberana griega que anunciaban lo que en menos de un año y medio iba a suceder.

3. Las revueltas de Francia y Grecia no han sido los únicos movimientos juveniles en Europa. En otros países se han producido protestas parecidas, menos agudas quizás, pero en cualquier caso significativas de la fuerte precarización del

trabajo y de las condiciones de vida que afectan singularmente a las generaciones más jóvenes. Es el caso, por ejemplo, de las manifestaciones de V de Vivienda en España, que entre 2006 y 2007 movilizaron a decenas de miles de jóvenes contra el encarecimiento de la vivienda en el país que había sido señero de la burbuja inmobiliaria. Pero el movimiento en el que más y mejor se han catalizado las protestas de las generaciones jóvenes, y en un mayor número de países europeos, es el de las luchas de los estudiantes contra las reformas impuestas por el marco del Espacio Europeo de Educación Superior, más conocido como Proceso de Bolonia. Como ya se ha visto, este conjunto de acuerdos fija la agenda para la reforma y posterior «mercantilización» de la universidad europea, lo que en realidad quiere decir: subida de tasas, subordinación de la investigación y los curricula a los intereses de las grandes corporaciones y paulatina transformación de las universidades públicas en empresas de servicios de formación.

Las primeras huelgas arrancan a finales de los años noventa, cuando la mayor parte de los Estados comienzan a adoptar las primeras medidas del programa. Pero es sobre todo en la última mitad de los dosmil, cuando éstas adquieren dimensiones que en algunos países no se conocían desde 1968. En Italia, por recoger el caso más importante, la presentación y aprobación de la Ley Gelmini, que entre otras cosas rebajaba el Fondo de Financiación Universitaria en un 20 %, levantó rápidamente una fuerte ola de movilizaciones. En octubre de 2008, una manifestación de decenas de miles de estudiantes bloqueó el Senado italiano mientras se discutía la ley. El movimiento estudiantil, que se había dado el nombre de *Onda Anomala*, no se limitó únicamente a las grandes demostraciones en la calle. Las huelgas y las ocupaciones de facultades duraron realmente todo el curso escolar y se calcula que en las mismas participaron más de un millón de estudiantes.

En Grecia, poco antes, en 2006, la ocupación masiva de las facultades y las manifestaciones formadas por decenas de miles de personas fueron noticia de la prensa internacional durante

buena parte del año. El movimiento no se limitó en este caso a los estudiantes; tuvo uno de sus principales motores en la Coordinadora de Profesores. En España, las movilizaciones se extendieron durante todo el curso 2008-2009, también con manifestaciones de varias decenas de miles de personas en Barcelona y Madrid. En Francia, el movimiento adquirió dimensiones notables, en este caso, contra la nueva Ley sobre Responsabilidades de la Universidad. Quizás el capítulo más notable fue la ocupación del Ayuntamiento de París, recuerdo y homenaje a la Comuna de 1870. Incluso en Alemania se produjeron encierros y manifestaciones y la primera huelga general de estudiantes en años.

Por su intensidad y extensión, el llamado movimiento anti-Bolonia anuncia y prepara las movilizaciones europeas de los años 2010 y 2011. Y sin embargo, como ocurre con la defensa de otros servicios públicos, el movimiento contra Bolonia no ha rebasado la escala de cada Estado. Las universidades francesas, alemanas, griegas o italianas se movilizaron en respuesta de las reformas de sus respectivos gobiernos, señalaron la lógica común implícita a las mismas, así como su escala europea, pero el grado de coordinación entre los distintos movimientos y la capacidad de presión sobre las instancias superiores de la Unión Europea fue desgraciadamente mucho menor.

Frente y contra el desmantelamiento del sector público

Las grandes movilizaciones de los dos últimos años han venido también precedidas por una amplia constelación de resistencias, protestas y luchas contra la ampliación de la voracidad corporativa sobre los servicios públicos. La convergencia y acumulación de estos movimientos explica en buena medida el desencadenamiento de las huelgas generales del año 2010 en muchos países. Sin embargo, cuando se analizan estas experiencias se pueden observar los poderosos límites

a los que se enfrentan. Por un lado, sorprende su alto grado de desacompasamiento, tanto geográfico como sectorial, en comparación al proyecto global e integrador de privatización y liberalización. Procesos de privatización similares en dos sectores de un mismo país o de un sector de dos o más países rara vez han dado como resultado la convergencia de los movimientos en un programa común de lucha. Por otro lado, sorprende también su carácter minoritario, derivado en no poca medida de los exitosos ataques antisindicales que muchos gobiernos, y especialmente el británico, llevaron a cabo en la década de 1980. Efectivamente, al menos hasta 2010, las luchas por los servicios públicos han quedado casi siempre encerradas en los sectores objeto de las reformas, sin posibilidad de conexión con realidades sociales más amplias, y casi siempre protagonizadas por sindicatos y colectivos laborales aislados o minorizados respecto a los grandes sindicatos de sus respectivos países. Por último, es preciso reconocer que estos últimos, como ha sucedido tantas veces, han parecido más interesados en la negociación de las reformas que en su contestación efectiva.

Las resistencias contra las privatizaciones y la mercantilización de servicios básicos, como los transportes, la salud o la educación vienen, en cualquier caso, de tan lejos como el propio programa neoliberal europeo. Sus huellas se pueden rastrear en las huelgas de los primeros años ochenta en el país que debemos considerar principal laboratorio europeo del neoliberalismo: la Inglaterra de Margaret Thatcher. A diferencia de los países continentales fue allí donde primero se promovió la liberalización de los antiguos «sectores estratégicos», como el tráfico aéreo o la energía, para extender luego estas estrategias a la educación y la sanidad. Con tan sólo unos años de retraso, la Unión Europea ha tomado el experimento inglés como el prototipo de sus políticas.

Como se ha visto, desde la aprobación del Tratado de Maastricht el programa neoliberal se ha desplegado en dos movimientos. El primero ha tomado como objetivo los viejos

monopolios «naturales» en manos del Estado; esto es, las empresas públicas de telecomunicaciones, energía y transportes. En esta fase, que ocupa toda la década de los noventa pero que en realidad no ha concluido de forma definitiva, se promovió la privatización de una gran cantidad de activos públicos, en muchos casos a precios de saldo. Valga aquí el ejemplo de la principal empresa pública de los ferrocarriles alemanes, Deutsche Bahn. En 2007, esta empresa tenía activos estimados por un valor no menor a 150.000 millones de euros, sin embargo, el precio de venta que se barajaba entonces oscilaba entre los 8.000 y los 25.000 millones de euros.

En el marco de estas políticas de liberalización, a las que deberíamos dar un nombre algo más apropiado, se ha jugado, en realidad, una parte crucial de la ofensiva emprendida por los grandes capitales occidentales con el fin de apoderarse de los principales bienes públicos de todo el planeta. Recuérdese que, entre 1982 y 2002, se privatizaron empresas por valor de diez billones de dólares en el conjunto de la economía global. El 80 % fueron adquiridas por capitales de países de la OCDE, permitiendo la expansión internacional de algunas corporaciones europeas que hasta entonces sólo tenían una modesta base nacional.

El segundo movimiento se despliega en los años dosmil, y se acentúa sobremanera durante los años de crisis. Su *target* principal son aquellas esferas en manos del sector público que sólo gracias a una difícil cirugía financiera pueden encajar dentro de patrones mercantiles. Se trata, como se sabe, de los sistemas públicos de pensiones y de los principales servicios públicos como la educación y la sanidad. En este caso, las políticas de «liberalización» se han articulado a distintos niveles que en realidad se pueden comprender a partir de tres herramientas principales: (1) la entrada de capital privado, ya sea por medio de la privatización de algunos servicios, la subcontratación o la asociación con las instituciones públicas; (2) la introducción de criterios de mercado en los servicios públicos, o lo que es lo mismo la tendencia a

la prestación del servicio con criterios de rentabilidad antes que de calidad; y (3) la transmisión del sobrecoste que supone la generación de beneficio privado a los propios usuarios, bien por medio del copago, bien por el aumento de tarifas.

En este doble proceso, que se extiende durante más de veinte años, los movimientos de protesta han saltado de uno a otro sector, y de uno a otro país, pero casi siempre a rastras de la iniciativa de los reformadores. En cierto modo, la inteligencia del programa neoliberal ha residido en su capacidad para acompasar los tiempos (dilatándolos o acelerándolos) y los espacios a las fricciones y resistencias que se le presentaban.

En el sector ferroviario, por ejemplo, la estrategia de desmantelamiento y privatización de las empresas públicas ha tenido resultados todavía poco concluyentes. Como no podía ser de otra manera, el país pionero fue, de nuevo, Reino Unido. En este caso, el proceso de privatización se extendió de 1993 a 1997 y operó por medio de la creación de distintas empresas a partir de la separación de los diferentes segmentos del servicio (infraestructuras, materiales rodantes, servicios de mantenimiento, transporte de mercancías, etc.). El propósito de esta división, que después se ha repetido en muchos otros sectores, es el de privatizar las partes más rentables, normalmente las que tienen que ver con las operaciones de viaje, y mantener en manos públicas, y casi siempre a pérdida, aquéllas menos rentables, como la construcción y mantenimiento de las infraestructuras.

A pesar de la fuerte oposición de las *unions* inglesas y de los desastrosos resultados de la privatización —cierre de líneas, significativa pérdida de calidad del servicio, algunos funestos accidentes—, pocos años después, la UE publicó el libro blanco *La política europea de transportes de cara al 2010: la hora de la verdad*. En este texto de 2001, se repetían, sin ninguna crítica o modificación significativa, los mismos argumentos y procedimientos que poco antes habían

servido en Reino Unido. De acuerdo con estas directrices, en Alemania, en Francia y en España se han iniciado procesos de segmentación y privatización de las empresas operadoras y de las encargadas de las infraestructuras. Sin embargo, la fortaleza de los sindicatos del sector, no siempre bien amigados con las principales organizaciones sindicales de cada país, ha impedido, al menos todavía, que el proceso de privatización haya ido más allá de sus primeros pasos. En Francia, por ejemplo, las fuertes movilizaciones sostenidas a lo largo de más de 15 años han conseguido bloquear los planes privatizadores. De hecho, las importantes huelgas de transportes de 1995, de noviembre de 2005 y las recientes movilizaciones del sector público francés han frenado en seco un proceso que en el resto de Europa ha avanzado con algo menos de oposición.

En el extremo contrario, el ataque financiero a los «países periféricos» se ha acompañado también de un nuevo impulso a los procesos de privatización, esta vez, dentro del marco, mucho más amplio, de los paquetes de ajuste. Así, dentro de los mal llamados rescates de Grecia y Portugal, se incluyeron menciones precisas a la privatización de las empresas públicas de ferrocarriles. En un tiempo récord, los Comboios Portugueses y la OSE griega han sido diseccionados y puestos en venta. Como ocurriera en otros países, los sindicatos ferroviarios y de transportes de estos países han sido uno de los principales motores de las huelgas generales y de las protestas colectivas contra el ajuste fiscal.

En la navegación área, el proceso de privatización y liberalización ha dado frutos quizás más rápidos y menos conflictivos. En su mayor parte las principales compañías áreas europeas llevan ya más de 20 años en manos privadas. De hecho, desde la puesta en venta de British Airways, a finales de los años setenta, la privatización de las empresas públicas se ha sucedido en cascada (Iberia, Lufthansa, etc.). Pero la llamada liberalización del tráfico aéreo dista mucho de haber terminado con la privatización de las operadoras. Los acuerdos de cielos abiertos firmados con EEUU en 2007 y 2010

y los Reglamentos 2408/92 y el 255/2010 han fijado nuevos objetivos que amenazan a todos los elementos de las infraestructuras aeroportuarias, desde las torres de control hasta los propios aeropuertos. Como de costumbre, Inglaterra hace ya años que colocó en el mercado sus principales aeropuertos, con resultados más que dudosos. El reciente anuncio del gobierno conservador de David Cameron de vender el capital público que restaba sobre las torres de control ha estado en la raíz de las movilizaciones del sector público inglés que culminaron en la huelga general de funcionarios del pasado 1 de julio de 2011 y en la que participaron más de 750.000 trabajadores.

Como en el sector ferroviario, la crisis ha dotado de fuerza renovada a las presiones de los lobbies europeos de la construcción y la gestión de infraestructuras. Todo ello ha culminado en la privatización de la griega Olympic Airlines, la venta de la empresa pública española de gestión del tráfico aéreo (Aena) y los planes de privatización de los aeropuertos españoles y franceses más rentables. Estos planes han provocado importantes huelgas, no siempre populares, de algunos sectores laborales como los controladores aéreos de Francia y España, que protagonizaron una serie de paros «salvajes» en julio y diciembre de 2010. En este último país, la huelga sólo pudo atajarse por medio de un viejo recurso: la militarización de las torres de control.

Las luchas y resistencias contra el ataque a los bienes públicos se han extendido también a otros ámbitos objetivo de la rapiña financiera. Se trata, por ejemplo, de los servicios de aguas, privatizados al completo en muchos países europeos y en proceso de serlo en varias regiones y ciudades españolas. Una importante victoria en este terreno ha sido el rechazo del pueblo italiano a la privatización del agua en el referéndum celebrado en mayo de 2011.

Igualmente, es previsible que en los próximos meses se produzca una nueva ronda de conflictos laborales en el ámbito de los servicios postales. La Directiva 2008/6/CE

ha fijado la fecha del 31 de diciembre de 2012 como tope límite para la liberalización y venta de los servicios postales europeos. En estricta obediencia, Bélgica, Gran Bretaña, Alemania, España, Francia y el resto de países de la Unión Europea han reconvertido sus estructuras postales en empresas convencionales, de las que a su vez se han ido desgajando algunos servicios que ya se han vendido a entidades privadas. Por supuesto, algunos de los países «intervenidos» se han visto obligados a adelantar esta fecha. Es el caso del gobierno griego que ha vendido recientemente la empresa Hellenic Post, dentro del marco del programa de ajuste de mayo de 2010. La privatización provocó, ese mismo octubre, una huelga general del sector que duró cuatro días.

La lista comprende, en definitiva, ferrocarriles, aeropuertos, servicios de aguas, servicios postales y también autopistas, empresas de telecomunicaciones, puertos y casi todas las infraestructuras públicas. Pero, por su especial impacto social, es todavía más importante la mercantilización y privatización de los principales capítulos del viejo Estado social europeo, ahora en crisis. Se trata principalmente de la educación y de la sanidad. El nacimiento y expansión de la universidad-empresa, al igual que la contestación estudiantil a este proceso de desmantelamiento de la educación superior ha sido ya suficientemente descrito. Toca el turno, pues, a los sistemas públicos de salud, objeto también de un fortísimo ataque, contrarrestado con desigual fortuna por movimientos de oposición que han reunido tanto a personal sanitario como a usuarios y pacientes.

Para el capital financiero europeo, así como para buena parte de las nuevas grandes corporaciones de servicios, la privatización o la cogestión de los sistemas públicos de salud representa una gran oportunidad. Los sistemas públicos sanitarios comprenden enormes infraestructuras básicas (ambulatorios, hospitales, centros de especialidades, etc.), pero también multitud de servicios (médicos, limpieza, seguridad,

administración, cocina, etc.) susceptibles de ser troceados y subcontratados. Las cifras son billonarias. El potencial de negocio ronda el 9 % del PIB europeo.

Inglaterra ha sido, otra vez, la vanguardia y el campo de pruebas de las nuevas fórmulas de «mercado». En las dos últimas décadas, el notable y antes eficiente National Health System ha sido troceado y recompuesto en torno a novedosas figuras administrativas como los hospitales PFI (*Private Finance Initiative*). Se trata de hospitales de titularidad pública pero concertados a empresas privadas que se encargan tanto de su construcción como de su gestión y mantenimiento a cambio de un canon anual. Aunque la mayor parte de los estudios señalan que este tipo de financiación resulta a la larga más caro para el erario público, además de que conlleva una importante merma de la calidad del servicio, la UE ha sancionado esta fórmula en innumerables documentos y directrices. En este capítulo es especialmente importante una singular excepción contable. La agencia estadística europea, Eurostat, no computa el pago futuro de estos cánones como deuda —lo que si haría con los préstamos necesarios para la construcción de un hospital público convencional. Esto permite extraer del déficit de las administraciones públicas una considerable cantidad de dinero que efectivamente está comprometida por contratos llamados a durar décadas.

De acuerdo con este guión, Alemania ha convertido toda su red de hospitales en un conjunto de consorcios público-privados que funcionan en régimen de partenariado a través de un particular sistema de tarifas. De acuerdo con este sistema, los servicios hospitalarios cobran una tarifa por cada servicio que realizan. Como no podía ser de otra manera, el resultado es un sutil desplazamiento de la calidad del servicio a la rentabilidad del mismo. Sólo en la década que media entre 1998 y 2008, el gobierno alemán ha liquidado y cerrado 600 hospitales y centros médicos de titularidad pública.

Tanto en Alemania como en Inglaterra, el desmembramiento del sistema público de salud, la privatización de la gestión sanitaria y la tendencia al deterioro de la equidad y la calidad de la prestación del servicio han dado lugar a fuertes resistencias. En Inglaterra, la oposición de los colegios de médicos y enfermeras ha puesto en jaque, en sucesivas ocasiones, los supuestos beneficios que se derivan del nuevo sistema. También en Alemania, las protestas y huelgas se han prolongado desde 2005 casi sin interrupciones. De hecho, las rebajas salariales y la erosión del sistema sanitario han llevado al sindicado sanitario Marburger Bund a convocar paros que, en ocasiones, han tenido una notable intensidad y que normalmente se han llevado a cabo al margen del sindicato mayoritario de los servicios públicos. Es el caso de la huelga de la primavera de 2006 que se mantuvo durante seis semanas y en la que participaron más de 70.000 médicos de clínicas universitarias y hospitales públicos.

Desgraciadamente en ninguno de los dos países se ha logrado revertir el proceso, tal y como sí ha ocurrido en Suecia, que desde 2004 cuenta con una ley que prohíbe explícitamente la privatización de los hospitales. En este país, el ensayo de las fórmulas PFI en algunos hospitales se resolvió con una amplia protesta social que terminó por arrancar la nueva legislación al Parlamento sueco. Un proceso parecido se ha dado también en Canadá donde las protestas de médicos y usuarios han logrado la reversión, vía referéndum, de los hospitales privatizados a la red pública.

El nuevo modelo sanitario es, sin embargo, una prescripción para el resto de Europa. En España la generalización de los hospitales PFI y la privatización de un buen número de servicios sanitarios es ya un hecho en muchas Comunidades Autónomas. En Francia, se ha aprobado recientemente la llamada Ley Bachelot, que toma el nombre de la ministra de Sanidad de la administración Sarkozy. Esta ley abre las puertas a un amplio programa de privatizaciones más o menos encubiertas, al permitir la entrada en el sistema público a hospitales

privados que cobran por sus servicios según el modelo alemán de tarifas. La ley y el debate público sobre el futuro de la sanidad francesa ha dado lugar a paros y manifestaciones del personal sanitario que concluyeron recientemente en una huelga general de todo el sector y en las jornadas de lucha de abril de 2011. Se trata de movilizaciones que han desbordado ampliamente al ámbito sanitario y en las que han participado más de 80 organizaciones que van desde sindicatos médicos hasta colectivos y activistas feministas, LGTBQ y ecologistas.

La crisis y la presión financiera sobre los Estados no sólo ha supuesto una rápida aceleración del proceso de privatización, sino también considerables recortes, así como la introducción de formas de repago (llamado eufemísticamente «copago») que obligan al paciente a realizar un desembolso cada vez que hace uso de los servicios sanitarios. En España, Portugal, Italia, Francia, Grecia e Inglaterra estos recortes han sido en muchos casos masivos e indiscriminados, hasta el punto de liquidar importantes prestaciones sanitarias. De forma notable, Italia incluyó en el paquete de medidas de austeridad de julio de 2011 tanto recortes en los presupuestos de la salud pública como el cobro de entre 10 y 15 euros por cada prueba diagnóstica o consulta médica que realizase un paciente. En Grecia la introducción de este tipo de medidas y los severos recortes que acompañaron al plan de ajuste de mayo de 2010 parecen haber dado ya sus primeros resultados de relevancia estadística: una patente tendencia a la baja de la esperanza de vida. De hecho, en casi todas las movilizaciones y huelgas griegas han jugado un papel primordial los trabajadores del sector sanitario, encabezados por la Federación de Médicos de Hospitales (OENGE).

La revolución que comenzó en el Círculo Polar

La voz de Islandia ha recorrido casi todas las plazas europeas. Su nombre evoca la posibilidad de un impago de la deuda dirigido por un movimiento social capaz no sólo de desafiar el poder de los acreedores, sino también de llevar delante de la justicia a los principales banqueros, desacreditar y expulsar del Parlamento a su clase política y promover una nueva Constitución que pretende incluir novedosos derechos democráticos. Aunque el eco de la revolución islandesa es mucho mayor que sus logros reales, el estallido en la tierra de hielo fue verdaderamente el primero de Europa.

La historia reciente de Islandia podría ser la de un éxito de manual de la ingeniería financiera y de las políticas neoliberales. En 2006, justo en el mismo año en el que se dieron a conocer los primeros síntomas de la inviabilidad de su burbuja financiera, los islandeses aparecían como el país más feliz del mundo, los quintos más ricos por renta per cápita. La clave del éxito parecía residir en el espectacular crecimiento de su sector financiero. Tal crecimiento había sido el resultado de la típica combinación de relajación financiera, grandes dosis de endeudamiento y un exitoso aprovechamiento de las oportunidades que la globalización ofrecía para la transformación del país en un centro de servicios financieros *offshore*, esto es, un paraíso fiscal.

En 1994 Islandia se incorporó al Área Económica Europea. Traducido en políticas concretas, la adhesión implicaba la automática desregulación de los flujos trasnacionales de capital, bienes y servicios. El gobierno islandés abandonaba, casi sin despedirse, el viejo modelo social «nórdico» que le sirviera de referencia, con la aplicación de un amplio programa de privatizaciones de empresas y activos públicos. Todo ello sucedía en paralelo —y también a causa— del rápido ascenso de un grupo de jóvenes políticos, educados en la Escuela de Milton Friedman. Al igual que ocurrió en otros países,

la nueva generación política, ambiciosa y extremadamente desaprensiva, tuvo la inteligencia y la capacidad suficiente para hacerse con el aparato del Estado. Fueron ellos quienes promovieron la privatización de los principales bancos del país —que en buena medida acabaron en sus manos— y dieron forma al particular modelo financiero islandés. Básicamente, éste trataba de aprovechar el contexto global de crédito abundante por medio de una bajísima presión fiscal, a fin de abultar el balance y la cotización de las acciones de sus tres principales bancos privados. Y efectivamente, durante más de una década, estos bancos crecieron hasta tener un tamaño realmente sorprendente en relación con el tamaño del país: en 2007 declararon activos por un valor similar a ocho veces el PIB de la isla. Sencillamente habían prestado e invertido dinero a espuertas gracias a niveles de endeudamiento y apalancamiento que unos años antes hubieran resultado imposibles. La clave de bóveda del modelo venía sellada con el membrete del Banco Central islandés, completamente volcado en el negocio de sus campeones bancarios, y por la alta credibilidad internacional de las finanzas del país, alimentada (¿cómo no?) por las máximas calificaciones de las agencias de *rating*.

En cualquier caso, antes incluso de la cadena de quiebras estadounidense, se dieron a conocer algunos datos que mostraban que algo iba muy mal en el sistema financiero islandés. La silueta de la enorme pirámide de Ponzi que los bancos islandeses construyeran en esos años había empezado a desvelar su desmesurado perfil, al menos en los círculos financieros internacionales. El FMI y el Royal Bank of England levantaron la liebre: las necesidades de liquidez hacía ya tiempo que no podían cubrirse con los activos monetarios en manos de los bancos. En caso de dificultad, el Banco Central de la isla tendría seguramente muy pocas posibilidades de responder como prestamista en última instancia de unos bancos absolutamente sobredimensionados. Pero a pesar de los escándalos financieros, la salida a la incipiente crisis tomó el camino prototípico de toda burbuja financiera: el de una huida hacia delante.

Alguno de los bancos se puso a emitir bonos y cuentas de alta rentabilidad que vendieron principalmente en Reino Unido y Holanda —es el célebre caso de los bonos *icesaver* del Landsbanki. Al mismo tiempo, se articuló una sofisticada ingeniería financiera que, al menos durante un tiempo, permitió obtener liquidez a través de la emisión de bonos de deuda. Se trata de las conocidas «Cartas de amor», por las que los grandes bancos islandeses ofrecieron una gran cantidad de bonos a los bancos regionales de la isla. Éstos, a su vez, los revendían a los principales bancos centrales europeos, incluido otro invitado inevitable a este tipo de fiestas: el BCE.

A pesar, por lo tanto, de los escándalos financieros, la ruptura del gobierno —con la entrada de los socialdemócratas— y de los primeros avisos de que la burbuja bancaria acabaría por explotar, la situación se mantuvo durante más de un año. Al fin y al cabo, los años de bonanza habían permitido a los islandeses un tren de vida incomparablemente más suntuoso que el de sus hermanos europeos. La burbuja bancaria se había acompañado de su propia burbuja inmobiliaria y el crédito había fluido hasta el último rincón de la sociedad. Por otro lado, la clase política, había sido literalmente «comprada» por sus amigos financieros.[18] Los mismos políticos que durante años habían traducido casi textualmente las demandas de la Cámara de Comercio en distintas leyes y decretos, trataron lógicamente de emular el seductor estilo de vida de los altos directivos financieros: los yates, las vacaciones exóticas, las villas en el extranjero.

La gigantesca ilusión acabó, no obstante, por irse al traste. En la primavera de 2008 comenzaron a llegar las malas noticias y dos semanas después de la caída de Lehmans Brothers los principales bancos islandeses se declararon en quiebra. Por supuesto, el gobierno islandés hizo todo lo

---

[18] Se calcula, que en 2007 más de la mitad de los parlamentarios tenían suscritos préstamos a muy bajo interés por un valor superior a las 50 millones de coronas (más de medio millón de euros) como pago a las atenciones prestadas a las entidades financieras.

posible para que sus ciudadanos más respetables pudieran conservar todo su dinero (más intereses) antes de intervenir las cuentas bancarias.

El anuncio de la quiebra hundió inmediatamente la calificación del país y congeló el crédito. Al mismo tiempo, Inglaterra, haciendo uso de la ley antiterrorista, bloqueó los fondos de los bancos islandeses en su territorio. El FMI presentó poco después su específico plan de gestión de la crisis: un severo ajuste presupuestario que afectaba a todos los capítulos de gasto, sanidad y educación en primer lugar.

La quiebra bancaria fue un fuerte mazazo en la cabeza de los ciudadanos de la isla. La sensación de engaño, la corrupción política y financiera y la obvia sensación de verse rápidamente empobrecidos, llevó a la plácida y complaciente población islandesa a una situación de movilización desconocida en su historia. Primero cientos, luego miles y más tarde decenas de miles de personas comenzaron a congregarse todos los sábados en la principal plaza de Reikiavik. A pesar del crudo invierno polar, los gritos, las cacerolas y las canciones entonadas por personas de todas las edades, gruesamente abrigadas, llenaron durante meses las tardes de los sábados. En paralelo, una amplia asamblea popular se constituyó en contrapoder del gobierno, con reuniones semanales orientadas a decidir el futuro del movimiento.

Para el gobierno, la situación se había hecho insostenible. En enero de 2009, dimitió finalmente para dar paso a un gobierno de coalición formado por verdes y socialdemócratas. Sin embargo, la presión financiera no cedió ni un milímetro. Los costes del «rescate» del FMI suponían la increíble cifra de tres veces el PIB islandés. La recapitalización de los bancos obligaba a cada islandés a asumir una deuda similar a la de comprarse una nueva casa. Y he aquí la primera victoria significativa. La presión de las movilizaciones logró arrancar un referéndum sobre las condiciones de devolución de los depósitos que sus bancos habían abierto en Reino Unido y

Holanda. El 93 % de los votos fue negativo: la deuda no se pagaría, al menos por el momento. El descrédito de la clase política era absoluto.

En este resultado jugó también un importante papel la campaña electoral a las elecciones de Reikiavik. Un grupo de artistas, cantantes y cómicos, viejos protagonistas de la onda punk de los ochenta, lanzó su propia candidatura: *The Best Party*. Entre sus propuestas, la de cancelar todas las deudas del país. Entre sus acciones, la de pegar la cara de sus principales banqueros en buena parte de las letrinas públicas. El éxito fue rotundo, obtuvieron la alcaldía de una ciudad que representa casi la mitad de la población de la isla.

Desde entonces la situación política se ha acelerado. La presión popular ha conseguido que la Justicia emprenda procesos contra algunos responsables de la crisis. Se ha abierto una amplia consulta popular acerca de la futura constitución. Por otro lado, se han aprobado una serie de leyes y decretos que han establecido una consistente regulación financiera, al tiempo que ampliaba el ámbito de los delitos económicos. En el mismo sentido, se ha tratado de explorar en términos legales una interesante extensión de las libertades de comunicación y expresión. Es el caso de la polémica ley sobre medios de comunicación que pretende hacer del país un refugio seguro para el periodismo de investigación y la libertad de información. Esta ley protege las fuentes, los periodistas y los proveedores de Internet que alojen este tipo de información. Las movilizaciones han detenido también los planes gubernamentales para aceptar un nuevo programa de devolución de la deuda, con otro triunfo del no en el referéndum de abril de 2011; en éste se preguntaba a los islandeses sobre la pertinencia de un nuevo plan de ayudas bancarias.

El caso islandés muestra, de todas formas, los límites de la «revolución en un solo país». La crisis no ha dejado de ser brutal en términos relativos. De una parte, el crédito internacional está casi completamente seco. La corona islandesa se

ha devaluado en torno a un 80 % y el PIB ha caído en un 15 %. Las administraciones locales han empezado a resentirse por la falta de recursos, al tiempo que daban comienzo las ejecuciones hipotecarias y los despidos —el paro ha pasado del 1 al 8 %. Los bancos comerciales, recapitalizados con grandes costes para el erario público, prestan poco, y prefieren hacerlo de un modo seguro depositando gran parte de sus fondos en el Banco Central. Por otro lado, el gobierno ha tenido que aplicar drásticos recortes en materia de gasto social y la situación económica para el futuro inmediato parece del todo incierta. Baste decir que Reino Unido ha emprendido trámites para llevar al gobierno islandés a los tribunales internacionales como responsable en última instancia de las deudas de sus bancos.

Pero incluso con todos sus límites, el caso islandés sirve de agudo contraste con la suerte de algunos otros países europeos. Al menos, en Islandia, la crisis se ha desencadenado con un atisbo de revolución democrática. En otros Estados de un tamaño más o menos similar, como Irlanda o los pequeños países bálticos, la crisis parece haberse dirigido en una única y estrecha dirección.

El caso irlandés es significativamente revelador de las paradojas del neoliberalismo. El potente ciclo de crecimiento del país en las décadas de 1990 y 2000 ha sido presentado al mundo entero como la demostración palmaria e indiscutible de los efectos macroeconómicos de las recetas neoliberales ortodoxas y, en especial, de las reducciones de impuestos sobre los beneficios. Este ciclo ascendente irlandés se debe dividir en dos fases de muy diferente signo. Desde los primeros años noventa, Irlanda atrae un gran volumen de inversión extranjera directa. La mayor parte de ésta se dirige a la construcción de plantas manufactureras, animada por las deslocalizaciones de empresas estadounidenses, en muchos casos vinculadas al ciclo ascendente de las telecomunicaciones, y atraídas por la pertenencia de Irlanda a la UE y un régimen fiscal conocido por su laxitud. Como contrapartida,

la importante entrada de fondos estructurales de la UE ayudó a compensar la caída de los ingresos fiscales. Se calcula que hasta 2001, el 85 % del crecimiento irlandés provino de las multinacionales norteamericanas —la planta de ensamblaje de Dell quizás sea el mejor ejemplo.

A partir de 2001, sin embargo, la irrupción de dos nuevos factores inauguran un nuevo régimen de crecimiento. Por un lado, la explosión de la burbuja de las punto.com en EEUU reduce significativamente el flujo de inversiones hacia la isla. Por otro, la entrada en la UE de los países del Este produce una salida masiva de capital industrial hacia los países con menores costes laborales. A partir de ese momento, son las finanzas las que dirigen el proceso de acumulación, alimentando una burbuja inmobiliaria feroz que compite con España en aumentos de precio y en número de viviendas construidas. En 2007, la construcción representaba la increíble cifra del 23 % del PIB irlandés.

Sobre estos mimbres se puede ya adivinar cuál ha sido la particular marcha hacia la crisis del tigrecito celta. La característica que ha distinguido a Irlanda durante toda la crisis es la dimensión de los rescates gubernamentales a sus bancos. Las instituciones de crédito de Irlanda que habían estado engordando la burbuja inmobiliaria con recurso a un fuerte endeudamiento en los mercados internacionales se vieron en serias dificultades para mantener sus ratios de solvencia. En un movimiento sin precedentes en Europa, el gobierno irlandés garantizó los depósitos de los bancos con problemas, entendiendo esta nacionalización como una toma a cargo de la sociedad de la totalidad de las monstruosas perdidas de estos mismos bancos. Es el caso, ya mencionado, del Anglo Irish Bank que en 2009 absorbió un rescate público por valor de 30.000 millones. Estimaciones recientes sitúan el coste del rescate de los bancos irlandeses entre los 50.000 y los 70.000 millones de euros, o lo que es lo mismo entre el 25 y el 35 % del PIB irlandés. Con este escenario, no es de extrañar que el déficit público irlandés se disparase y que el país pasara a

ocupar el centro de la diana de los ataques financieros que configuran el actual modo de acumulación en la zona euro. En noviembre de 2010, el gobierno irlandés tuvo que pedir un rescate de 80.000 millones de euros a la UE y al FMI para poder reestructurar su sector financiero.

En ausencia de movilizaciones sociales significativas, y desde luego de nada parecido a lo que ha sido la pequeña revolución islandesa, las contrapartidas para la población han sido brutales. Además de unos niveles de desempleo sólo superados por Grecia y España, los recortes sociales se han dirigido en todas las direcciones: contra la educación y la sanidad, pero también contra los sueldos de los funcionarios, convertidos en los mejores chivos expiatorios de una crisis que obviamente no provocaron. Todo ello sin que los gobiernos irlandeses den muestras de querer subir su famoso, por bajo, impuesto de sociedades. La cuenta del rescate irlandés sale, en definitiva, a unos 23.000 euros por ciudadano.

Un caso algo distinto, pero con consecuencias semejantes, es el de los países de Europa del Este de reciente incorporación, y muy especialmente de los países bálticos. Estos países fueron los primeros en probar lo que luego sería el modelo de gestión de la crisis de la Unión Europea. Como en cierta forma sucedió en Irlanda antes de 2008, los países bálticos (y en general el este de Europa) habían estado creciendo a unos niveles sorprendentes. Los factores de este crecimiento eran fundamentalmente dos. Por un lado, el aprovechamiento de las deslocalizaciones industriales de los países centrales, y en especial de Alemania: la combinación de bajos salarios y competencia técnica se ha convertido en una irresistible ventaja comparativa para el capital industrial europeo —un obrero de Europa del Este cobra de media un 16 % del salario de un trabajador alemán. Por otro, el desarrollo de fortísimas burbujas inmobiliarias que, como la de Letonia, han venido animadas por la rápida entrada de capitales de los países centrales.

De acuerdo con las líneas de división del trabajo dentro de la UE, cuando aparecieron los primeros síntomas de crisis, estos países, que en ningún momento han abandonado las posiciones económicas y sociales más débiles, y que salvo Eslovaquia están todos ellos fuera del euro, fueron los primeros en sentir el golpe de las políticas europeas de ajuste estructural. El caso de Letonia, y después el de Lituania, son quizás los más extremos. Después de haber registrado tasas de crecimiento del PIB cercanas al 10 %, el pinchazo de su burbuja inmobiliaria provocó una drástica reducción de los ingresos del Estado y un aumento espectacular del déficit. Antes de considerar siquiera las necesidades de la población, se instrumentó un plan de rescate destinado a salvaguardar el pago de la deuda a los bancos suecos que habían alimentado la burbuja inmobiliaria de Riga, la capital letona. Curiosamente, y quizás como advertencia para aquellos que creen que la salida del euro produce automáticamente un reequilibrio financiero, se obligó a Letonia a no devaluar su moneda para favorecer el pago a esos mismos bancos. De haber devaluado la moneda nacional, los bancos suecos hubieran tenido muchos problemas para cobrar unas cantidades mayoritariamente nominadas en euros. En su lugar se puso en marcha un agresivo programa de reducción salarial y privatizaciones que ha tenido como resultado una contracción del PIB del 20 % en dos años y una reducción del 30 % del sueldo de los funcionarios públicos, con obvios efectos disciplinarios sobre los salarios del sector privado. Hungría y Rumania han registrado tensiones financieras parecidas, pero en este caso con los bancos austriacos como protagonistas.

El primer levantamiento europeo

Hacia finales de 2009 o principios de 2010, se produce un giro radical en la orientación de la política económica de los principales países europeos. Las mismas recetas que se intentaron aplicar en Islandia, y que se habían impuesto con

éxito en la mayor parte de los países de Europa del Este, se volvían ahora contra las sociedades que alojaban los centros de poder europeos. Se había decretado el fin de los estímulos fiscales, de las políticas keynesianas y de la moratoria a las presiones de los mercados. Las noticias acerca del fraude presupuestario de Grecia y la primera oleada de devaluaciones de las notas crediticias de los «países periféricos» apuntaban el nuevo orden de prioridades. «Los excesos del gasto público son el gran problema de la recuperación económica», se decía. Y como en toda declaración que a la vez funciona como una prescripción, la mayor parte de los países europeos ordenaron severos ajustes fiscales, recortes en sanidad, en educación, subidas en los impuestos indirectos y en las tasas sobre los servicios públicos, y reformas de los sistemas públicos de pensiones dirigidas a aligerar las prestaciones.

Poco importaba que en muchos países el margen de gasto para el sector público fuera todavía muy amplio o, sobre todo, que el potencial fiscal sobre las rentas altas y los beneficios financieros presentase una «elasticidad» al alza absolutamente inexplorada por las políticas económicas. Lo fundamental era que los llamados «inversores en los mercados de deuda pública» obtuviesen las mejores garantías de cobro. Primero, por lo tanto, los intereses de los acreedores; luego todo lo demás.

El ataque sobre el gasto social provocó un efecto seguramente calculado: la primera gran oleada de protestas en Europa. Durante el segundo semestre de 2010, se convocaron más huelgas generales que en toda la década previa. Las jornadas de paro sumaron hasta 3, 4, 5 e incluso 10 convocatorias en algunos países como Francia o Grecia. En casi todos los Estados se convocó al menos una gran jornada de huelga general —la huelga de Portugal del 24 de noviembre contra los planes de austeridad fue, por ejemplo, la primera en 20 años. Los protagonistas parecían ser los grandes sindicatos. Antiguos gestores, o al menos convidados de piedra, del modelo neoliberal se veían ahora obligados a salir a cielo

abierto. Las reformas eran tan brutales, el descontento tan grande, la presión de las minorías sindicales tan potencialmente descontrolada, que el recurso a la movilización parecía inevitable.

En algunos países y regiones esta primera oleada de huelgas adquirió un grado de extensión y enconamiento más propio de otras épocas. En otros, sin embargo, se mantuvo en los cauces contenidos de la «responsabilidad» institucional y el «respeto» a los cauces de representatividad. En todos, aunque todavía dentro de los límites marcados por formas de protesta primordialmente nacionales (contestación a las reformas país por país) o sindicales (huelgas de los colectivos laborales con mejores condiciones de trabajo), parecía reflejarse un malestar creciente y abrasador que amenazaba con desbordar todo lo conocido hasta ahora, aunque éste no tuviera todavía medios propios de expresión. Es por eso que no deja de ser interesante analizar algunos de los casos más destacados.

La Francia orgullosa de su pasado insurreccional fue quizás la primera en estallar de una forma no regulada por los cauces institucionales. El turno de las restricciones fiscales a nivel europeo y las presiones de la patronal francesa (MEDEF) llevaron al anuncio de un proyecto de ley que ampliaba la edad de jubilación de los 60 años a los 62, al tiempo que incrementaba los años de cotización para alcanzar el 100 % de la pensión. Era mayo de 2010, atrás quedaba un largo simulacro de negociaciones con los principales sindicatos y las declaraciones de Sarkozy: «No lo haré [...]. Me comprometí con los franceses. No tengo potestad para hacerlo. Y esto es importante para mí». La oportunidad de desarmar uno de los últimos bastiones del sindicalismo europeo debió pesar más que su vieja promesa electoral.

El malestar, la indignación, alcanzaron pronto el punto de ebullición. Huelgas en algunos sectores, protestas estudiantiles, la agitación y la discusión en la red anunciaron

las primeras convocatorias de huelga. La gran mayoría de los sindicatos, con la CGT al frente, decidieron mantener la unidad de acción, a pesar de la diversidad de posiciones en cuanto a los métodos y los objetivos a medio plazo. El patrimonio y la legitimidad social de los sindicatos era y es en Francia mayor que en la gran mayoría de los países europeos.

Al mismo tiempo que avanzaban los trámites parlamentarios para la aprobación de la ley, el conflicto adquiría temperatura, azuzado por la prepotencia y el narcisismo de *le petit Bonaparte*. Como era de esperar, Sarkozy intentó aprovechar las protestas para afirmarse en su imagen de salvapatrias. Presentó la reforma como un sacrificio imprescindible para Francia. La respuesta social se expresó en la convocatoria de hasta 10 huelgas generales entre mayo y noviembre de 2010. En octubre, con diferencia el mes más caliente, Francia permaneció durante días sin transporte público, sin escuelas y con los hospitales al mínimo. El episodio más conocido, la huelga y ocupación obrera de las refinerías, amenazó con frenar en seco el país, hasta el punto de forzar una situación parecida a la militarización. La patronal perdió a buen seguro miles de millones de euros. Pero la huelga se perdió. A pesar, pues, de no haber conocido un periodo de movilización tan intenso desde 1968, y de que la imagen del presidente se deteriorase hasta niveles bufonescos, la reforma se aprobó.

La sensación de derrota fue especialmente intensa. A un pulso tan fuerte con resultados tan pobres, le suele seguir una atmósfera densa y pesada de pesimismo y resignación. Se pone en cuestión la utilidad de la huelga como método de lucha, se deteriora la legitimidad de los sindicatos y aumenta un poco más la desafección hacia los partidos de la izquierda institucional, incapaces de aprovechar la fuerte agitación social de los meses previos. Y sin embargo, las huelgas fueron un laboratorio de lo que sucedería después en otros países: el uso de Internet y de las redes sociales como vehículo de comunicación, especialmente importante para las generaciones

más jóvenes; y su función también como nicho para una esfera pública al margen de los grandes medios de comunicación. En las huelgas y manifestaciones, el protagonismo sindical cedió por momentos a otro tipo de sujetos y colectivos.

En el corto plazo, no obstante, la sensación de victoria y el optimismo de la patronal y los poderes financieros les animó a profundizar un poco más la mordida sobre el cuerpo social. Poco después de la aprobación de la reforma, el gobierno anunció un nuevo paquete de medidas de austeridad, que incluía la modificación de la llamada «Renta de Solidaridad Activa». El mensaje que se difundió para hacer pasar la pastilla era que Francia tiene comparativamente muchos más derechos que sus vecinos. ¡Cómo resistirse a la homologación europea! Mientras, se publicaba, casi inadvertido, el siguiente dato: el patrimonio de las grandes fortunas de Francia se había incrementado un 25 % en el último año.

La prensa europea, los gobiernos, las altas instancias de la Unión y también todos aquellos agentes, sujetos y personas dispuestos a reivindicar una democracia puesta en suspenso por los intereses financieros siguieron muy de cerca los acontecimientos de Francia. En los meses de septiembre y octubre se convocaron huelgas generales en España, Portugal, Bélgica y Grecia. Los resultados fueron en su mayoría mucho más modestos que en el país galo. En el Estado español, por ejemplo, la huelga convocada para el 29 de septiembre fue casi un fiasco, debido principalmente a la poca capacidad de interpelación de unos sindicatos entregados desde hacía décadas a la gestión del mercado laboral más precarizado de Europa. En Portugal y en Bélgica las huelgas lograron al menos paralizar el país, al tiempo que aumentaban la tensión política en relación con las reformas, sin que por ello lograran detenerlas. Fue sin embargo en Grecia donde los acontecimientos adquirieron mayor relevancia, y esto no sólo por la magnitud de las protestas, como por su especial significado dentro del nuevo puzzle europeo que se ha formado con el desarrollo de la crisis de la deuda soberana.

Grecia recibe la terrible medicina del plan de ajuste en mayo de 2010, justo cuando se anunciaba la reforma del sistema de pensiones en Francia. Como se ha tratado de explicar, las movilizaciones en este país se sucedían de forma casi ininterrumpida desde 2008 y la desafección política de las mayorías griegas respecto a su clase política y a la oligarquía local era quizás mayor que en cualquier otro Estado europeo. De hecho, en términos de su economía nacional, Grecia era, mucho antes del préstamo-trampa del FMI y de la UE, una economía de rapiña, si bien con sus élites nacionales como principales beneficiarias. Legado del régimen de los coroneles, pero aumentado y reforzado por las prescripciones neoliberales, la amnistía fiscal a los más ricos era prácticamente total. Baste decir que en 2010 menos de 15.000 griegos declararon cobrar anualmente más de 100.000 euros: mientras, en las periferias de Atenas, proliferaban las mansiones de los capos de las navieras y del negocio turístico. Valga también el significativo hecho que desde que comenzara la crisis de la deuda, se han sacado del país 60.000 millones de euros en depósitos bancarios, una cifra asombrosa y equivalente al 25 % del PIB del país. Dicho de otro modo, la permanente acusación sobre el Estado griego acerca de sus increíbles niveles de corrupción e ineficacia debería empezar por su evidente falta de voluntad para gravar las rentas más altas y evitar el fraude fiscal. En el otro extremo, la representación de los salarios en el PIB griego es entre diez y quince puntos menor de lo que acostumbra a ser en el resto de los países europeos, un escaso 35 %. Cuando se consideran los salarios medios de los jóvenes griegos, entre los 400 y los 700 euros, se entiende bien que no sean éstos quienes mejor se identifiquen con los políticos de su país.

En estas condiciones, poco puede sorprender que la preparación del primer plan de rescate de mayo provocara la mayor movilización social desde la caída de la junta de los coroneles. Las huelgas de estudiantes, las movilizaciones de médicos y profesores y los mismos sujetos que protagonizaron las revueltas de 2008, se veían ahora respaldados por

el apoyo del KKE (Partido Comunista Griego) y los sindicatos. El 5 de mayo, una marcha en la que participaron más de cien mil personas culminó con un intento de ocupación del Parlamento. La situación era crítica. El gobierno estaba completamente bloqueado. La canciller Angela Merkel, convertida en guardiana de los intereses financieros, respondió acelerando la tramitación del plan de rescate. Pero a pesar de la aprobación del plan, la reacción social mayoritaria no se ajustó a la resignación. Durante todo el año se sucedieron huelgas generales, manifestaciones, choques con la policía, las movilizaciones y paros en todos los sectores afectados por las privatizaciones y los recortes.

En la otra esquina del continente, en el centro aparentemente pacificado del experimento neoliberal, también se produjeron acontecimientos interesantes. Las espectaculares huelgas de los estudiantes ingleses a finales de 2010 tuvieron algunos elementos singulares y novedosos. Como se sabe, en Reino Unido la actividad de los sindicatos es prácticamente testimonial. El rodillo de Margaret Thatcher, la reconversión de la izquierda en el *New Labour* y la propia hegemonía en el país de algunas de las mayores corporaciones financieras del planeta acabaron por destruir casi todos los resortes institucionales de oposición. Y sin embargo, las huelgas de noviembre, masivas y multitudinarias, parecieron invertir la situación, aunque sólo fuese por unos días.

El detonante fue uno de los muchos paquetes de recortes del gobierno Cameron. El 9 de noviembre de 2010, el gobierno conservador-liberal llevó al Parlamento una reforma educativa que preveía una subida espectacular de las tasas universitarias. Las matrículas pasarían de costar 3.000 libras al año de media, a cerca de 9.000: las subidas alcanzaban el 300 %. El plan era casi una traducción literal de un ambicioso informe empresarial, que llevaba un título tan significativo como *Independent Review of Higher Education Funding and Student Finance* [Revisión independiente de la financiación de la educación superior y las finanzas universitarias]. En el texto

se abogaba por una reducción del 80 % de la financiación pública a las universidades. Éstas quedarían definitivamente convertidas en agentes empresariales, entregadas a la difícil competencia en el mercado global del saber y a la «sabia» administración del cálculo de costes y beneficios en todos sus capítulos.

La reforma era un golpe casi mortal a la universidad pública y a casi cualquier cosa que en un futuro se asemejase a calidad de la enseñanza y rigor académico. En cualquier caso, el apartado universitario era sólo uno de los capítulos más significativos de un programa mucho más amplio que comprendía la contracción del empleo público, la reforma del sistema público de pensiones, recortes en sanidad y otras prestaciones sociales y la privatización de importantes bienes públicos, incluidos, por ejemplo, los emblemáticos bosques nacionales.

El componente de clase de la reforma era también evidente: las familias de pocos recursos, sin ayudas públicas, dejarían de enviar a sus hijos a la universidad, al tiempo que la mayor parte de los estudiantes tendrían que recurrir a los préstamos al estudio —otro provechoso nicho de negocio para las instituciones financieras.

El mismo día de la aprobación de la reforma, el 9 de noviembre, se convocaron las marchas de estudiantes. Más de 50.000 personas acudieron a la cita. La manifestación se desbordó. Algunas imágenes recorrieron el mundo: los rostros asustados del Príncipe Charles y su esposa, Camila Parker Bowles, acosados por una multitud indignada que envolvía a su paso el coche blindado que los transportaba —sin duda el encuentro más funesto e imprevisto de su vida—; pero sobre todo, las fotos y vídeos de varios miles de jóvenes asaltando la sede del partido tory, tomando su azotea como quien toma la fortaleza del noble rentista. Aunque obviamente las organizaciones estudiantiles no consideraron estas acciones como las más oportunas para el movimiento, su poder

simbólico capturó la atención del mundo entero. La rabia de los manifestantes se había acrecentado seguramente por la incorporación de miles de jóvenes que nunca pudieron ir a la universidad, pero que encontraron en la protesta de los estudiantes un medio propicio de expresión.

A finales de noviembre llegaron nuevas y multitudinarias manifestaciones que acabaron con la ocupación de diez universidades británicas: Londres, Edimburgo, Leeds, Newcastle, Manchester. Repentinamente, actores que se habían dado por muertos recuperaban protagonismo y capacidad de acción.

La primavera árabe

Mohamed Bouazizi es el nombre de un joven diplomado tunecino de 26 años en paro; en el mes de diciembre de 2010 se quemó a lo bonzo en señal de protesta. La policía le había humillado después de haberle confiscado las frutas y verduras que vendía sin permiso en un puesto ambulante. Era la única forma que tenía de ganarse la vida. Su inmolación fue una poderosa chispa. En los meses siguientes, el estallido de Túnez contagió a casi una docena de países encadenando varios meses de movilizaciones sociales en contra de la corrupción y el autoritarismo de sus oligarquías políticas y económicas.

La revolución tunecina comenzó en las provincias de Qasserine y Sidi Bouzid, distritos turísticos del este del país, y sólo después se extendió a la capital. Hablamos aquí de «revolución», y no sólo insurrección, en tanto y en cuanto las protestas llevaron a la caída de un régimen político, el de Zine El Abidine Ben Alí, que se había perpetuado durante 23 largos años. A raíz del gesto con el que Bouazizi acabó con su vida, jóvenes y estudiantes tomaron las calles. Durante varios días, se manifestaron contra la violencia policial, la corrupción administrativa y las dificultades económicas.

La represión cruel e indiscriminada produjo entonces sus primeros muertos; la indignación y las movilizaciones se extendieron por todo el país.

A partir de ese momento, el método de protesta se vuelve distinto. Entre los meses de enero y febrero, la Qasba, que alberga en su interior algunos ministerios importantes así como el Palacio de Justicia y el Ayuntamiento, fue ocupada como símbolo de la protesta, desalojada violentamente por la policía y vuelta a ocupar de nuevo. Como en los primeros momentos, en las manifestaciones y en las ocupaciones participaban fundamentalmente jóvenes, algunos estudiantes, otros en paro, otros trabajadores de los servicios, precarios de distinto tipo, pero también personas de todas las edades y condiciones. La perseverancia y la tenacidad de los tunecinos contra los gases lacrimógenos, las porras e incluso las balas disparadas por los francotiradores, colocaron pronto al gobierno ante un tesitura casi imposible: o aumentaba la escalada de la represión o la situación se desbordaba. Y esto último fue lo que pasó. A pesar de las detenciones, los desaparecidos y los muertos provocados por la represión, así como de los tibios intentos de reforma, la situación terminó por salirse de todo cauce conocido. El 14 de enero, Ben Alí se vio obligado a huir del país. Poco más de un mes después, el primer ministro del gobierno de transición Mohamed Ghannouchi, también se vio obligado a dimitir. El nuevo gobierno prometió elecciones constituyentes.

La revolución consiguió derrocar al dictador Ben Alí, así como al gobierno de transición que le sucedió. Los tunecinos debían, desde luego, permanecer alerta ante el desarrollo de los acontecimientos, con la desconfianza propia del que está acostumbrado a las promesas incumplidas, pero con la fortaleza y la convicción de quien se sabe capaz de hacer huir a un tirano.

El ejemplo tunecino tuvo su primer eco de excepción en El Cairo. El derrocamiento de Ben Alí podía inspirar una estrategia parecida contra el gobierno largo (¡30 años!) del corrupto

y autocrático Hosni Mubarak y su odiada ley de emergencia, que desde 1981 había permitido la suspensión de los derechos constitucionales, la censura de prensa y la arbitrariedad policial. La revuelta comenzó el día 25 de enero, «Día de la ira», con varias manifestaciones en las que participaron decenas de miles de personas en El Cairo y Alejandría. Durante los días siguientes las protestas continuaron, crecieron y adquirieron mayor relevancia. El día 29, el gobierno, tras declarar que el movimiento era el producto de agentes extranjeros, ordenó el toque de queda. Los manifestantes no lo respetaron. La plaza Tahrir, centro simbólico de la capital, se convirtió en el espacio privilegiado de las protestas cuando grupos de varios cientos de personas se establecieron allí día y noche. El día 1 de febrero al menos un millón de personas marcharon por la salida de Mubarak. El triunfo parecía posible.

En las movilizaciones participaban fundamentalmente jóvenes (estudiantes, parados, trabajadores de distintos sectores), pero desde la primera semana se sumaron también diferentes colectivos obreros, protagonistas de las importantes huelgas de los meses anteriores; así como buena parte de la comunidad cristiana copta e incluso los Hermanos Musulmanes, la principal organización islamista del país. El movimiento no se organizaba según ningún esquema convencional. De forma polifónica y descentralizada, las convocatorias se discutían y circulaban por la red (distintos foros y grupos de redes sociales hacían las voces de ágora pública) y luego adquirían una cierta formalidad en los encuentros en la plaza. Sea como fuere, la constitución de un frente tan amplio de oposición y el fuerte eco internacional de los acontecimientos empujaron al presidente a una coyuntura cada vez más complicada. El 2 de febrero, Mubarak mandó a sus seguidores a combatir a los manifestantes en la calle. La neutralidad del ejército desbarató la estrategia.

Durante los días siguientes, la ocupación de la plaza y las grandes manifestaciones continuaron, crecieron, ganaron en confianza. Lo imposible unos meses antes estaba a punto de

hacerse realidad. El 11 de febrero Mubarak abandonaba el país. El gobierno de transición encargó a una junta militar la preparación de las primeras reformas democráticas.

Tras Túnez y Egipto, las revueltas proliferan a velocidad exorbitante: Argelia, Libia, Marruecos, Yemen, Jordania, Siria, Arabia Saudí, Omán o Bahréin. Vienen empujadas unas por otras, animadas por el éxito de sus precedentes. Hasta la fecha de publicación de este libro, en ningún otro país, salvo Libia, se ha llegado a deponer al gobierno. En Argelia se ha derogado el estado de excepción (vigente desde 1992) y se han abierto consultas para la reforma constitucional, pero Buteflika ha conseguido mantener una relativa estabilidad política. De forma parecida, en Marruecos, se ha convocado recientemente un referéndum a fin de recortar los poderes del rey Mohamed VI, pero sin que se cuestione radicalmente su autoridad. Lo mismo ha sucedido en Jordania donde se ha anunciado un aumento del sueldo de los funcionarios, la creación de nuevos empleos y el nombramiento de un nuevo gobierno.

En los otros países, la respuesta ha sido represiva, brutalmente represiva, llegando en algunos al extremo de la guerra civil. El caso más traumático ha sido el de Libia. La intransigencia de Gadafi y su violenta contestación a los insurgentes ha desencadenado un conflicto armado especialmente cruento. Finalmente, el apoyo de Francia e Inglaterra —siempre a cambio de tratos preferenciales en las explotaciones petrolíferas— ha permitido a los rebeldes acabar con el régimen del dictador. En Siria, las primeras reformas, como la abolición de la Ley de Emergencia (vigente desde 1963) y el nombramiento de un nuevo ejecutivo, no consiguieron terminar con las protestas, lo que dio paso al asesinato indiscriminado de manifestantes por orden del gobierno. En Bahréin, el estado de excepción se reforzó con un amplio despliegue de tropas saudíes; y en Yemen, el estado de excepción no pudo impedir los fuertes combates entre las tropas del régimen y milicias tribales.

Pero, al fin y al cabo, ¿qué tienen de común las revoluciones de los países arabo-musulmanes y lo que antes y después estaba sucediendo en la otra orilla del Mediterráneo? En principio, las diferencias parecen enormes, en primer lugar, por los resultados (la deposición de dos autócratas y una guerra civil en al menos otro país); en segundo lugar, por el contexto social, político y cultural en el que se producen. Se trata efectivamente de países de mayoría musulmana, con niveles de renta per cápita mucho más bajos que los de las naciones europeas y casi todos con regímenes autoritarios. Pero iguales diferencias se podrían encontrar entre los distintos países afectados por la ola revolucionaria. Entre el Yemen rural y el Túnez turístico, la distancia es probablemente mayor que entre éste y Francia.

Y sin embargo, las revoluciones árabes, y en especial las del Norte de África, son en muchos aspectos similares a las europeas. Lo son en lo que se refiere a sus causas, que acaban por desvelar los vínculos económicos y de poder entre las dos orillas del Mediterráneo. Y lo que es mucho más sorprendente, lo son en las formas del protagonismo social, los métodos, los objetivos, las demandas. La primavera árabe constituye, de hecho, un sorprendente manifiesto acerca de cómo las luchas y los movimientos pueden reconstruir los vínculos políticos y sociales que las fronteras y el racismo institucional impiden ver.

En el orden económico, las insurrecciones de los países del Norte de África se desenvuelven como el reflejo invertido de las europeas. La crisis financiera se debe colocar, de nuevo, en el centro de la explicación. Antiguas colonias y dominios de las potencias europeas, los países del Magreb han ocupado desde la década de 1960 una función de reserva de mano de obra barata para los países centrales. En los años noventa y dosmil, un importante flujo de magrebíes ha ido ocupando los trabajos de perfil más bajo dentro del sector agrícola y de servicios de los países del sur de Europa. Marroquíes, argelinos, tunecinos han ido a parar, en efecto, a los precarios mercados de trabajo de los países de la Europa mediterránea como España, Francia e Italia.

La crisis y la recesión económica han invertido la situación. No sólo se ha frenado en seco la demanda de trabajo, sino que muchos de estos empleos han desparecido, con el resultado de una una notable reducción de las remesas. A su vez, el cierre de las fronteras a los trabajadores norteafricanos, y las restrictivas políticas migratorias europeas, han reducido drásticamente las oportunidades de alcanzar una fuente de ingresos en la orilla norte del Mediterráneo. El descontento, la frustración y la ansiedad ante el futuro se ven otra vez atrapados, y sin solución, en los países de origen.[19]

La crisis ha afectado también a la industria turística, de especial importancia para países como Túnez o Egipto. La reducción del número de visitantes ha repercutido en el empleo en el sector y el descenso de la entrada de divisas en la capacidad adquisitiva de estas economías. En el mismo sentido, la caída relativa del precio de los hidrocarburos durante 2009 y parte de 2010 ha reducido los ingresos de los países que son más dependientes de este recurso. Por último, la subida del precio de los alimentos ha deteriorado notablemente el poder adquisitivo de los sectores sociales de menor renta. La explicación de estas subidas es compleja pero se reconoce de nuevo en dos factores que tienen su raíz en la hegemonía neoliberal: la especulación en el mercado de futuros que durante la segunda parte de 2010 reforzó la tendencia al alza del grano y de las materias primas; y la retirada de la subvención a los alimentos en algunos países, como Libia, por indicación del FMI.[20]

---

19 Durante todo el año 2011, el conflicto armado en Libia ha provocado la afluencia masiva de refugiados a la isla italiana de Lampedusa, además de los problemas de tránsito que inmigrantes tunecinos y libios están teniendo en las fronteras de Francia e Italia. Igualmente, son muy importantes los movimientos de población registrados durante todo este tiempo entre Egipto, Túnez, Libia y Argelia, así como entre Siria y Turquía.

20 Poco sorprende que, entre otras medidas para frenar las protestas, países como Argelia (que ya tuvo su antecedente en la «revuelta del pan» de 1988), Marruecos («revueltas del pan» de 1981) y Jordania se hayan apresurado a aplicar programas de subvención del precio de los alimentos.

Como no podía ser de otra manera, desde una perspectiva de larga duración, las políticas de liberalización en la región han producido algunos de los desequilibrios sociales y económicos que se encuentran detrás de las revueltas. Desde hace varias décadas, los préstamos que muchos de estos países contrajeron con el FMI y la consiguiente tutela sobre las políticas económicas, han supuesto un punto de inflexión para las poblaciones. Así, por señalar sólo algunos ejemplos, la reconciliación de Libia con Occidente se saldó con su ingreso en el FMI, la creación de zonas especiales de libre comercio, la cesión de algunos yacimientos de hidrocarburos a las grandes transnacionales occidentales y la supresión de la subvención a los alimentos. El Egipto de Mubarak, asesorado también por el FMI y el Banco Mundial, adoptó un amplio programa de privatizaciones de empresas públicas y liberalización de la economía, que incluía la eliminación de algunos subsidios públicos, la reducción del número de funcionarios, impopulares tasas sobre la vivienda y toda clase de facilidades a la inversión extranjera. En Marruecos, uno de los principales objetivos de las protestas han sido las multinacionales concesionarias de diversos servicios básicos (en su mayoría españolas y francesas) como el agua, la luz, los transportes y la recogida de basura. Estos ejemplos se pueden hacer extensibles a Túnez, Argelia, Jordania, etc. Como antes en América Latina y ahora en los países del sur de Europa, los programas de ajuste y liberalización han acentuado aún más la polarización social, empobreciendo a estratos enormes de población y amenazando a la raquítica clase media de estos países.

Por supuesto, el interés de las grandes corporaciones occidentales y la enorme riqueza de recursos energéticos de la región, han sido la única prioridad de la UE y de los gobiernos europeos, aunque sea a costa de la sacrosanta democracia y de los derechos humanos. No por casualidad, la mayor parte de los gobiernos y los tiranos de Oriente Medio y el Norte de África han sido generosamente apoyados y financiados por Occidente. A fin de subrayar la mezquindad europea en la «crisis árabe», baste decir que en los meses centrales de las

revueltas, las dos únicas cuestiones que se discutían en las altas instancias de la Unión eran la estabilidad de la región, o lo que es lo mismo la continuidad de los negocios, y el control de las fronteras ante la previsible oleada de refugiados y de migrantes económicos. Los intereses de la UE se manifestaron con absoluto descaro en la visita que el entonces ministro de Exteriores tunecino, Mohamed Ouanies, del ya extinto gobierno de transición, realizase a Bruselas en febrero de 2011. En su entrevista con la portavoz de política exterior de la UE, Catherine Ashton, ambos se pusieron de acuerdo a fin de «asegurar que los intereses fundamentales de Europa en Túnez [la liberalización de la economía y el control de la emigración ilegal] se mantengan a pesar del cambio de gobierno».[21]

En otras palabras, los objetivos de la revuelta árabe parecen, si bien siempre situados en su contexto específico, casi los mismos que los de los movimientos europeos: la imposición de políticas económicas predatorias que sólo favorecen a las élites económicas locales e internacionales; y por supuesto unos gobiernos cada vez más alejados de las necesidades de sus poblaciones, corruptos y plenamente funcionales a los intereses de las mismas oligarquías. A pesar, por lo tanto, de que la naturaleza despótica y autoritaria de estos gobiernos apenas deja espacio a las formalidades democráticas comunes en Europa, se puede decir que la desafección política opera de igual modo en las revueltas de ambos lados del Mediterráneo.

En la orilla sur, el inmovilismo político de los gobernantes[22] ha degenerado, como en las partitocracias europeas, en prácticas cada vez más aberrantes. En todo los casos, los gobernantes se han provisto de poderosas redes clientelares

21 Gadafi, a fin de normalizar las relaciones con la UE, se transformó en guardián de la frontera sur europea por medio de la creación de enormes campos donde permanecían internos miles de migrantes africanos.

22 A excepción de Buteflika en Argel (13 años) y de Ben Alí en Túnez (23 años), el resto de «mandatarios» llevaba gobernando sus respectivos países desde hace un mínimo de 30 años (Siria, Egipto, Libia, Marruecos, Jordania, Yemen, Omán, Bahréin).

que infectan casi todas las esferas de la vida social y económica. Son, por ejemplo, escandalosamente conocidos los nombramientos de los magnates del sector automovilístico y turístico en los ministerios de transporte y turismo de la república egipcia o las redes empresariales y de altos cargos gubernamentales de las familias de los dictadores Ben Alí (y su esposa Leyla Trabelsi), Mohamed VI y Gadafi.

Por otro lado, el principal sujeto de la revuelta ha sido, como en Europa, una generación joven, poco o nada integrada en sus respectivos sistemas políticos y económicos. Sometida a condiciones brutales de exclusión laboral, con niveles de paro que oscilan entre el 10 % de Egipto y el 35 % de Tunez —y que para los menores de 30 se multiplican por dos o por tres—, sus oportunidades se han reducido a la economía informal, los pequeños apaños precarios y la emigración. Y sin embargo, se trata de poblaciones formadas, que en algunos de estos países han tenido un amplio acceso a la educación superior. De hecho, sólo los prejuicios raciales y la islamafobia rampante hace que pocos sepan en Europa que el número de universitarios entre los jóvenes tunecinos es similar al de los franceses, o el de los egipcios casi lo sea al de italianos.

Pero quizás lo más significativo es que lo que a partir de la primavera serían las revueltas de las plazas en Grecia o el 15M en España tengan similitudes innegables con las revoluciones del Norte de África. Especialmente en Túnez y Egipto, la práctica ausencia de partidos políticos y líderes destacados se ha suplantado por prácticas de democracia directa y comunicación horizontal, sin que por ello dejen de ser importantes los apoyos de algunas organizaciones formales. Del mismo modo, el bautizo político de esta generación, que huye de los marcos tradicionales de representación y encuadramiento, se ha servido de Internet, la telefonía móvil y las redes sociales para lanzar y extender rápidamente las convocatorias, así como para socializar consignas y debates fuera del marco de unos medios de comunicación invariablemente

sometidos a la censura y el control político. De un modo que va más allá de la metáfora, la revolución europea, en caso de ocurrir, habrá comenzado en el Norte de África.

El movimiento de las plazas europeas

La «primavera árabe» precedió a los meses calientes del sur de Europa. En plena crisis de la deuda soberana y del ataque financiero contra los llamados países periféricos, primero en Portugal, pero sobre todo en España y Grecia se produce una ola de movilizaciones que adquiere una magnitud y una escala mucho más cercana a lo que ocurrió en los países norteafricanos que a lo que sucediera en Europa en los años precedentes. El salto es sobre todo cualitativo.

El primer síntoma de que algo nuevo se estaba gestando se produjo en Portugal. Como ya se ha visto, la situación del país luso arrancaba de un punto de partida algo diferente al del resto de los países llamados «periféricos». A diferencia de España o Irlanda, no hubo nada parecido a una burbuja inmobiliaria portuguesa. La década de los dosmil se caracterizó más bien por el estancamiento económico, la continuidad del desmantelamiento industrial —especialmente de su principal industria de exportación, el textil— y la observancia de las políticas de ajuste fiscal prescritas por la Unión Europea. Dicho de otro modo, las recetas neoliberales no dieron lugar a ningún milagro económico, por temporal o precario que éste fuera. A pesar de ello, la crisis golpeó duramente a su sistema bancario, que requirió también de intervenciones milmillonarias, si bien mucho más moderadas que las de Irlanda o Reino Unido.

La debilidad económica de Portugal y el aumento de la deuda pública hasta el 90 % del PIB fueron, no obstante, motivos suficientes para incorporarlo como país-objetivo de los ataques financieros. Alumno especialmente aplicado, durante buena parte de 2010, Portugal se esforzó en

cumplir con las «recomendaciones dirigidas a tranquilizar a los mercados»: congelación del sueldo de los funcionarios, reducción de las pensiones y las prestaciones por desempleo, recortes en educación y sanidad, disminución de las administraciones públicas, privatización completa de las principales empresas públicas. Todo inútil. Según el guión acordado por los predadores financieros, la espiral de reducciones de la calificación de la deuda y el aumento de las primas del bono luso llevaron a la mesa de negociaciones un plan de rescate por valor de 78.000 millones de euros. La contrapartida: otro paquete de medidas que tal y como reconoció la UE prolongará la recesión hasta al menos 2013 y provocará un aumento del paro hasta niveles del 13 %. Sin remilgos, tras el anuncio del rescate, Moody's degradó la calificación de la deuda lusa a la condición de *bonos basura*.

La sensación de abuso y chantaje, el éxito de la huelga general de noviembre, el fiasco de la clase política y sobre todo el precedente de la primavera árabe fueron el detonante de una movilización completamente novedosa. A través de redes sociales y algunos foros de Internet, grupos de jóvenes convocaron para el día 13 de marzo una gran manifestación. En el *Protesto de la Geraçao da rasca* [Manifiesto de la generación en apuros], que servía de declaración de intenciones, se leía: «Nosotros los desempleados, "quinientoseuristas" y otros mal remunerados, esclavos disfrazados, subcontratados, empleados temporales, falsos autónomos, trabajadores intermitentes, pasantes, bolseros, trabajadores-estudiantes, trabajadores, madres, padres e hijos de Portugal [...] creemos tener las herramientas y recursos necesarios para alcanzar un futuro mejor». La interpelación de esta alianza precaria, construida desde abajo, alcanzó un insospechado éxito: unas 300.000 personas salieron a la calle. Pocas semanas después, la elecciones generales se saldaron con uno de los mayores porcentajes de abstención de la historia del país: un 41 %.

La originalidad del movimiento portugués fue el inmediato precedente de sus hermanos ibéricos. España había sido hasta ese momento uno de los países más pacificados de la Unión. A pesar de haber alcanzado los niveles de paro más abultados de Europa con un tasa superior al 20 % —que ascendía al 40 % para los menores de 25. A pesar de que el endeudamiento de la población era de los más altos del continente y de que el descalabro de su burbuja inmobiliaria dejara entre 2009 y 2011 a casi medio millón de hogares sin su casa. A pesar, también, de que el gobierno presidido por el socialista Rodríguez Zapatero, había sido uno de los más delicadamente obedientes a la hora de aplicar las políticas exigidas por los «mercados»: reforma laboral, reducciones salariales de los empleados públicos, reestructuración de las pensiones y aumento de la edad de jubilación, fuertes recortes de los gobiernos regionales en los sistemas públicos de educación y sanidad, etc. A pesar de todo ello, la situación parecía calmada, ocupada plenamente por el teatro de la contienda electoral entre los principales partidos y el chantaje de los mercados. El débil seguimiento de las convocatorias de la huelga de funcionarios primero, en junio de 2010, y la de todos los trabajadores, en septiembre de ese mismo año, parecían confirmar el pronóstico de una atmósfera de apatía, conformismo y resignación.

Y sin embargo, hacía ya tiempo que algo se agitaba bajo la superficie. Desde 2009 diversos grupos y plataformas habían ido proliferando, fundamentalmente a través de grupos y foros de Internet.[23] A primeros de abril de 2011, una imprevista manifestación estudiantil señaló un cambio tanto de

23 La lista es interminable, la más importante fue quizás Democracia Real Ya! (democraciareal.org) encargada de organizar y convocar la manifestacion del 15 de mayo, pero también se deberían mencionar Juventud sin Futuro, NoLesVotes (que nació contra una ley que otorgaba discrecionalidad a las sociedades de derechos de autor para cerrar webs de distribución de contenidos), Estado del Malestar, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, además de una multitud de organizaciones sociales que desde hacía tiempo trataban de lanzar iniciativas concertadas contra los paquetes anti-crisis.

protagonistas como del rumbo de las protestas. La convocatoria para el 15 de mayo de una multitudinaria manifestación en casi todas las ciudades importantes del país pareció confirmarlo. Ni sindicatos, ni partidos, sólo una multitud de personas y pequeñas organizaciones, convocados a través de Internet por la plataforma de reciente creación: Democracia Real Ya!. El lema: «No somos mercancías en manos de políticos y banqueros». La ausencia de siglas y la interpelación directa a cualquiera, pareció desencadenar el salto. El 15 de mayo salieron a las calles en torno a 100.000 personas en más 50 ciudades. Las pancartas auto-fabricadas y las consignas dejaban ver la crítica al bipartidismo («PSOE-PP la misma mierda es»), el rechazo a los recortes de crisis («Esta crisis no la pagamos», «No es una crisis, es una estafa») y la denuncia del chantaje financiero («¿Por qué manda el mercado, si yo no lo he votado», «Botín, cabrón, trabaja de peón»).

En Madrid, unas 25.000 personas llegaron a la Puerta del Sol. Apenas un puñado decidieron acampar esa noche hasta el domingo siguiente, 22 de mayo, fecha de las elecciones municipales y autonómicas. Era el principio de lo que se llamaría Movimiento 15M. Al día siguiente, tras una asamblea de 1.000 personas, 200 se quedan a dormir. A las 5:30 de la mañana, la policía los desaloja. La tarde del 17 de mayo se concentran de nuevo 10.000 personas y en asamblea deciden: «No tenemos casa, nos quedamos en la plaza». El ejemplo se extiende y para el día 18, hay ya asambleas y acampadas en más de 50 ciudades.

Durante los días siguientes, las prohibiciones de los actos, las amenazas de desalojo y el tratamiento más bien mezquino de los grandes medios de comunicación sólo consiguieron aumentar el número de concentrados en la Puerta del Sol y en el resto de las plazas. Sencillamente, en algunas ciudades ya no se cabía. La proximidad de las elecciones del día 22, y de la «jornada de reflexión» previa, en la que se prohibió la realización de actos y demostraciones políticas, tampoco detuvo el *crescendo*. Al grito de «Lo llaman democracia y no lo es», el sábado 21, varios

centenares de miles de personas salieron a la calle. Sólo en Madrid, la estimación más conservadora hablaba de 30.000, si bien probablemente fueran dos o tres veces más. Para entonces, el movimiento se había hecho internacional con concentraciones en Londres, Bruselas, Lisboa, Ámsterdam, Atenas, Milán, Budapest, Tánger, París, Berlín y Roma.

La fuerza y la alegría demostrada en la semana del 15 de mayo, el enorme desafío institucional que habían representado las concentraciones masivas en los días previos a las elecciones, el poder simbólico de la ocupación de las principales plazas, abre realmente el espacio para un nuevo tipo de movimiento y organización. La ocupación de las plazas se mantiene durante semanas, las asambleas de cada ciudad crecen, se organizan, se dividen en grupos de trabajo y comisiones. Sólo en la región metropolitana de Madrid funcionaban 120 asambleas de barrio a principios del verano de 2011, más de 50.000 personas acudían regularmente a estas nuevas ágoras políticas.

Al mismo tiempo, el movimiento gana en movilidad, multiplica sus objetivos: se da inicio a una espiral de acciones que van desde el bloqueo público y masivo de desahucios hasta la ocupación de los centros y servicios sanitarios que eran objeto de recortes. La clase política está descolocada, completamente perpleja ante la entrada de un actor tan inesperado como inapropiado. Sus actitudes van del guiño oportunista de algunos sectores de la izquierda, a las más mezquinas acusaciones de las derechas neocon que relacionan a los «indignados» con ETA. En todos los casos reina la confusión, una situación fuera de quicio que manifiesta la absoluta carencia de resortes institucionales que permitan la integración, la traducción en política institucional de unas demandas que de entrada comienzan con un «No nos representan».

Lo que está sucediendo no es un simple estallido, sino el inicio de un ciclo de movilización y protesta. Las grandes citas del verano así lo confirman. Las manifestaciones

contra el llamado Pacto del Euro del 19 de junio reunen probablemente a mucho más de medio millón de personas con gigantescas concentraciones en Madrid y Barcelona. Las llamadas Marchas Indignadas que desde distintos puntos del país pretendían confluir en Madrid para los días 23 y 24 de julio convocan también a decenas de miles de personas. Por esas mismas fechas el principal instituto de estudios sociales (el Centro de Investigaciones Sociológicas) publicaba los datos de su última encuesta: entre 6,5 y 8 millones de personas afirmaban haber participado en el 15M, entre 0,8 y 1,5 decían haberlo hecho de una forma muy intensa, más del 70 % de la población decía tener una imagen positiva del movimiento. La suerte para el otoño parecía echada: será más caliente que todo lo conocido en las últimas décadas.

Sólo diez días después del 15 de mayo español, nacía en Grecia el «movimiento de las plazas». Las presiones de los saqueadores financieros habían extremado las condiciones de una atmósfera ya de por sí irrespirable, pero que ahora encontraba una vía de refresco con el recurso al método egipcio, adaptado a Europa en las plazas españolas. La secuencia de los acontecimientos se acelera desde la primavera. En el mes de marzo, la agencia de calificación Moody's bajaba la nota de la deuda griega a la condición de bonos basura con el «argumento» de que existían serias dudas acerca de la capacidad de pago del gobierno griego a partir de 2013, cuando se diera por finalizado el plan de rescate de la UE y el FMI. Pocos podían ya ser engañados: la agencias de *rating*, puntas de lanza de los intereses financieros, estaban castigando a Grecia por los efectos sobre el crecimiento que estaban produciendo los brutales planes de ajuste que ellas mismas prescribían. En las semanas siguientes, la rentabilidad del bono griego subió hasta el 12 %, justo en el momento en el que el BCE anunciaba una subida de tipos que, si bien de forma tibia, amenazaba con erosionar el modelo de negocio de los bancos europeos sobre la deuda pública. El juego de los guardianes europeos se mostró implacable: el BCE, frau Merkel, el gobierno finlandés y los gabinetes

de expertos exigieron un endurecimiento de las condiciones de «rescate» de los países periféricos. La contrapartida para Grecia es un programa de privatizaciones por valor de más de 50.000 millones de euros. Quinielas, loterías, apuestas hípicas, las autopistas, frecuencias radioeléctricas, un almacén de gas natural, activos inmobiliarios... ¡se baraja incluso que la Acrópolis sirva de aval como garantía frente a los impagos! Las privatizaciones se adjudican bajo la tutela del Deutsche Bank alemán y el francés Paribas.

El plan de ajuste levanta una nueva oleada de protestas, pero a diferencia del ciclo de movilizaciones de 2010, el ejemplo de la revuelta árabe y sobre todo del 15M permiten un cambio de sentido de las prácticas de protesta. Desde el 25 de mayo, las concentraciones masivas y pacificas en la Plaza Syntagma (justo delante del Parlamento) suman más gente que las grandes manifestaciones anteriores y cargan de nueva legitimidad a la protesta. A partir de los primeros días de junio, hasta 200.000 personas se reúnen diariamente con el fin de bloquear la aprobación del plan de privatizaciones en el Parlamento heleno. Como en el 15M español, las redes y los foros virtuales dirigen la protesta fuera de las organizaciones tradicionales, la hacen llegar a sectores irrepresentables hasta ese momento. Como en el 15M, también, las concentraciones se acompañan de asambleas masivas, de un ejercicio de democracia directa que se convierte en marca y seña del movimiento. Los partidos políticos herederos de la *Metapoliftesis* se han revelado simples peones en manos de los poderes financieros que no han tenido mayor problema en asestar un golpe de estado contra la democracia y la sociedad griega. Cualquier reactivación de la política sólo será posible desde la democracia directa y la implicación de la población en las decisiones que afectan a su futuro.

De otro lado, la agenda política del movimiento parece más clara, más depurada. La consigna principal «No debemos, no vendemos, no pagamos», lo dice todo. El enemigo directo son las instituciones europeas que representan los

intereses del capital financiero. El objetivo es forzar el impago de la deuda. El gobierno y los partidos políticos acusan inmediatamente el golpe. El gobierno se tambalea. Comienza a hablarse de reestructuración de la deuda y de referéndum para la aprobación de los recortes. El seísmo se deja notar en Europa. Algunos de los líderes europeos que acuden a la cumbre de Luxemburgo amenazan con el desastre económico si Grecia renegocia su deuda. No se puede ni mencionar el impago. Nicolás Sarkozy reúne a los bancos franceses para que intenten dar algo de sostenibilidad y racionalidad al saqueo financiero: se empiezan a proponer planes a medio plazo de reestructuración de la deuda.

En principio todo parece inútil, los intereses sobre las emisiones de deuda griega se sitúan en el 20 %. La situación social bascula entre el estado de excepción y la guerra de baja intensidad. Se desencadena entonces una huelga general de dos días que tiene un seguimiento del 80 %. Finalmente, cercado por una marea ciudadana, pero severamente amenazado por la UE, el Parlamento griego aprueba el quinto tramo del rescate: 12.000 millones de euros con las contrapartidas más draconianas que se hayan visto desde el comienzo de la crisis. Y sin embargo, poco después, se da inicio a un nuevo programa de reestructuración de la deuda griega. El FMI, la Unión y algunos bancos europeos aceptan refinanciar la deuda griega a unos intereses de sólo el 3,5 %. No se trata de un impago forzado políticamente, menos aún si se tiene en cuenta que el programa de ajuste se mantiene intacto. Pero se trata sin duda de una primera demostración de fuerza de lo que puede el movimiento cuando sabe apuntar sobre el corazón del negocio financiero.

Hasta la fecha de publicación de este texto, tanto los «indignados» griegos como el 15M español se pueden considerar como las expresiones más avanzadas del movimiento europeo contra la crisis. A diferencia de la secuencia de huelgas generales que durante 2010 recorriera sobre todo Francia y Grecia, con réplicas en casi todos los países europeos, el movimiento

de las plazas griegas o de los indignados en España no ha venido protagonizado ni por los colectivos laborales afectados por los programas de reestructuración, ni tampoco por los grandes sindicatos que trataron de detener en vano la reforma de los sistemas públicos de pensiones. El protagonismo ha estado en manos de las generaciones más jóvenes, las más precarizadas y afectadas por la crisis, sometidas a una creciente degradación del sistema universitario y profundamente desafectas de los sistemas políticos de sus respectivos países. Pero a diferencia también de los movimientos contra el CPE en Francia en 2006 o de los jóvenes griegos de 2008, estos movimientos no se han definido de acuerdo con una condición particular —estudiantil, etaria o ideológica. Antes bien, su extraordinario eco social se ha apoyado en una vocación inclusiva, que convoca a todos y a todas, sin más excepción, quizás, que los responsables políticos y financieros.

En cierto modo, es esta interpelación genérica, en la que parece cabe todo el mundo, la que se presenta como superación de las grandes convocatorias lanzadas por las viejas organizaciones sindicales durante 2010, y que salvo contadas excepciones carecieron de legitimidad suficiente como para producir un contagio social de amplias proporciones. En este sentido, el movimiento de las plazas griego y el 15M español han rehuído de las posiciones ideológicas tradicionales, en una suerte de apelación genérica a las «personas normales y corrientes». De hecho, el espíritu del movimiento viene marcado por una suerte de pacto entre iguales: ni grupos ni organizaciones, indiferencia o rechazo a toda forma de protagonismo de siglas o de portavoces autoproclamados. Esto mismo es lo que se refleja en las formas de acción y protesta, especialmente en la renuncia al imaginario del enfrentamiento con la policía, de los encapuchados, de los saltos, de las acciones minoritarias y espectaculares.

Las acciones y las convocatorias son públicas, declaradamente no violentas, y tratan en todo momento de bloquear la respuesta represiva. Por supuesto, eso no impide la desobediencia, el juego y la tensión entre lo legal y lo

legítimo que se manifiesta en el bloqueo de parlamentos nacionales y regionales, la ocupación permanente de los centros simbólicos de las grandes ciudades, la paralización de desahucios y el bloqueo de las redadas policiales contra los migrantes. Pero siempre se actúa de forma pública y con una declaración de principios completamente pacífica: invitación a la participación y mecanismo de contaminación de la simpatía por el movimiento.

En estos movimientos madura también una forma de acción y movilización política que apunta sobre la descomposición de los sistemas de partidos y de todas las instancias de representación que sostienen las democracias formales en Europa, desde los sindicatos hasta los medios de comunicación. La propia convocatoria del 15M se realiza con un significativo eslogan: «No somos mercancía en manos de políticos y banqueros». Tres frentes: la falta de democracia, el dominio de los mercados y los excesos de políticos y banqueros. Las consignas más coreadas «No nos representan» y «Lo llaman democracia y no lo es» profundizan en esta dirección: los partidos y el sistema institucional no representan los intereses de la población, sino los suyos propios y los de los intereses corporativos y financieros; la exigencia de democracia debe incluir necesariamente derechos sociales, reparto de la riqueza y respeto por lo común, en primer lugar por los servicios públicos.

Quizás lo más significativo sea que la denuncia de la corrupción y de la degradación de la democracia formal se invierte en la práctica de una democracia en acto, en un ejercicio de la decisión y la participación con formas estrictamente asamblearias. Las plazas ocupadas se convierten en ágoras públicas, donde la discusión se desborda más allá de la toma de decisiones estratégicas. Por momentos toma, incluso, la forma de un proceso constituyente, donde se discute literalmente de todo y en el que cada cual tiene la oportunidad de pensar, plantear, dialogar y cuestionar las propuestas más osadas. El problema de la representación se diluye

en la decisión colectiva en una multitud de asambleas que proliferan en cada ciudad, en cada barrio.

La democracia se vive y se experimenta así como un ejercicio cotidiano de discusión y decisión, pero que no se limita a los encuentros físicos. Se desarrolla también, y quizás sobre todo, en la red. Foros, redes sociales, blogs... éstos construyen el propio espacio público del movimiento, que en ocasiones no sólo sirve de alternativa a los grandes grupos de prensa, sino que desvela y liquida las manipulaciones informativas así como el propio estilo de comunicación de los grandes medios. La red permite al movimiento construir una inteligencia colectiva y descentralizada, un espacio horizontal y reticular de discusión y de toma de decisiones que desconcierta y supera a las organizaciones tradicionales.

Quizás todavía sea pronto para calibrar el impacto de estos movimientos. Pero las signos de su extensión europea han sido visibles durante todo el verano. Conatos de replica en Francia, que sólo por medio de la intervención represiva pudieron ser abortados, varias decenas de pequeñas acampadas en distintas ciudades europeas y sobre todo un particular «movimiento de las plazas» en muchos de los centros urbanos de la antigua ex-Yugoslavia. El capítulo más importante hasta la fecha ha sido el de los indignados israelitas y sus protestas contra la carestía de la vivienda y los recortes sociales. El 7 de agosto, llegaron a reunir a cerca de 200.000 personas en Tel Aviv. Pocos días después el ejercito desencadenó el ataque más virulento contra las milicias palestinas desde la ocupación de Gaza. Que este hecho esté o no conectado con lo que probablemente sea el movimiento social más grande en la historia reciente del país, que quiera o no devolver a sus jóvenes a lo que es «realmente importante para el Estado» es algo que está por determinar. En todo caso, el 3 de septiembre una nueva manifestación reunió a más de 350.000 personas.

La complejidad de lo que está pasando en Europa, y la dificultad de convertir el malestar en formas políticas de movimiento, se demostró de forma meridiana en la última coda de este verano: los *riots* de Londres. El día 6 de agosto, muy cerca de uno de los principales corazones financieros globales (la City de Londres), se produjo repentinamente una serie de enfrentamientos violentos con la policía, quemas de edificios y saqueos de comercios. Los disturbios continuaron durante las 5 ó 6 noches siguientes. Hackney, Tottenham, Brixton, los barrios étnica y socialmente más complejos de la capital británica fueron el epicentro de las revueltas. El desencadenante, como unos años antes en París, fue la muerte de un joven por disparos de la policía. El racismo institucional y la violencia policial hacían de nuevo las veces de vehículo de unas protestas que tenían una profundidad temporal de varias décadas de abandono social y económico, agravado más si cabe por el enorme desempleo juvenil de los últimos años y los recortes sociales impuestos por el gobierno Cameron.

El Premier no tardó en señalar la revuelta como «actos de delincuencia pura y dura», resultado de un puñado de irresponsables moralmente depravados. Los viejos epítetos de las declaraciones burguesas sobre las revueltas de pobres del siglo XIX volvían a dominar las posiciones de la clase política y de los medios de comunicación. Poco se dijo de las condiciones de vida de los jóvenes, del desempleo, del racismo y el clasismo de la policía y de las políticas económicas. Y esto en una de las ciudades más fastuosas del mundo, en la que inmiseración del proletariado juvenil —en buena parte de origen migrante, e invariablemente condenado al subempleo, la precariedad y la cárcel— convive con los sueldos de más de un millón de libras de los ejecutivos financieros de la City, los lujosos yates de los viejos *docks* rehabilitados y las viviendas multimillonarias de los ricos de medio planeta. Menos se dijo aún que en Inglaterra el 10 % más rico de la población tiene un patrimonio 273 veces mayor al del 10 % más pobre, o que el apabullante despliegue de ostentación y riqueza de la boda

del heredero a la corona fuese mencionado por los protagonistas como motivo evidente de los disturbios. Las revueltas terminaron en pocos días con más de 1.800 detenidos y media docena de muertos.

III. Algunas notas para la revolución europea

Desempleados, temporales, estudiantes, trabajadoras de los servicios peor pagados, mileuristas, ochocientoseuristas, *woorking poors*, precarias de toda laya y condición, sindicalistas vocacionales, jubilados, usuarios y usuarias de unos servicios sociales y sanitarios en proceso de privatización, trabajadoras y trabajadores de los servicios públicos, indignados por la corrupción y la degeneración de la democracia, indignadas por la desfachatez de unos gobiernos siempre serviles a los intereses financieros. Desde una infinidad de posiciones sociales, económicas y subjetivas hemos logrado levantar el primer movimiento europeo contra la crisis: 15M en España, movimiento de las plazas en Grecia, «indignados» quizás en todos los países europeos durante este próximo año.

Lo que este movimiento ya ha realizado se puede considerar como la mayor insurrección democrática del último medio siglo. «No nos representan» decimos en la Puerta del Sol, en Plaça Catalunya y en muchas otras ciudades. Y con ello, declaramos el fin del monopolio de la representación en manos de un sistema de partidos cada vez más absorto en los problemas de su propia reproducción, y menos atento a las necesidades y preocupaciones de los ciudadanos que dicen representar.

Reivindicamos la democracia a pie de calle, en el ejercicio de la discusión pública, allí donde se puede hablar libremente y donde todo puede ser puesto en cuestión. Y con ello, desvelamos el miedo a la democracia que padecen de forma congénita la clase política y las élites económicas.

Nada más inoportuno, más inapropiado que una multitud decidida a cuestionarlo todo. Nada menos aceptable, más peligroso, que la democracia cuando ésta quiere ser ejercida sin chantajes, ni artificios institucionales.

La emergencia del movimiento, nuestra emergencia, ha mostrado la mentira de la crisis. Ésta ya nunca más podrá ser presentada como un acontecimiento inexorable, más próximo a las catástrofes naturales, en cuanto a sus causas y consecuencias, que a los simples accidentes en el orden de los asuntos humanos.

El movimiento apunta responsabilidades, cuestiona las políticas económicas, desmiente a los expertos, aprende rápido; en otras palabras, descubre el curso arbitrario de la crisis. Hoy sabemos que la inmiseración social, los feroces programas de ajuste, las crecientes desigualdades que fracturan el continente, son resultados innecesarios, o mejor dicho, que sólo son necesarios para enjuagar las pérdidas de las grandes corporaciones y garantizar las ganancias financieras. Por eso como en Grecia, decimos «No debemos, no vendemos, no pagamos»; no aceptamos el chantaje de las deudas impuestas, de las deudas adquiridas de forma fraudulenta en pos del beneficio bancario. No aceptamos vivir en una Europa plegada a los intereses de los más poderosos.

Sabemos que los retos a los que nos enfrentamos son enormes. Las élites europeas han apostado todas sus cartas al beneficio financiero, y de esta forma han certificado una economía política contraria a la recuperación y al crecimiento. Lo que algunos todavía llaman «economía real» —la producción de bienes y servicios, el empleo, etc.— ha sido, en efecto, sacrificado en la pila de ofrendas a los acreedores. Traducido en términos políticos, esto quiere decir que en la alternativa entre salvar a los bancos o salvar a la economía, se ha apostado exclusivamente por lo primero. El problema es que cada vez resulta más imposible hacer compatible la expansión financiera y el crecimiento económico,

tal y como parece comprenderse de una situación de depresión salarial, ataque al gasto público y debilidad de las exportaciones. Sin el recurso a una nueva ronda de burbujas financieras y endeudamiento masivo, no hay alternativa de crecimiento para Europa.

En estas condiciones, la enorme masa de liquidez, la sobreabundancia de capital, que hoy puebla los mercados financieros, sólo puede seguir el camino de la acumulación por la vía de la predación de las mayorías sociales y del gasto social. Como antes en los países del Sur, la paradoja de poner el pago a los acreedores por delante de cualquier cosa, redunda a la postre en una mayor depresión económica. La imposición de los intereses financieros implica un reparto más desigual del ingreso social; por lo tanto, una mayor depresión del consumo, que se convierte a su vez en causa principal de la crisis. Que este sencillo dilema resulte tan difícil de entender a las élites europeas denota no sólo su falta de inteligencia, sino sobre todo su extraordinario espíritu destructivo, cuando no suicida.

En esta suerte de capitalismo vuelto contra sí mismo, los predicadores de la ortodoxia a cualquier precio —y en esto igual da que se trate de políticos, periodistas o expertos—, contestan al movimiento y a las protestas con el mismo chantaje: o aceptáis la píldora de la austeridad y las reformas, o el resultado será peor. Cuatro años de crisis, casi tres de reformas, nos parecen suficientes. Lo único que nos han devuelto es otra ola de recesión que hoy comienza de nuevo a cubrir Europa: más paro, más precariedad, más recortes sociales. La novedad en esta ocasión, si es que esto se puede llamar tal cosa, es que en esta caída a cámara lenta habrá menos recursos para rescates bancarios y corporativos, y que éstos tendrán que extraerse de forma aún más brutal sobre las mayorías sociales.

Ante este chantaje, debiéramos ser capaces de discriminar cuál es realmente la crisis que nos importa. ¿La crisis del sistema financiero manifiesta en unos balances bancarios

frágiles y descompensados por las operaciones de riesgo —casi siempre con beneficio extraordinario— que acometieron en la década pasada? ¿La del empleo, convertido en la única forma de acceso a la renta, en una época en la que éste sólo puede venir provisto de forma masiva con bajos salarios y por medio de la creación de una multitud de puestos de trabajo precarios, muchas veces inútiles y superfluos? ¿La de una Europa a la deriva, que desengancha vagones a medida que conviene a los países más ricos? ¿La crisis fiscal de los Estados, atosigados por las deudas contraídas con los mismos bancos que antes rescataron?

La crisis es sencillamente una mentira, una broma de mal gusto si no fuera por sus consecuencias sociales. La Europa de principios de siglo, la decadente Europa que ni de lejos puede medirse con su pasado, cuando era la metrópolis de los mayores y más terribles imperios, es sin embargo más rica de lo que lo haya sido jamás. Su riqueza se desborda en los mercados financieros, se expresa en forma de títulos financieros, de bonos de deuda, de derivados, de títulos con garantía hipotecaria. El problema no es pues la crisis, la supuesta escasez de dinero público, de empleo, de recursos, sino sencillamente el reparto de un botín que años de prácticas financieras abusivas, deterioro y corrupción del Estado, desregulación rampante e ideología de mercado, han conseguido poner en manos impropias. Incluso desde una perspectiva conservadora, la gran contradicción del capitalismo europeo es que o bien emprende estas políticas de reparto y de redistribución, y acepta la devaluación de los títulos de deuda, en contra de los grandes acreedores, o no habrá salida alguna a su crisis.

Es esto mismo lo que constituye el núcleo duro del hueso europeo al que ningún político de peso, ningún gran banquero, ninguna fuerza institucional a escala continental, ha sabido o querido morder. Es como si Europa se hubiera convertido en un espectro que se apaga y en el que ya no quedase rastro de su promesa de democracia.

El movimiento hace muy bien así cuando apunta a la clase política y a los llamados líderes europeos, cuando la emprende con ellos con acusaciones que invariablemente basculan entre dos polos: o bien confirma que son representantes a sueldo de los poderes financieros, o bien que el deterioro de su imaginación y su inteligencia es tan irreversible que ya ni siquiera son capaces de entender la situación. Todos los puntos intermedios son, por supuesto, reconocibles. La consecuencia de la estupidez y de la corrupción de la clase política es el actual desconcierto, la confusión, la sensación de permanente asalto, en la que cada acontecimiento parece más grave que el anterior.

Para el emergente movimiento europeo esto significa que de frente no tiene ninguna contraparte institucional capaz de pensar y lanzar un programa consistente de reformas que «salve» la crisis. Ningún *New Deal*, ningún programa de distribución y de reordenación progresiva del sistema financiero y del gasto público que sea capaz de remontar la situación sin una debacle social. De hecho, si ya es un grito a voces que «el movimiento es una revolución», esto no se debe exclusivamente a la radicalidad de sus propuestas, sino a que no hay espacio para la reforma. Ésta no se atisba ni en el debate público, ni en los informes oficiales, ni siquiera en las alternativas que barajan los expertos. Así, mientras la situación degenera, el movimiento se radicaliza. Y esta radicalización es mayor en las sociedades del este y el sur de Europa donde la ausencia de alternativa institucional significa la aceptación de un mayor deterioro social o por el contrario una rebelión que ponga completamente patas arriba los sistemas políticos y económicos de la Unión. Pero incluso, en los países del centro (como Alemania y Francia), aparentemente a salvo del fuerte empobrecimiento que hoy experimenta la periferia del continente, a medio plazo sólo parece viable una única exigencia: la democratización profunda de todas las instituciones europeas y la redistribución social de la riqueza. Caso contrario, el estancamiento económico y la crisis financiera acabarán por acelerar la degeneración de sus sistemas de

protección social, en una espiral de deterioro social y económico en la que el caso griego puede ser sólo un modesto prototipo experimental.

Por eso nada parece más urgente que superar las divisiones nacionales y regionales que hasta ahora han servido de diques de contención frente a las respuestas sociales a la crisis. La crisis se despliega, se «organiza» y se explota a escala global, pero las representaciones, los discursos y la gestión de sus posibles soluciones siguen recurriendo a los tópicos y personajes, siempre estrechos y provincianos, de los diferentes Estados europeos. La crisis viene provocada, en efecto, por los problemas de la expansión del beneficio financiero, para manifestarse luego como crisis fiscal de los Estados en el ensayo, hasta ahora exitoso, de un amplio programa de expolio corporativo sobre el gasto público. Nada en este sentido es menos acertado que las representaciones y explicaciones centradas en las responsabilidades «nacionales» que comparten tanto los discursos expertos de los economistas como las opiniones más populistas. Al final se produce una convergencia, nada casual. De las exigencias de ajuste fiscal para Grecia o Italia, que en última instancia parecen residir en la falta de competitividad de sus economías, se pasa con toda naturalidad a la explicación psicologizante acerca del carácter despilfarrador e indisciplinado de los países meridionales. El sesgo moralizante del cuerpo teórico de la economía liberal se traduce rápidamente en acusación popular: «No pagaremos la fiesta del sur de Europa». Y es en este mapa de representaciones patéticamente nacionales, en donde reaparece y se hace fuerte la extrema derecha europea.

En cierto modo, esta hiperderecha contemporánea es la imagen invertida y deformada del movimiento europeo. Se trata de un problema relativamente antiguo, que durante la década de los dosmil alcanzó niveles superiores al 10 % del electorado en países como Francia, Holanda o Italia, pero que en los últimos años ha rozado el techo del 20 o incluso del 30 % en Suiza,

Finlandia y Austria.[24] Frente a la crisis y la creciente fragilidad de masas, el populismo nacionalista inventa explicaciones inverosímiles, pero explicaciones al fin y al cabo, con un fuerte poder emotivo. El paro y el deterioro de los sistemas sociales se convierte en un problema de «exceso demográfico», casi malthusiano, que se manifiesta en primer lugar en la competencia «desleal» de los trabajadores de otra procedencia y/o con otro color de piel. El deterioro económico se lee en clave nacional, pero sus causas están de nuevo en el «exterior», en una excesiva generosidad hacia los países pobres («vagos») o en la inundación de productos extranjeros baratos y de mala calidad. Como no podía ser de otra manera, la solución pasa por la expulsión de los migrantes, la «nacionalización» de la economía, la vuelta a los valores patrios y el respeto a la gente «común» —normalmente representada en un modelo familiar normativo de clase media, que en la vida real se ha convertido en una aspiración cada vez más imposible para la inmensa mayoría. Por eso sorprende poco que el *establishment* europeo no vea en el ascenso de la extrema derecha más que un problema menor. A la hora de pactar y de encontrar aliados, las formaciones nacional-populistas se presentan como una alternativa cómoda, en la misma medida en que desvían eficazmente la atención y la indignación social hacia chivos expiatorios marginales desde el punto de vista de la gobernanza financiera.

Por supuesto, el ascenso político de los partidos de la derecha más autoritaria y populista viene a ocupar el nicho ecológico creado por el vacío de alternativas y el deterioro de

24 En casi todos los países europeos (salvo la notable excepción de Francia), el último mapa electoral resultante de las elecciones al Parlamento europeo ofrecía un significativo crecimiento de este tipo de formaciones políticas, pero este avance era notablemente mayor en los pequeños países ricos del centro y el norte de Europa; precisamente en aquéllos en los que el impacto de la crisis ha sido más moderado, pero en los que el deterioro progresivo de la posición de las clases medias y de los sistemas de protección social puede apuntar sin ambages sobre los extranjeros o las políticas redistributivas de la Unión. Estos países, como Finlandia, Holanda o Austria, han sido también los principales aliados del gobierno alemán en el endurecimiento de las condiciones de crédito y «rescate» a los países del este y el sur de Europa.

todas las opciones del arco electoral, incluidas especialmente aquéllas que se declaran de izquierdas o de extrema izquierda. Una desafección de masas, que bien se debería considerar ganada a pulso por las mismas organizaciones que reivindican estas posiciones ideológicas —y muchas veces sólo ideológicas. El desencanto respecto de los viejos partidos socialistas viene de la mano de sus sucesivos y rotundos fracasos a la hora de proponer políticas distintas a aquéllas que venían marcadas en el guión del concierto neoliberal. En muchos países, han sido estos mismos partidos quienes se han encargado de aplicar las peores reformas laborales, los más severos recortes sociales, las políticas más serviles a las grandes corporaciones europeas. El resto de las izquierdas, desde los verdes hasta las distintas izquierdas comunistas, no sale mucho mejor parado; incapaces, en su mayoría, de moverse más allá de la oposición «responsable» de la reforma «posible» —el capitalismo verde, la vuelta a los modelos productivos basados en el I+D— y una radicalidad nostálgica e improductiva, normalmente apoyada en estéticas y símbolos poco o nada adaptados a situaciones sociales profundamente mutadas. Con razón, el 15M español, los indignados griegos, buena parte de los huelguistas franceses y casi todo lo que ha ocurrido de interés en la escena política europea se ha producido al margen de las izquierdas institucionales, de los canales de representación y de las esperanzas electorales.

La novedad del movimiento reside en su desesperanza en la política oficial y en las soluciones de las élites; su impaciencia contra las actitudes responsables que desembocan en la delegación y la espera inútil de las iniciativas que vienen «desde arriba». Su alternativa pasa por una solución «desde abajo», por un cuestionamiento total de las formas democráticas capturadas por el formalismo de la representación. Así es como el movimiento se presenta abierto a todas y a todos, no definido en términos ideológicos, plenamente predispuesto a un debate nuevo y radical. En este sentido, su «agenda» coincide más bien poco con lo que tradicionalmente se considera como el «programa» económico y político de las izquierdas,

cuyo campo paradigmático —todavía bien representado en los sindicatos— sigue siendo el de los principios de la vieja socialdemocracia: más empleo, más regulación estatal, más propiedad pública, más derechos sociales pero siempre condicionados al empleo y al estatuto de nacionalidad.

Pero ¿de qué modo se puede seguir hablando de derecho al empleo cuando éste ha sido masivamente precarizado y sometido a los brutales mecanismos de ajuste automático de las necesidades empresariales? ¿De qué modo se puede seguir hablando de derechos sociales cuando éstos han sufrido un deterioro tan grave, o cuando siguen estrechamente vinculados a formas de empleo que no alcanzan a todos —véanse los niveles de desempleo estructural en la UE? ¿De qué modo la propiedad pública puede servir a los intereses de la población, cuando ésta se ha convertido en un simple activo financiero en manos de una clase política cada vez más irresponsable? ¿Es posible acaso seguir defendiendo los derechos sociales y la regulación económica en el estrecho marco de las fronteras estatales? ¿A cuántas personas dejan fuera la nación y la ciudadanía del acceso a los más elementales derechos y provisiones sociales? ¿Cómo se puede sostener el artificio del Estado soberano en el complejo marco de los flujos financieros globales y de una producción eficazmente globalizada?

Son preguntas que circulan, como muchas otras, en las plazas, en las asambleas y en los foros del movimiento. Pero las respuestas no son ya las convencionales. Aparecen referencias y problemas nuevos ligados a la financiarización, a la dimensión global de la crisis, al hecho de que las sociedades europeas —y especialmente sus grandes metrópolis— son sociedades cada vez más complejas, más mestizas, menos comprehensibles en los clichés normalizadores de la «nación» y de las viejas identidades políticas.

En cierto modo, muchas de las demandas del movimiento surgidas al calor de estos debates se pueden reducir a unas pocas consignas. Valga aquí discutir algunas de ellas, menos

con el propósito de declarar posiciones «definitivas», o peor aún acuerdos de consenso y prescripciones programáticas, que de argumentar posiciones útiles para el movimiento. Sabemos que sólo en la discusión abierta y en el propio camino que abran las luchas se podrá determinar la forma concreta de las propuestas y de las alternativas que ahora sólo se esbozan. Sirvan, en cualquier caso, estos cinco puntos como posible material para el ciclo de movilizaciones que se abre en los próximos meses:

1. *Cancelación generalizada de las deudas*. El gobierno de las finanzas se sostiene única y exclusivamente sobre la propiedad de un conjunto de títulos que obligan a las administraciones públicas, a las economías domésticas y a la gran mayoría de las pequeñas y medianas empresas a una servidumbre por deudas destinada a durar décadas. Gobiernos y banqueros han convenido la validez de estos títulos por encima de las condiciones en las que fueron adquiridos y de los costes sociales y económicos que implican. La cuestión radica en si este acuerdo sobre la inviolabilidad de estos títulos es aceptable o no, más allá de los intereses de un estrecha minoría social. Por un lado, la adquisición de la propiedad de estos títulos, y las condiciones a las que obligan —comisiones, tipos de interés, plazos, compensaciones en caso de impago—, han sido fraudulentas en buena medida. En una democracia que funcionase, los bancos deberían explicar por qué concedieron miles de millones de euros en créditos a familias de bajos recursos para que adquiriesen una vivienda a unos precios notablemente inflados. Deberían dar explicaciones sobre el gran número de ejecuciones hipotecarias que se han producido en estos años, y que han dejado a la gente sin su casa, lo que en algunos países ni siquiera cancela sus deudas.[25] Igualmente tendrían

25 Es el caso, por ejemplo, de España donde los préstamos se dan con garantía personal. Esto quiere decir que en caso de impago, el banco se queda con la vivienda (dándose por satisfecho si la subasta al 50 % de su valor original) al tiempo que el hipotecado seguirá debiendo al banco la

que rendir responsabilidades por los ataques especulativos que han puesto al borde de la quiebra a los Estados europeos más frágiles, al mismo tiempo que recibían miles de millones en ayudas públicas para equilibrar sus delicados balances. Por su parte, los gobiernos y la Unión Europea tendrían que dar cuenta de por qué aplicaron las políticas de desregulación financiera y de subvención fiscal al beneficio financiero, permitiendo la institucionalización de las prácticas especulativas que finalmente llevaron a la crisis. Y también por qué aplicaron tanta generosidad en los rescates bancarios sin ninguna contrapartida significativa.

Como en Grecia, «No debemos, no vendemos, no pagamos», quiere decir que estas deudas han sido contraídas de forma ilegítima por medio de prácticas abusivas avaladas por unos gobiernos irresponsables. El interés de los acreedores no puede estar por encima de cualquier criterio social y económico. Más aún cuando la deuda se ha convertido en el principal impedimento a la recuperación europea. El elevado endeudamiento de las familias deprime el consumo privado, y el endeudamiento de los Estados, el consumo público. Insistir en las obligaciones que imponen unos títulos de deuda sobrevalorados en una clima económico marcado por la depreciación generalizada de todos los activos, es imponer a la sociedad unos costes que sólo benefician a los mismos gestores y ejecutivos financieros que nos arrastraron a la crisis.

De hecho, tarde o temprano se tendrá que aceptar que buena parte de la deuda contraída en estos años no podrá ser cobrada. El dilema reside en quien pagará los platos rotos de la voracidad financiera: los Estados —y por lo tanto las poblaciones— o los bancos. Los rescates bancarios, los ajustes presupuestarios, el sacrosanto principio de control de la inflación parecen haber alineado a la Unión Europea y a los gobiernos con la primera opción. Al movimiento y a la sociedad en general sólo nos queda la segunda.

---

diferencia del precio de subasta respecto a lo que le quedase de pagar del principal, más las costas de la subasta, más los intereses.

La primera apuesta del movimiento europeo debería pasar, por lo tanto, por la ruptura de la cadena de la deuda. Sencillamente se trata de declarar de forma decidida que no pagamos. La generalización de los impagos —desde las familias hasta los Estados— aceleraría la crisis bancaria que hasta ahora se ha tratado de sortear con un éxito relativo. Seguramente desencadenaría una carrera de quiebras bancarias, al tiempo que deprimiría el crédito privado y las tradicionales vías de financiación de los Estados. Como sabemos bien, este amenazante escenario sirve de chantaje permanente para plegar las

políticas públicas a los intereses de los mercados. Sin embargo, un impago ordenado y dirigido políticamente por el movimiento podría reactivar los mecanismos de crédito a través de formas cooperativas y de instrumentos públicos, siempre sometidos a severos controles democráticos. Con este programa de creación de canales alternativos de crédito, los impactos negativos de un impago serían seguramente menores y más breves que los que estamos sufriendo, y que seguiremos sufriendo, mientras dure esta larga depresión.

Los problemas reales son, en definitiva, meramente técnicos y consisten sencillamente en reestructurar el sistema financiero para que funcione como un medio eficaz y no usurario de financiación de aquellas actividades con valor social y económico. Pero los obstáculos son sobre todo políticos; se trata de quitarse de en medio a las élites financieras y económicas que hasta ahora han dirigido la política europea. Semejante apuesta pondría en suspenso el actual modelo de beneficio basado en la financiarización, y supondría el mayor cambio social y económico de Occidente en el último medio siglo.

2. *Redistribución y reparto de la riqueza.* La crisis se nos ha presentado como un problema de escasez. Escasez de empleo, escasez de dinero público, escasez de crédito, escasez de recursos en general. Y sin embargo, como se ha visto, nuestro tiempo sigue siendo más rico que cualquier otro que haya conocido la historia. El problema reside en reconocer las formas actuales de la riqueza, en analizar los mecanismos de

extracción de la misma y en proponer e imponer los medios que hagan posible el reparto. La financiarización, las medidas de desregulación e institucionalización de la especulación, la subvención fiscal a los ricos, la depresión de los salarios y el desmantelamiento del Estado social han generado desigualdades sociales que no se conocían en Europa desde antes de la II Guerra Mundial. La crisis urbana que asola a casi todas las grandes ciudades europeas es sólo una de tantas consecuencias de estos procesos.

Como sucede con las políticas de protección de los acreedores, las crecientes desigualdades sociales se han convertido también en un poderoso factor de bloqueo en la reanudación de la acumulación de capital. Por un lado, el problema de la demanda, y especialmente del consumo doméstico, es hoy el impedimento principal a la recuperación económica. Por otro, la reconstrucción de la demanda agregada, vía burbujas patrimoniales y endeudamiento masivo, como ocurrió en la década de los noventa y dosmil, se ha convertido en una solución no sólo improbable, sino también peligrosa. La paradoja, de nuevo, es que los intereses de un reformismo «desde arriba» —que efectivamente no tiene visos de producirse— y la reivindicación de igualdad y justicia por parte del movimiento, podrían tener un punto de encuentro en la redistribución del ingreso social.

Pero al igual que ocurre con la posibilidad de promover un impago dirigido políticamente, los obstáculos son sobre todo políticos, no técnicos. Varias décadas de «políticas asistenciales» a las grandes corporaciones, de beneficio y subvención a los más ricos, de promoción de la especulación financiera, no van a ser invertidos sin resistencia, aun cuando las reformas puedan ser sorprendentemente fáciles. A escala europea y de cada Estado, se trataría de volver a imponer un sistema fiscal progresivo, menos basado sobre los impuestos indirectos que sobre los directos. Habría igualmente que gravar más y mejor los grandes patrimonios y las rentas de capital que, especialmente cuando se trate de meras plusvalías financieras, tendrían que estar

sujetas a los tipos impositivos más altos. El negocio bancario debería estar también más regulado, atado por mayores controles y mayor transparencia, además de ser sometido a impuestos «especiales», que se correspondan con el aval «especial» que les ofrece el Estado como prestamista en última instancia. A nivel internacional se podrían imponer fuertes restricciones y regulaciones a los mercados de derivados y una tasa impositiva a los movimientos de capital. Del mismo modo, los paraísos fiscales, la evasión de capitales y el fraude internacional podrían ser erradicados con sólo un poco de voluntad y con la exigencia de total transparencia a las agencias financieras.

La aplicación, por parcial que fuera, de estas medidas cambiaría las reglas de distribución de la renta, restringiendo los movimientos especulativos y premiando las inversiones socialmente útiles. En cierta forma, aquí sólo se muestra lo que ya debiera ser evidente tras tres décadas de neoliberalismo triunfante: que el problema social se encuentra menos en la pobreza, que en la riqueza; o mejor dicho, que el problema no es la «falta de caridad», sino los mecanismos institucionales que permiten una fuerte concentración del ingreso en las minorías sociales de mayor poder y recursos.

Por otra parte, la reforma fiscal funcionaría como el perfecto opuesto de las prácticas predatorias de la financiarización. Y se podría acompañar de toda clase de tasas específicas sobre los costes ocultos (las huellas sociales y ecológicas) que produce el expolio capitalista-financiero[26]

26 Los actuales sistemas contabilidad no recogen ninguna de las externalidades (los costes y beneficios ocultos) que continuamente se producen en la actividad económica corriente. Por ejemplo, la tala de un bosque primario en un país tropical se contabiliza en el PIB con el precio, muchas veces irrisorio, que la empresa maderera paga al país en cuestión. Esta acción supone así un incremento del PIB. Sin embargo, los costes de la tala, como la pérdida de los usufructos directos que ese bosque reportaba a las comunidades campesinas adyacentes, en forma principalmente no monetaria, no tienen ninguna expresión contable en el PIB. Lo mismo ocurre con las prácticas contaminantes de buena parte de la actividad industrial o de nuestro sistema de transportes. Otro ejemplo: cuando se privatiza un servicio público y se externaliza su gestión, el efecto puede

como ecotasas por la contaminación y la destrucción de recursos naturales; «socio-tasas» por la privatización de las principales garantías sociales; «cuido-tasas» por la destrucción de la cohesión social y la fragilización de las existencias de la mayoría, etc.

Con las rentas generadas por las nuevas fórmulas impositivas, estaríamos en disposición de ensayar distintas modalidades de acceso al ingreso, como la Renta Básica. Ésta tendría el efecto positivo de permitir formas de vida que no estarían obligadas a pasar por empleos asalariados altamente precarizados e infrarremunerados. Además, la Renta Básica tiene la ventaja de reconocer que el pleno empleo es una ilusión y que éste sólo se consigue a través de salarios de miseria, en demasiadas ocasiones en trabajos de poco o ningún valor social. La liberación masiva de tiempo social de la pena del salario permitiría dedicar nuevas energías a labores de formación, cuidado y reproducción, a la participación cívica y política, y a todo aquello que siendo extremadamente útil a la sociedad no viene reconocido —y probablemente no deba serlo— bajo la forma del salario.

Medidas redistributivas, como la Renta Básica u otras parecidas, deberían ir también acompañadas del ensayo de nuevos modelos productivos sustraídos a las lógicas de acumulación y beneficio propias de las economías capitalistas. Se trata de anteponer la autonomía de las poblaciones, la cohesión social, la democracia económica y la escala «humana» de los proyectos empresariales al gobierno financiero y los privilegios de las grandes corporaciones. Los prototipos de esta nueva economía social pueden encontrarse ya en la multitud de experiencias que han explorado campos tan diversos como la agroecología, la vivienda social o la banca ética, normalmente con formas jurídicas de tipo cooperativo.

---

ser un relativo incremento del PIB, debido a las nuevas transferencias e intercambios que supone la gestión privada, pero en ningún caso se contabiliza la degradación de la calidad del servicio que implica la privatización.

3. *Democracia*. «No nos representan». «Lo llaman democracia y no lo es». De El Cairo a Atenas y de Túnez a las plazas de Barcelona y Madrid, «democracia» ha sido la consigna más repetida. La exigencia de democracia alude al secuestro de la discusión y la decisión por parte de las principales instituciones «representativas». Reniega de la corrupción del sistema de partidos. Denuncia la estrechez de los canales de participación efectiva al margen de las formaciones electorales, así como los escasos mecanismos de control sobre los representantes electos. Apunta a la subordinación de las instituciones políticas a los intereses económicos de las grandes corporaciones. Rescata viejos principios republicanos y acusa a las leyes y decretos de no ser iguales para todos. Muestra la complicidad de los grandes sindicatos en la gestión de unos mercados de trabajo cada vez más precarizados. Dirige el dedo sobre los medios de comunicación, desvela sus intereses, reconoce sus manipulaciones, los tacha como un espacio impropio para una verdadera discusión democrática. El movimiento crea, en paralelo, los medios por los que él mismo se constituye en potencia de democracia: las asambleas, los mecanismos de creación de consenso, un nuevo espacio público de discusión y decisión al margen de los grupos de prensa.

Dicho de otro modo, el movimiento ha surgido de la denuncia de un sistema político que, a pesar de reconocerse formalmente en el término «democracia», permite muy poca participación efectiva a los ciudadanos, invariablemente condenados a delegar todas las decisiones cruciales en una clase política cada vez menos fiable. El movimiento se ha alimentado, a su vez, de un ejercicio de democracia directa que se practicaba en las asambleas ciudadanas (tanto físicas como en la red) y en la discusión libre y sin intermediarios.

El reto radica, para muchos, en cómo instituir nuevas formas de democracia: qué tipo de reforma del sistema electoral, qué nuevos instrumentos de participación y de toma de decisiones, qué otras instituciones se pueden crear más

allá del sistema de partidos. Son cuestiones técnicas, pero también políticas, que atañen a la parte institucional del sistema político, al desmantelamiento de los bloqueos y de las trampas legales que hoy impiden el ejercicio de una democracia más real, más directa. Pero el movimiento ha descubierto también que la fuerza que hace efectiva la democracia no proviene propiamente de las instituciones, sino de algo mucho menos tangible: de la posibilidad de que literalmente «todo» pueda ser puesto en cuestión, de la extensión capilar de la discusión política hasta el último rincón de la sociedad y de la participación entre iguales como principio elemental de decisión. Se trata de elementos que no tienen posibilidad de una expresión institucional acabada, que no se pueden cerrar en un procedimiento formal «democrático». El reto es pues reinventar la política y con ello provocar un constante reencuentro con la pasión cívica.

Y es esto último, lo que realmente genera miedo y pavor en la clase política: el ejercicio de la participación masiva que despoja a expertos y representantes de su condición especial como sujetos de la decisión, y los devuelve a la situación de «uno más entre muchos». El miedo a la democracia se expresa casi siempre en términos de responsabilidad: «Dejad que decidan los que saben», «Tanta pluralidad de opiniones sólo puede acabar en un guirigay», «Ante todo se debe garantizar la gobernabilidad». Son los mismos fantasmas del orden, convocados ahora contra el caos de la democracia, como si el actual «orden político» no fuera una gigantesca fuente de desorden, de entropía generalizada manifiesta en la corrupción política y en el saqueo del gasto público.

En definitiva, una de las grandes preguntas que el movimiento deberá responder en los próximos años es la de cómo asegurar las conquistas institucionales que pueden permitir que la apertura democrática sea efectiva y perdurable a todas las escalas de gobierno, al tiempo que se anima una sociedad política viva, permanentemente calentada por la discusión pública y el interés por los asuntos comunes.

4. *Lo común*. El 15M y los indignados griegos se comprenden como procesos de reinvención de la pasión política, y con ella de la preocupación y la discusión sobre los asuntos comunes. La democracia, los servicios públicos, la distribución de la riqueza, son todas ellas cuestiones relativas a lo común, a todo aquello que afecta a todas y a todos. Pero lo común no se reduce únicamente a lo que normalmente entendemos con el nombre de las «cuestiones públicas». Históricamente ha sido un importante modelo de propiedad y gestión de los recursos productivos.

Los bienes comunes, o comunales, aluden efectivamente a un régimen de propiedad y de manejo que no es ni público, ni privado, sino que obedece a formas de gestión y uso determinados por una comunidad concreta que se convierte en titular de la propiedad de esos bienes. Ésta regula los usos de los recursos, sin que por ello pueda negar a ninguno de sus miembros el acceso a los mismos. Los comunales han sido probablemente la forma de propiedad y gestión más probada en la historia de la humanidad. La mayor parte de las sociedades campesinas han dispuesto de una serie de bienes (selvas, bosques, montes, tierras de labor, ríos, mares) en régimen de comunes. En algunos casos, los comunales eran tan importantes que proporcionaban los principales medios para el sustento de toda la comunidad. En otros, servían al menos como amortiguador de las desigualdades sociales, complementando los ingresos y los recursos de los sectores más frágiles.

El interés de los comunales es doble. Por un lado son inalienables, no pueden ser enajenados, porque propiamente no pertenecen ni al Estado, ni a ningún particular, sino a la sociedad en su conjunto. Por otro, los comunales dependen directamente de la comunidad, esto es, los recursos están en manos de sus usufructuarios, lo que permite, y en cierto modo exige, formas de gestión directa y democrática de los mismos.

En términos históricos, el avance del modo de producción capitalista, y también de algunas formaciones económicas precedentes, como las oligarquías feudales, se ha servido de la destrucción de los comunales. La sola posibilidad de formas de vida al margen del trabajo asalariado, que en efecto permiten los comunales, es contraria a la lógica de la acumulación, y su exigencia histórica de disponer del mayor número de brazos «libres de toda atadura» y de tierras «libres de usos improductivos». Por eso, una de las formas históricas por las que el sistema capitalista ha resuelto siempre sus propias crisis ha venido de la mano de la «desamortización» y de la privatización de los bienes comunales que todavía restaban.[27] En cierto modo, no es algo muy distinto a lo que ahora ocurre con el ataque «neoliberal» sobre los bienes públicos.

Efectivamente, durante las pasadas décadas, los servicios públicos elementales como la educación o los sistemas de salud, que componen lo principal del llamado Estado de bienestar, han funcionado como los principales bienes comunes de las naciones europeas. La titularidad estatal de los recursos, los modos tecnocráticos de administración y el muchas veces notable déficit democrático de su gestión no impidió, al menos no del todo, que estos servicios garantizaran una cierta autonomía, por parcial que fuera, a la reproducción social frente a las lógicas predatorias del mercado. Y es este límite al mercado, lo que se ha convertido en el principal objetivo del neoliberalismo.

Como se ha visto repetidas veces en este texto, la ola desamortizadora de estos años ha afectado a casi todos los bienes de propiedad pública, con independencia de que éstos pudieran o no ser gestionados de forma eficiente por

27 De hecho, este proceso de privatización, no se puede dar por terminado. Incluso en la vieja Europa, casi todas las legislaciones conservan restos del viejo estatuto jurídico de los comunales. Se trata de los bienes llamados de dominio público, entre los que todavía se comprenden algunos montes, bosques, zonas marítimas y bienes inmateriales, como el conocimiento o las obras intelectuales, siempre que hayan pasado setenta años desde la muerte de los autores.

medio de empresas con ánimo de lucro. No obstante, para ser justos, habría que reconocer que el éxito de esta nueva forma de violencia contra la propiedad pública no se debe únicamente a un complot urdido de espaldas a la población —si bien la lectura de los documentos de la UE no parece sugerir lo contrario. En parte al menos, la crítica liberal a la propiedad pública apunta bien sobre la arbitrariedad y el autoritarismo que supone la tutela estatal. Y esto aunque la alternativa propuesta —la privatización y los mecanismos de mercado— sólo haya servido para generar nuevos nichos de negocio para las grandes multinacionales de servicios. De otro lado, la propiedad pública, especialmente cuando el control democrático sobre el Estado es tan débil y la corrupción y la degeneración del sistema de partidos es tan fuerte, no es garantía suficiente para que las comunidades puedan disponer de unos recursos que le son propios por derecho.

En este sentido, las formas de propiedad y gestión comunal pueden suponer un contrapeso efectivo a la privatización. La simple aceptación de que los servicios públicos son en realidad bienes comunes, convierte automáticamente al Estado en un mero intermediario, susceptible de ser depuesto en sus funciones de gestión, sustituido por otras instituciones más fiables. Y lo que es más importante, el retorno a un nuevo sistema de propiedad en régimen de comunales podría convertirse en una interesante palanca institucional para la democratización de los servicios públicos, y de todos aquellos bienes y recursos que la sociedad considere imprescindibles para su propia reproducción, incluidos buena parte de los bienes naturales ahora en franca pendiente negativa, precisamente por la notable «eficiencia» de las formas de explotación privada.

Se trata de un conflicto que viene dándose desde hace cierto tiempo en el ámbito del llamado procomún del conocimiento, y en los aspectos relativos a los derechos de autor y la propiedad industrial. Como se sabe, Internet y las nuevas tecnologías han permitido condiciones de acceso al conocimiento

y a la cultura potencialmente universales; basta un terminal de ordenador y una conexión de red. Las leyes de propiedad intelectual e industrial constituyen, por contra, las formas modernas de apropiación y expolio de estos comunales del conocimiento. La cuestión está en si este conflicto en el ámbito del conocimiento, que tanta trascendencia tiene para el futuro de nuestras sociedades, no puede ser en cierta forma parecido al que se da en otros campos como los bienes naturales o los servicios públicos.

5. *Europa*. Europa como problema, como personificación de las instituciones que han dirigido los golpes de la crisis contra las poblaciones. Pero Europa también como conflicto, como territorio privilegiado de los embates del movimiento. Por pura necesidad, el movimiento se ha visto forzado a hacerse europeo. No se trata sólo de que su contraparte venga de la mano del supragobierno europeo y de las grandes corporaciones financieras del continente, sino también y sobre todo, de que el movimiento sólo puede ser fuerte a una escala europea. En ningún momento ha sido tan cierto el viejo *adagio* de los límites de la «revolución en un solo país». Ni siquiera si las experiencias del 15M o de las plazas griegas tuviesen la fuerza suficiente como para imponer su poder destituyente hasta el punto de desbaratar los alineamientos del gobierno y de las oligarquías de sus respectivos países, o de imponer un impago unilateral de la deuda de sus Estados, podrían conquistar la viabilidad de un modelo social y económico alternativo. El castigo de los mercados financieros sobre el país díscolo se desplegaría en una brutal escalada que empezaría con la fuga masiva de capitales, seguiría con la clausura de todos los canales de financiación del Estado y acabaría con la retirada del euro y un fuerte *crash* económico. Sólo de una forma concertada se puede oponer una fuerza suficiente a los intereses y los privilegios de las oligarquías financieras.

Valga decir que incluso Europa, la misma que en los pasados siglos se autoproclamara como el centro del mundo, es hoy sólo una región más en el mapa global, en concreto la

península más occidental del continente asiático. Las otrora potencias mundiales (Francia, Inglaterra, Alemania) son pequeñas provincias cuando se consideran por separado. Y al igual que, más allá de las desbandadas y el colapso, su único destino posible es trabajar unidas, en solidaridad mutua y con el sempiterno «Otro» europeo (los países de la orilla sur del Mediterráneo), la única posibilidad para el movimiento es su extensión y contaminación a escala continental.

La apuesta por un reparto efectivo de la riqueza financiera, de poner coto al expolio financiero, de gravar las rentas de capital de una forma eficaz pasa, en efecto, por la escala europea. Por eso, la democratización de las instituciones europeas debe empezar por tomar Bruselas y poner en retirada a los poderosos lobbies europeos. Igualmente se deberían crear controles democráticos sobre las políticas económicas, y especialmente sobre el Banco Central Europeo. Habría también que convertir al Parlamento y a todas las instituciones europeas en órganos realmente democráticos y crear sistemas fiscales y presupuestos europeos capaces de servir como instrumentos eficaces para la distribución de la riqueza y el reparto social.

En otras palabras, el progreso de una democracia europea, que realmente lo sea, sólo puede ser viable desde una posición declaradamente «no nacional». La reacción nacionalista a la crisis y el recurso al privilegio del refugio nacional —especialmente para los Estados más ricos— es quizás la peor y las más peligrosa de las alternativas al movimiento europeo. En este terreno, las formaciones populistas, con sus máquinas de simplificación de la complejidad social en polaridades sencillas («ellos / nosotros») y de proyección de los malestares en el odio hacia el Otro (fundamentalmente el extranjero), se mueven infinitamente mejor. En el mejor de los casos, un escenario del «sálvese quien puzeda de las naciones europeas» sólo puede dar lugar a una competencia más intensa entre territorios, lo que sin duda acabará por resultar en un juego de suma negativa.

La mejor apuesta para el movimiento es la de reinventar la democracia europea a partir de un vínculo político no fundado en la nación. Una apuesta que pasaría por pensar Europa como un cuerpo político que no tiene más fundamento que la voluntad de aquéllos que lo componen; que el acto de decisión colectiva que trata de poner en marcha el propio movimiento contra la crisis. Tal cuerpo político tampoco se podría constituir sobre un vago europeísmo que a nadie convence, y menos aún sobre una historia o una cultura común que parece estallada en metrópolis y ciudades cada vez más complejas y mestizas. Su consistencia sería meramente política, y por esa misma razón cabría esperar una extensión tanto hacia el Este como hacia el Sur del continente, sobre la base del advenimiento de formas democráticas potencialmente globales.

Estos cinco puntos, al igual que otros muchos —o los mismos pero planteados de distinta manera— que vienen corriendo de boca en boca en las asambleas y foros del movimiento, remiten a preguntas que, de una u otra forma, se han planteado todos los movimientos históricos por la democracia. Nuestro sistema político, nuestra forma de gobierno, ¿proporciona igualdad de oportunidades para la decisión y participación de todos los sujetos? ¿Evita, mejor que otros, el dominio arbitrario, la servidumbre y la marginación política? ¿Y la corrupción, los estatutos de privilegio y el autoritarismo? ¿Proporciona los medios para el estímulo de la inteligencia colectiva aplicada sobre los asuntos comunes? ¿Respeta y promueve la voz de las minorías, las opiniones menos corrientes y las soluciones más incómodas?

El sistema de partidos de las democracias europeas, así como los regímenes autoritarios y presidencialistas del Norte de África —no se olvide, también formalmente democráticos— parecen haber respondido mal a estas preguntas, y lo que es más grave, lo hacen cada vez peor. El nombre «democracia» y la apelación al principio de representación

no sirven, y no deben servir, como paraguas y justificación de cualquier cosa. Las formas de democracia occidentales no son las únicas que han existido a lo largo de la historia, ni son desde luego tampoco las únicas posibles. Instituciones tan naturalizadas como los «partidos políticos», o los «sistemas representativos», ni siquiera tienen por qué ser centrales en un sistema democrático. El movimiento lo sabe y ha empezado a ensayar otros medios de discusión y decisión.

Del mismo modo, el movimiento europeo se ha planteado otras de las preguntas cruciales para toda democracia que realmente se tome en serio: ¿proporciona nuestro sistema económico bienes y servicios en cantidad y calidad suficiente? ¿Lo hace en condiciones de acceso potencialmente universales (y por lo tanto para todos), al tiempo que conserva y amplía la riqueza común, incluidos los bienes naturales e inmateriales, como el conocimiento y el patrimonio cultural? El capitalismo financiero de los últimos treinta años, de origen anglosajón pero bien traducido y asimilado por la Unión Europea, ha demostrado un estrepitoso fracaso a la hora de contestar a estas preguntas. Hoy los salarios europeos son iguales a los de hace dos décadas, las desigualdades sociales son mayores, la calidad y el acceso a las prestaciones sociales han sufrido un considerable deterioro, al tiempo que los equilibrios ecológicos, tanto regionales como globales, no han dejado de precipitarse por la cuesta abajo de un deterioro muchas veces irreversible. Los avances relativos, que en estas materias experimentaron algunos países durante los años dosmil, se han esfumado en estos cuatro años de crisis. Como se ha tratado de explicar, la insistencia en las mismas recetas neoliberales condena a la Unión Europea a un escenario de estancamiento, a un juego de suma cero en el que los beneficios financieros y de las grandes corporaciones se obtendrán a partir de un creciente expolio del cuerpo social, y esto a una escala todavía mayor y más brutal que la actual.

Por supuesto, a la hora de contestar con alternativas a esta pregunta, habrá que hacer frente a otro conocido chantaje: «O aceptáis lo que hay, o acabaremos en el más absoluto de los desastres económicos», sempiterna variación del espantajo del socialismo totalitario. Pero lo cierto es que pensar hoy un horizonte postcapitalista —o que al menos trascienda las formas más predatorias y brutales del actual capitalismo— no significa reivindicar con nostalgia el viejo Estado de bienestar, y mucho menos las economías planificadas del socialismo real; de hecho, quizás nunca se trató de eso. Pensar este horizonte más allá de lo actualmente existente pasa por diseñar una economía que dote de autonomía a las personas, que no las subordine a la explotación y a la servidumbre. Pasa por emprender reformas contables, que modifiquen los criterios al uso de medición de la riqueza, por introducir medidas que recojan el valor social de aquellas actividades que son fundamentales para la vida y el bienestar común, al tiempo que evalúan de forma precisa la destrucción del medio ambiente y el deterioro de las condiciones de vida. Pasa por reconocer la enorme riqueza existente y reivindicar su reparto, no sólo como medida de justicia social, sino de eficiencia económica. Pasa, en definitiva, por pensar y apostar por evitar el desastre de este sistema económico: la crisis financiera, la crisis social y el terrorífico colapso ecológico en ciernes. Y todo ello a una escala que sólo puede ser al menos regional (valga decir aquí Europa), si no global.



LM01. **Manifiesto por Madrid.**
Crítica y crisis del modelo metropolitano
Observatorio Metropolitano
PVP. 4 € (72pp.)

LM02. **La crisis que viene.**
Algunas notas para afrontar esta década
Observatorio Metropolitano
PVP. 6 € (143pp.)

LM03. **Crisis y revolución en Europa.**
People of Europe, rise UP!
Observatorio Metropolitano
PVP. 6 € (152pp.)

LM04. **La Carta de los Comunes.**
Para el cuidado y disfrute de lo que de todos es
madrilonia.org
PVP. 6 € (64pp.)